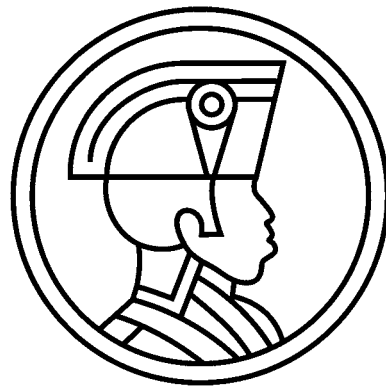




Así como fracasó el llamado socialismo real, la tesis socialdemócrata también fracasó (el Estado de bienestar, la tercera vía, eso fracasó). ¡Hay que crear algo nuevo! No basta con reeditar cosas, que todavía existen, pero que no sirven para las empresas que tenemos por delante: enfrentar al imperialismo y proponer al socialismo como alternativa a los cambios del mundo.

Hugo Chávez, 20 de noviembre de 2009

Colectivo editorial



EDITOR PRINCIPAL

Martín Mosquera

EDITORA ASOCIADA

Florencia Oroz

COORDINADOR DE REDACCIÓN

Nicolas Allen

EDITOR INTERNACIONAL

Denis Rogatyuk

TRADUCTOR PRINCIPAL

Valentín Huarte

COLABORACIÓN EDITORIAL

Pablo Abufom Silva
Anahí Durand Guevara
Franck Gaudichaud
Hilary Goodfriend
Georgina Martínez Antúnez
Karina Nohales
Thea Riofrancos

RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN

Cecilia Cowper

DIRECCIÓN GRÁFICA

Alejandro Ros

ASISTENCIA DISEÑO

Silvia Canosa

DISEÑO WEB

dosRíos - Diseño &
Comunicación
Florencia Crocchia
Gastón Mato

CONSEJO ASESOR

Marilena Chauí
Enrique Dussel
Verónica Gago
Álvaro García Linera
Claudio Katz
Claudia Korol
Michael Löwy
Massimo Modonesi
Maria Emilia Tijoux

PUBLICADO POR

Jacobin Foundation

DISTRIBUYE



Jacobin es una voz destacada de la izquierda radical en el mundo que ofrece un punto de vista socialista sobre la política, la economía y la cultura. La revista impresa se publica trimestralmente.

SUSCRIPCIÓN ANUAL

ARS 900 (digital solidaria)
ARS 1500 (digital estándar)
ARS 1250 (impresa
y digital solidaria)
ARS 2500 (impresa
y digital estándar)
USD 12 (digital solidaria)
USD 29 (digital estándar)

Montevideo 31, dpto. 3,
C1019ABA, Argentina
jacobinlat.com
redaccion@jacobinlat.com

©2021 Jacobin América Latina
ISSN: 2718- 6466
Febrero 2021

Se imprimió en
Latingráfica
en enero 2021



Escriben

Arte de tapa: **Lorena Ruiz**

Seth Ackerman es editor ejecutivo de *Jacobin Magazine*.

Gabriela Benza es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de México, docente, investigadora y coautora de *La ¿nueva? estructura social de América Latina* (Siglo XXI, 2020).

Martín Cortés es politólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y autor, entre otros, de *Un nuevo marxismo para América Latina* (Siglo XXI, 2015).

Daniel Carneiro Leão es doctorando en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Juliano Dornelles es guionista y director de *Bacurau*.

Mariana Gainza es doctora en Filosofía por la Universidad de San Pablo y traductora de *La nevadura de lo real* (Fondo de Cultura Económica, 2020), de Marilena Chaui.

Álvaro García Linera es ex vicepresidente de Bolivia (2006-2019) e integrante del Consejo Asesor de *Jacobin América Latina*.

Isabelle Garo es filósofa especializada en las obras de Marx y autora, entre otros, de *Communisme et stratégie* (Amsterdam, París, 2019).

Paolo Gerbaudo es sociólogo y autor, entre otros, de *The Great Recoil* (Verso, 2021).

Emiliano Gullo es periodista. Actualmente colabora en la Revista Anfibia y la Revista Brando, entre otros medios.

David Harvey es profesor distinguido de Antropología y Geografía en el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Sus últimos libros publicados son *The Ways of the World* (Profile Books, 2016) y *The Anti-Capitalist Chronicles* (Pluto Press, 2020).

Ezequiel Ipar es doctor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Gabriel Kessler es doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París), docente, investigador y coautor de *La ¿nueva? estructura social de América Latina* (Siglo XXI, 2020).

Kleber Mendonça Filho es director de cine. Dirigió, entre otras, *Bacurau* y *Aquarius*.

Verónica Mendoza es antropóloga, psicóloga y candidata presidencial de Juntos por el Perú.

Massimo Modonesi es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales de la UNAM, coordinador de *Rivoluzione passiva. Una antologia di studi gramsciani* (Unicopli, 2020) e integrante del Consejo Asesor de *Jacobin América Latina*.

Adrián Piva es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y autor, entre otros, de *Economía y política en la Argentina kirchnerista* (Batalla de Ideas, 2015).

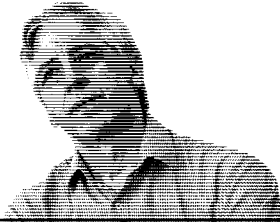
Marcos Queiroz es profesor del Instituto Brasiliense de Derecho Público y doctorando en Derecho de la Universidad de Brasilia.

Lincoln Secco es profesor de Historia en la Universidad de San Pablo y autor, entre otros, de *História do PT* (Ateliê Editorial, 2015).

Andrés Tzeiman es politólogo, docente en la Universidad de Buenos Aires, becario posdoctoral del CONICET y autor, entre otros, de *Radiografía política del macrismo* (Caterva, 2017).

Juan Manuel Villulla es sociólogo, doctor en historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y autor de *Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio* (Cienfuegos, 2015).

Lucía Wegelin es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y docente en la carrera de Sociología de la misma universidad.



F DE FRENTE

06

GAMBITO DE REY

El laberinto latinoamericano

08

LÍNEAS DE SUMINISTRO

Dilemas de la traducción estatal

14

LÍNEAS DE SUMINISTRO

Contradicciones y límites de una estrategia

20

MANO A MANO

«El progresismo no se comprometió con la superación del capitalismo»

M MEDIOS DE DEDUCCIÓN

26

TENDENCIAS

¿Crisis de la democracia o crisis del capitalismo?

30

EMPIRISMO VULGAR

La democracia en cuestión

32 ÁLVARO GARCÍA LINERA

«Soy un leninista de la NEP»

A LAS ARMAS DE LA CRÍTICA

50

CARNE DE CAÑÓN

Entre la inclusión y la igualdad



54 DAVID HARVEY

El ajuste espacial

C CAPITAL CULTURAL

62

TELÉFONO ROJO

En un pueblo llamado Bacurau

68

EXTREMO POR IZQUIERDA

Diego, hijo de Fidel

72 LINCOLN SECCO

¿Qué sucedió con aquel PT?



G LA GUILLOTINA

82

GIRONDINS

No toda multitud indignada expresa una potencia democrática

88

GIRONDINS

Aristas del interregno: el progresismo veinte años después

92

VERSAILLES

Puede fallar

98

THERMIDOR

Me lo gané tu, con mi trabajo

E EXCEDENTE

104

FRENTE POPULAR

Ernesto Laclau: los impases de una estrategia

110

LABORATORIO

La era del pangolín

114

EL BASURERO DE LA HISTORIA

«He salvado a mi país. He vengado a América»

De Frente

AHÍ LA TIENE MARADONA, LO MARCAN DOS

El laberinto latinoamericano

América Latina es la ruina de quienes gustamos pensar en el tiempo largo. Cada vez que parece que podemos empezar a hablar de alguna tendencia regional, de un ciclo, período, etapa, el tablero da un nuevo giro y nos deja pedaleando en el aire, teniendo que tragarnos cualquier afirmación medianamente largoplacista que nos hayamos atrevido a hacer. Y el siglo XXI viene mostrando particular inclinación a hacernos recalculamos casi permanentemente.

Durante las últimas décadas hemos vivido los años del neoliberalismo hegemónico, triunfante y todopoderoso, que parecía nunca acabar. Hemos sido testigos del repliegue de los sectores populares, de su resistencia, y también de una ola continental de estallidos populares casi sin precedentes. Pudimos ver con nuestros propios ojos, sin tener que leerlo en ningún libro de historia, las profundas crisis que sacudieron varios de nuestros países, el freno al modelo neoliberal impuesto en las calles y el posterior ascenso al gobierno de una serie de coaliciones progresistas, nacional-populares o de izquierda.

Estábamos ahí cuando nacieron el «buen vivir» y el socialismo del siglo XXI, siendo testigos de la vuelta a la circulación de la palabra socialismo en nuestra región (y, sobre todo, de su *posibilidad*, durante tanto tiempo reservada de manera exclusiva para la Cuba-de-Fidel). Pero también nos tocó movilizarnos contra varios golpes de Estado, otra imagen que parecía haber pasado definitivamente al basurero de la historia. Primero el intento fallido en Venezuela, luego Honduras y más tarde, bajo distintas modalidades, Brasil y Bolivia, nos dieron un cachetazo de realidad: cuando los pueblos se empoderan, las derechas reaccionan.

Vivimos conscientemente el pasaje del capitalismo como un sistema totalmente fuera de discusión a

un momento en el que, como decía Enzo Traverso en *Capitalismo en Cuarentena* (el primer número de nuestra revista), «hay una conciencia anticapitalista de masas como no hemos visto en las últimas tres décadas». Profundizar esa conciencia pero, sobre todo, transformarla en acción propositiva es el enorme desafío de nuestro tiempo. No es que esto signifique una novedad, por supuesto. La historia del sistema capitalista es, también, la historia de la lucha por la construcción de una alternativa. Pero creo que nunca, como ahora, nuestra propia supervivencia como especie estuvo tan condicionada por el hecho de que logremos vencer en esa batalla.

El nivel de degradación sistémica que presenciamos de manera condensada estos últimos años no deja de sorprender. Lo vemos reflejado en Trump o Bolsonaro, pero ellos son solo la punta del iceberg. El problema es que no se trata de meros individuos (que, por más poderosos que sean, por más lugares de poder que ocupen, siguen siendo individuos), sino de un verdadero movimiento articulado, con una ideología que lo orienta y lo propaga. Esa, creo, es la mayor novedad de nuestro presente: el surgimiento de una «nueva derecha» (o bien la reinención exitosa de la misma derecha de siempre) y la articulación de un discurso extremadamente conservador con capacidad de interpelar de manera transversal diferentes sectores de nuestras sociedades.

La cuestión, entonces, pasa por cómo enfrentar esta ofensiva global. No tengo la respuesta, pero sí algunas certezas. En primer lugar, que no se puede combatir esta batalla con las mismas armas que afrontamos la anterior, en la que el adversario estaba golpeado y carente de un discurso unificador. Esa no es la situación de hoy. La ola de gobiernos progresistas que surcó nuestro continente en la primera década del nuevo siglo se presentó como alternativa a unas de-

rechas neoliberales en crisis y en franco retroceso. Propuso, como propone históricamente el populismo, una división que no era de clases, sino política. Se construyó en base a ese desplazamiento de las contradicciones sociales y se hizo fuerte en un enfrentamiento planteado en torno a dos polos: uno que plantea un capitalismo en el que quepamos todos, democratizante, contra otro que defiende un modelo elitista y excluyente.



La opción correcta parece estar clara. Sin embargo, existe un problema nada menor: en el capitalismo no cabemos todos. Sí es cierto que hay margen para mejorar las políticas de inclusión; sobre todo, cuando las bondades de lo propio se construyen en relación al proyecto de enfrente, de una angustia ilimitada. Pero no se puede incluir del todo sin afectar severamente los intereses de la minoría que siempre sale ganando. Y aún más: tampoco se puede «incluir a medias» si la coyuntura económica no acompaña.

La estabilidad lograda durante la primera década del siglo XXI tuvo su explicación en una coyuntura económica internacional especialísima, que permitió la puesta en práctica de políticas de inclusión social sin necesidad de afectar las ganancias del capital (e, incluso, favoreciendo su incremento). Pero si esa coyuntura no existe —y hoy queda claro que estamos lejos de la reedición de algo similar— hay que elegir.

Mi segunda certeza viene de la mano de esta primera. Y es que no existe proceso democratizador (ni económico, ni político, social o cultural) sin conflicto, por la simple razón de que ampliar los derechos de unos implicará siempre —más o menos directamente— el recorte de los privilegios de otros. La cuestión, ya que la colisión resulta inevitable, pasa por desentrañar cuál es la mejor vía para afrontarla.

El camino se bifurca: o bien, como apostaron buena parte de los gobiernos progresistas de principios de siglo, se procura institucionalizar ese conflicto, absorberlo, tramitarlo dentro de los márgenes de la sociedad política, o bien se apuesta por su radicalización, por el desborde de las estructuras tradicionales y el fortalecimiento de la democracia popular. Pero la primera alternativa no es una verdadera opción si de lo que se trata es de forjar transformaciones duraderas. La administración del conflicto nos inserta en una especie de *loop* histórico en el que volvemos al punto de partida, ya que implica negar las mismas precondiciones de existencia de aquellos gobiernos. Y es que si estas coaliciones progresistas lograron imponerse en las urnas por sobre las fórmulas predilectas del gran capital, corriendo con desventaja tanto económica como mediática, fue precisamente porque estuvieron precedidas por un proceso de movilización, por una activación de las masas populares que hicieron posible su triunfo.

Sobre la ola de gobiernos progresistas, nacional-populares o de izquierda en América Latina se ha escrito mucho. Las páginas que siguen son una apuesta por renovar el debate por medio de un abordaje plural que sirva para enriquecerlo. No buscamos clausurarlo, ni mucho menos. Primero, porque sería (de mínima) un objetivo pretencioso para tan poco espacio. Pero segundo, y más importante, porque tampoco es algo que deseemos, puesto que el hecho de que sea un debate inconcluso significa que las fuerzas que lo protagonizan todavía siguen vivas y que su devenir histórico no se ha solidificado, que sigue siendo maleable. Pero tengo una tercera —y última— certeza: nadie va a regalarnos nada. Si nos sentamos a esperar, si nos quedamos al margen de la pelea por temor a que la crítica a la moderación fortalezca a la reacción, salimos perdiendo. En política no existen los lugares estáticos: quien no avanza, retrocede. ●

Dilemas de la traducción estatal

Elementos para una teoría política de los progresismos latinoamericanos.

A poco más de veinte años del ascenso de Hugo Chávez al gobierno en Venezuela y en medio de avances y retrocesos, momentos expansivos y de crisis, ofensivas conservadoras y neofascistas, triunfos y derrotas, fines de ciclo consagrados —a veces deseados y también desmentidos— el giro a la izquierda en América Latina sigue ordenando el debate teórico-político de la región. En lo que sigue, nos proponemos esbozar algunos elementos teóricos para pensar este proceso histórico.

La resistencia al neoliberalismo y los gobiernos progresistas

Los años 1990 fueron los años de la calle. Protestas, movilizaciones, bloqueos de rutas, escraches... Los sectores populares de los distintos países de la región pusieron en movimiento todo un conjunto de formas de organización y acción plebeyas para enfrentar y resistir el embate neoliberal que se inició con las dictaduras en los años 1970 y que continuó por la vía democrática, luego de las transiciones, durante los dos decenios siguientes.

No es casual si toda esa energía social contestataria asumió un notorio signo antiestatal. Pues la institucionalidad del Estado, por aquellos años, fue la encargada de instrumentar las reformas promercado. Por una parte, llevando a cabo políticas de privatización, desregulación, flexibilización y liberalización. Pero también, por otra parte, haciéndose cargo del disciplinamiento popular por vías represivas. El Estado, por lo tanto, se presentaba como un claro enemigo del movimiento popular. Es por eso que, en aquel contexto, la idea de una exterioridad de las clases subordinadas con respecto al Estado cuadraba a la perfección.

Sin embargo, con el privilegio que otorga la mirada retrospectiva, sabemos ahora lo que ocurrió más tarde. En el ocaso del siglo XX, las movilizaciones populares llevaron el modelo neoliberal a una situación de crisis. Tanto es así que en Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador los estallidos sociales que escenificaron dicha eclosión resultaron contundentes. Las imágenes de sucesiones casi diarias de presidentes, o de primeros mandatarios, huyendo de las sedes de gobierno manifestaban agudas crisis políticas que exigían resoluciones más sofisticadas que el mero gatopardismo.



Preservar esta memoria acerca de la emergencia de los gobiernos progresistas resulta fundamental: no hay tales gobiernos sin la efervescencia popular que los precedió. De eso no deben quedar dudas. Pero aquello que resulta esencial para dar cuenta de lo sucedido con posterioridad a esas crisis es la modalidad (o mejor, en plural, las modalidades) que asumió la sutura de las mismas.

Una alternativa, en ese entonces, era la salida por la vía de la agudización de las recetas aplicadas hasta aquel momento (en función de la excusa predilecta de la ortodoxia económica: las fallas del modelo no son el resultado de las medidas adoptadas, sino de una insuficiencia en las dosis de las mismas, o bien, de una implementación excepcionalmente ineficaz por parte de sus intérpretes). No obstante ello, la incorregible imaginación de la historia le deparó a la región un curso diferente.

Los gobiernos progresistas constituyeron la traducción en materia estatal de la energía social que se desplegó como resistencia al modelo neoliberal y que lo hizo entrar en crisis. Retengamos el concepto de

traducción, que es clave: en ese pasaje, de manera inevitable, algo se pierde y algo se transforma. Pues la expresión de las luchas en el Estado jamás resulta transparente (allí tenemos, indudablemente, una realidad trágica de la política). Como nos enseñó alguna vez Poulantzas, esa expresión se produce siempre bajo la forma de una refracción. Aquella energía social, al expresarse en el seno del Estado, se transforma en materia estatal (en palabras de René Zavaleta: «todo lo que pasa por el Estado, se convierte en materia estatal»... El Estado es, entonces, una síntesis calificada: le otorga su propio color o mensaje a la energía social).

Asimismo, la traducción de la energía social en materia estatal se produce más allá de las intenciones de quienes protagonizan las luchas; de allí que carezcan de sentido las consideraciones que conciben el tránsito desde la sociedad hacia el Estado como una forma de alienación o degradación (moral). De lo que se trata, en todo caso, es de comprender de qué forma los movimientos populares inciden en la modalidad de ese tránsito y qué es lo que se juega —y de qué modo— a nivel del Estado.

Productividad del Estado y autonomía del momento político

La traducción, entonces, no es pura expresión. El Estado convierte la energía social en materia estatal. Pero eso no significa que una vez producida esa expresión la política sea cancelada para abrir paso a un mero ejercicio de reproducción. Especialmente en las coyunturas signadas por crisis, el escenario de desestructuración abre un espacio privilegiado para la intervención política y las instituciones del Estado pueden resultar un terreno fecundo para operar transformaciones sustantivas en la estructura social y en la configuración del poder.

Las relaciones de fuerza construidas a través de la capacidad de síntesis del movimiento popular en su conjunto son vitales para efectuar quiebres en la institucionalidad vigente, y allí la dimensión contradictoria del Estado se hace presente de modo más claro, como una clave para producir rupturas en relación con el anterior orden dominante.

Para ello, el juego político resulta fundamental, y en tal sentido también un aspecto característico en la historia de las sociedades latinoamericanas: los grandes movimientos populares con fuertes liderazgos. Si los contextos de crisis se presentan permeables para la producción de una política transformadora, esta puede llevarse adelante a partir de un impulso y de una capacidad singular de lectura de la coyuntura que interprete la existencia de condiciones fértiles para provocar quiebres en clave liberadora.

Esa singularidad suele jugarse en el diálogo entre, por un lado, una figura política que tracciona y sintetiza el movimiento y, por el otro, la cuestión del Estado (la historia de los grandes movimientos en América Latina es prueba de ello). El andamiaje estatal brinda una fuerza específica para impulsar las transformaciones ante la dilucidación de una oportunidad política. Allí se abre un escenario fructífero para tejer alianzas, subordinar transitoriamente enemigos, privilegiar demandas históricas consideradas amenazantes para los sectores dominantes, entre otras acciones.

Así, los gobiernos se mueven en el incierto terreno de las múltiples relaciones de fuerza que los atraviesan. En ese contexto, el juego político es mucho más que



el dilema entre radicalización y conservación del proceso político, e incluso va más allá de la pregunta —a veces revestida de un halo moral— que gira en torno a la «voluntad política». Se trata de la capacidad de leer el tiempo político, en virtud del cual es posible introducir transformaciones en un mapa saturado de tensiones que se contraponen.

De nada sirven los saltos al vacío. La política, entendida en la senda abierta por Maquiavelo y Lenin, supone una dialéctica de medición de fuerzas con el adversario. La acumulación de fuerzas propias, el desgaste de las enemigas, la detección de los puntos neurálgicos donde se dirime el poder y las coyunturas indicadas para producir los quiebres resultan las condiciones decisivas para avanzar en las transformaciones. Por fuera de ellas, la vocación radicalizadora es pura escolástica y a menudo oculta la hipótesis de que los gobiernos son, *por principio*, incapaces de protagonizar —o siquiera de participar de— un escenario de acumulación política de los sectores subalternos.

El gobierno no es el Estado

Una característica nodal de los progresismos latinoamericanos es que en ellos se funden contradictoriamente dos temporalidades. Por una parte, la de la crisis del neoliberalismo en nuestra región, que ya mencionamos. Pero, por otra parte, nos enfrentamos a la temporalidad de un proyecto neoliberal que continúa su despliegue en forma despiadada a nivel internacional. Un desarrollo que se ha vuelto aún más virulento luego de la crisis financiera del 2008, a partir de la cual, como respuesta, el neoliberalismo ha reforzado su faceta autoritaria.

Es llamativo que este elemento no esté más presente en los análisis de los progresismos, pues resulta ineludible: el capitalismo no se desenvuelve estrictamente en un espacio nacional, sino que, como nos explicaron Marx y Engels hace más de 170 años, es fundamentalmente un proceso de universalización. La primacía del neoliberalismo a nivel global no es un dato accesorio o secundario.

En ese sentido, debemos subrayar que los progresismos se desenvuelven, con más o menos fuerza, a contracorriente de la dinámica dominante en el capitalismo contemporáneo. Y, por lo tanto, deben pelear en forma permanente contra ella y frente a los condicionamientos que ejerce. La presión de la «diplomacia financiera» internacional, los movimientos ilimitados de capitales que están «por encima» de las fronteras nacionales, la desregulación de las normas laborales y la liberalización comercial, entre otros aspectos, son dinámicas constitutivas del capitalismo actual. Y, por ende, resultan determinantes en las disputas que enfrentan diariamente los gobiernos progresistas.

En materia política, ello nos obliga a recordar una tesis que, creemos, debe constituir el punto de partida del debate sobre el siglo XXI latinoamericano: *el gobierno del Estado no es equivalente al poder del Estado*. Esa distinción es crucial. Los gobiernos progresistas han llegado al gobierno, pero bajo ningún aspecto se hicieron con el poder del Estado: esto es así, desde ya, en el sentido ampliado (que contiene las instituciones privadas asociadas a la reproducción del orden), pero también en el más restringido de las instituciones que aparecen como Estado (a modo de ejemplo, se puede visitar el reguero de ataques de los poderes judiciales

Los progresismos se desenvuelven, con más o menos fuerza, a contracorriente de la dinámica dominante en el capitalismo contemporáneo.

a los procesos de cambio en los distintos países de la región). Por eso son gobiernos fundamentalmente frágiles y permanentemente asediados por factores de poder real capaces de limitar sustantivamente sus márgenes de acción.

Es en ese sentido que sostenemos que los procesos progresistas no son de ofensiva. Por el contrario, son de resistencia a un neoliberalismo hegemónico (y, últimamente, también fascista).

La confusión entre gobierno y Estado trabaja en común con la tesis de que toda traducción de las demandas populares en materia estatal es una forma de alienación. De allí surgen las despreciativas figuras de la cooptación, la subordinación o la perversión como nombres para calificar ese pasaje, tanto como la tesis de que los gobiernos progresistas son en realidad meros agentes de la recomposición de la dominación tras la crisis del neoliberalismo. De fondo subyace la concepción de que el Estado retiene para sí una

pulsión conservadora, mientras que los movimientos sociales (y la sociedad civil en general) se caracterizan por una tendencia radicalizadora.

Esta construcción dicotómica termina por inscribir a los gobiernos progresistas en una imposible paradoja: pueden ser criticados por su débil insuficiencia (si no directamente por su impostura y/o simulación) y, al mismo tiempo, se les puede exigir, en nombre del todopoderoso Estado que «ocupan», resolver todos los dramas estructurales de las sociedades latinoamericanas.

La forma fija de la dicotomía entre sociedad civil y Estado, que distribuye de modo muy claro las cargas valorativas (la primera, espacio de la libertad; el segundo, espacio de la alienación), al menos en nuestra región, no remite tanto a las viejas y clásicas teorías políticas decimonónicas, como al tono que tomó la transición democrática de los años 1980. Lo curioso, en todo caso, es que aquel hegemónico lenguaje liberal-progresista haya sobrevivido, apenas transformado, en las interpretaciones presuntamente más radicales de las crisis del neoliberalismo.

Sobre las relaciones de fuerzas y el ejercicio de la crítica

La emergencia y el despliegue de los gobiernos progresistas implicaron la introducción de toda una serie de tensiones al interior de los movimientos populares y de los sectores intelectuales de izquierda. Es decir, instalaron el interrogante político acerca del modo en que las organizaciones y los intelectuales que habían luchado durante décadas para poner en crisis el modelo neoliberal en América Latina debían posicionarse en el nuevo contexto, ante gobiernos que pretendían expresar una alternativa a ese escenario crítico mediante la asunción de la dirección del Estado.

¿Qué hacer frente a gobiernos que impulsan transformaciones pero, al mismo tiempo, reproducen los patrones de dominación característicos de Estados signados por décadas de neoliberalismo? ¿Cómo posicionarse ante gobiernos que pugnan por el cambio pero deben lidiar, a su vez, con las fuerzas sociales (internas y externas) que se resisten a ello por todos los medios?

No se trata de revoluciones, pero las clases dominantes han actuado como si efectivamente lo fueran.

La figura del intelectual suele estar tironeada por la tentación del francotirador, la famosa «piedra en el zapato», cuyo propósito y sentido es el de incomodar al poder, conmoviendo verdades que parecen ya establecidas. Como definición general parece adecuada. El problema es, en realidad, el blanco de ese ejercicio: ¿a quién es preciso incomodar? Es razonable medir los logros de los gobiernos progresistas en relación con los anhelos de los intelectuales (y de las fuerzas cuyas voces silenciadas se supone que deberían representar), o incluso en relación con la consecución —o no— de determinados logros que hacen al acervo teórico-político de las izquierdas. Sin embargo, ese ejercicio puede fácilmente deslizarse hacia una crítica exterior, moral, del proceso político. Esto es: una crítica que no trabaja a partir de las potencias inmanentes del proceso histórico, sino de la posición subjetiva de quien la enuncia.

Esta diferencia requiere volver sobre dos de los puntos antes planteados: por un lado, la necesidad de desarmar la mirada normativa en torno del Estado y los gobiernos y, por otro, partir de la *fragilidad* de los gobiernos progresistas. Estos dos puntos pueden clarificar el dilema en torno de a quién debe incomodar la crítica. El primero, para desacomodar cierta idea de que el otro del intelectual es aquello que aparece como poder político, mientras que las múltiples y difusas formas de poder económico y cultural —que incluyen, a menudo, los densos entramados que financian a los más críticos intelectuales— quedan en



un segundo plano, o ni siquiera son mencionados. El segundo, porque observar con cierta claridad quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles en el terreno de la lucha política es fundamental para toda intervención a través de la palabra.

Solo para insistir en esto último, es evidente que los gobiernos progresistas no constituyen procesos revolucionarios en un sentido clásico, ni mucho menos. Pero allí interviene un elemento central, realismo político mediante: de lo que se trata no es solamente de valorar sus parámetros en relación con la historia de las izquierdas que les precede, sino también de evaluar cuál ha sido la reacción de los enemigos históricos de las clases populares. Y en este punto hay que hablar con claridad: no se trata de revoluciones, pero las clases dominantes han actuado como si

efectivamente lo fueran; y la buena salud de la que nuevamente gozan los golpes de Estado en América Latina es prueba de ello.

La cuestión no pasa entonces por menospreciar el ejercicio de crítica a los gobiernos progresistas, sino por preguntarnos en qué sentido los procesos políticos que tomaron esa forma no constituyen ellos mismos la posibilidad de crítica y confrontación —eficaz, política, capaz de dañar— con la hegemonía neoliberal y autoritaria. En ese sentido, el llamado a una crítica inmanente no es otra cosa que afirmar que el trabajo de crítica intelectual, cuando se da al interior del trabajo de crítica política que estos procesos (dramáticamente imperfectos y, por ello, *necesitantes* de esa crítica) encarnan, redundan en un efecto infinitamente más disruptivo en el dominio del capital. ●

Contradicciones y límites de una estrategia

Bajo el rótulo «gobiernos progresistas» se suele agrupar a un conjunto heterogéneo de experiencias políticas latinoamericanas. Sin embargo, hay que decir que en algunos casos la satisfacción de demandas sociales por parte del Estado no estuvo vinculada a un empoderamiento de las clases populares, sino a una estrategia de desactivación de las movilizaciones previas contra el neoliberalismo.

Insurrección popular y crisis del neoliberalismo en Sudamérica

Durante los primeros años del siglo XXI se desarrolló en Sudamérica un ciclo de rebeliones populares contra el neoliberalismo. Esta crisis del neoliberalismo en la región fue parte de procesos que se estaban desarrollando a escala global. Desde 1997 venían produciéndose una serie de crisis en la periferia: Sudeste Asiático en 1997, Rusia en 1998 y Turquía en 2001 se cuentan entre las más importantes. Pero en el año 2000 el ciclo de crisis llegaba al centro con el estallido de la burbuja de las puntocoms en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el movimiento antiglobalización adquiría impulso a nivel mundial y en Europa se producían movilizaciones importantes.

El freno al Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de hecho, tuvo dos caras. Por un lado, el giro político en Sudamérica fortaleció las posiciones contrarias al avance del tratado. Pero, por otro lado, el impulso de Estados Unidos se debilitó por varias razones. En primer lugar, la movilización antiglobalización de Seattle, en 1999, encontró un fuerte impulso en los sindicatos norteamericanos. Ello señalaba el impacto del proceso de internacionalización capitalista sobre la economía —y, en particular,

sobre la clase obrera estadounidense— caracterizado por una tendencia a la heterogeneización social y productiva. En segundo lugar, por la creciente oposición que encontró en las áreas rurales, afectadas por procesos de concentración y centralización del capital y de la tierra en el marco de fuertes transformaciones productivas y del mercado internacional de granos. Por último, aunque no menos importante, debe tenerse en cuenta el cambio de prioridades en la política exterior de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que le dio un lugar central a la lucha contra el terrorismo. A su vez, durante el primer lustro de los 2000, se hicieron visibles el ascenso de la economía China y sus efectos sobre el comercio mundial. Muchos de estos cambios se profundizarían posteriormente y solo tras la crisis mundial de 2008 podemos hablar de una crisis global del neoliberalismo.

Sin embargo, ese movimiento de placas a escala global adquirió la forma de un verdadero terremoto en Sudamérica. En un contexto de movilización social en toda la región, entre los años 2000 y 2005 se produjeron insurrecciones populares en Argentina, Bolivia y Ecuador. En 2002, Venezuela fue conmovida por un golpe de Estado y una insurrección popular restituyó a Hugo Chávez en el gobierno, dándole un impulso



definitivo a la radicalización del proceso iniciado en 1998, que más tarde se autodefinió como socialista. Hacia el final del ciclo, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela tenían gobiernos surgidos del voto popular que eran definidos como nacional-populares, de izquierda o progresistas. A pesar de su heterogeneidad, se trataba de gobiernos que, en grado diverso, presentaban rupturas con el neoliberalismo, dominante desde las dictaduras militares de los años 1970. En todos los casos, además, las fuerzas políticas que llegaban al gobierno integraban en sus coaliciones a sindicatos obreros y movimientos sociales.

El kirchnerismo: entre el palacio y la calle

El kirchnerismo fue parte de ese proceso regional. Sin embargo, a diferencia del MAS boliviano o del chavismo venezolano —que se constituyeron en el marco de procesos de movilización e insurrección en sus países y jugaron roles de dirección— el kirchnerismo fue exterior a la insurrección de diciembre de 2001.

Solo tardíamente, ya en el gobierno, incorporó en su coalición política a los movimientos sociales de mayor peso. Esta relación de origen constituye una de sus marcas distintivas.

El gobierno de Néstor Kirchner emprendió la tarea de recomponer el poder político incorporando las demandas de los grupos sociales movilizados durante los años 1990 y durante la insurrección de 2001. Su estrategia política se configuró alrededor de una contradicción: por un lado, el motivo dominante de su acción era la restauración del orden. Un aspecto esencial de esa labor era la institucionalización del conflicto social, es decir, su (re)integración en los mecanismos institucionales del estado. Pero, por otro lado, los medios de los que debía servirse para alcanzar ese objetivo lo convertían en expresión de un conjunto de demandas que emergieron desafiantes en las calles, plazas y rutas de diferentes partes del país.

Los procesos venezolano y boliviano mostraron mo-

mentos de aguda contradicción entre el papel de los gobiernos como garantes del orden y el rol de las fuerzas políticas gobernantes como dirección de los procesos de cambio. Dichos procesos se desarrollaron en los límites (continuamente forzados y desbordados, pero no traspasados) de los capitalismo periféricos. Sin embargo, su función no fue esencialmente restauradora, sino de transformación con contenido democrático-radical (en Venezuela al menos hasta el proceso de reforma y referéndum constitucional de 2007, en Bolivia hasta la clausura del proceso constituyente en 2009).

El kirchnerismo, por el contrario, persiguió la incorporación política de la clase obrera y de los grupos sociales desafiantes en los límites de un proceso de recomposición de la acumulación y de la dominación sin reversiones radicales de la reestructuración del capital y del Estado acometida durante los años 1990. Allí radican los límites y contradicciones de la estrategia política kirchnerista.

Contradicciones y límites del modo de acumulación

La ofensiva neoliberal contra la clase obrera y los sectores populares de la década de 1990 transformó radicalmente el capitalismo argentino. En el plano de la acumulación de capital, significó la reorientación exportadora del gran capital industrial y la transformación tecnológica de la producción agropecuaria. El resultado fue una dinámica de acumulación dependiente de la exportación de productos agroindustriales e industriales de bajo valor agregado y la resolución de la contradicción entre burguesía industrial y burguesía agroexportadora. También implicó una fuerte internacionalización de la propiedad y de la lógica de acumulación del capital local en virtud del rol que tuvo la inversión extranjera en la reestructuración productiva. Y una mayor dependencia financiera de la acumulación: endeudamiento público para financiar desequilibrios y endeudamiento privado para financiar inversiones pero, sobre todo, como medio de «valorización financiera» del capital.

Ese arbitraje entre inversión productiva y especulación financiera permite a la gran burguesía maximizar beneficios y reducir la exposición a las crisis recurrentes de la economía argentina. Su resultado fue la interpenetración y la asimilación de comportamientos

de capital nacional y extranjero y de capital productivo y financiero. En síntesis, se consolidó una dinámica de acumulación más expuesta a los vaivenes del comercio mundial de *commodities*, más vulnerable a la volatilidad financiera y con una persistente tendencia a la restricción externa al crecimiento, en el contexto de un capitalismo más internacionalizado y con menores márgenes de acción para los Estados nación. Hay que añadir también la sólida unidad de las distintas fracciones del gran capital en torno a los fundamentos del modo de acumulación. Todo ello implicaba límites estrechos para una estrategia de construcción de consenso basada en la satisfacción de demandas populares.

Desde 2003, la dinámica de acumulación sufrió transformaciones; pero el nuevo ciclo expansivo se desarrolló, en lo fundamental, sobre la base de la reestructuración de los años 1990. La mejora de los términos de intercambio —el ciclo de aumento del precio de los *commodities* iniciado en 2002— y la devaluación inicial del peso posibilitaron niveles de superávit comercial suficientes para reducir la dependencia financiera y postergar las tendencias al desequilibrio externo. Sin embargo, dichas tendencias siguieron actuando, y reemergieron a partir de 2011. Si bien se desarrolló un proceso de sustitución de importaciones industriales, este no revirtió la pérdida de peso de la industria en la estructura económica y profundizó su estructura dual. Por último, la acumulación de capital tuvo un carácter predominantemente extensivo, lo que explica la rápida caída del desempleo entre 2003 y 2007 (aunque, más allá de ese punto, el crecimiento del empleo privado se ralentizó).

Rápidamente, las mismas condiciones que posibilitaron una intervención desde el Estado orientada a la incorporación política y a la satisfacción gradual de demandas populares —tipo de cambio alto, precios elevados de las mercancías de exportación, costos salariales iniciales históricamente bajos, acumulación predominantemente extensiva— le impusieron tendencialmente límites a través de la inflación, el alza de salarios, la apreciación cambiaria y el agotamiento de los superávit gemelos. En un primer momento, dicha intervención encontró un límite en la tendencia de la acumulación de capital a reproducir una estructura económica y social dual que impuso un piso a la reducción de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el empleo precario.

Todo intento de perforar esos pisos llevó al agravamiento de los desequilibrios económicos. Pero, finalmente, más allá de 2011, la restricción externa al crecimiento apareció como un límite infranqueable al desarrollo de la acumulación y, por lo tanto, a la aparente autonomía del Estado con respecto a la acumulación de capital. La crisis de la acumulación capitalista disolvió el fundamento mismo de la intervención estatal «autónoma», y el déficit fiscal y externo presionaron por un ajuste que pareció cada vez más urgente en la medida que el Estado perdía capacidades institucionales. En ese último período, al estancamiento económico correspondió una crisis de la estrategia política que se limitó a una posición defensiva de posposición del ajuste y, finalmente, desde 2014, a evitar el estallido de la crisis.

Contradicciones y límites de la forma de Estado

Donde más avanzó la transformación kirchnerista fue en la disolución de los pilares del Estado neoliberal: suprimió la independencia del Banco Central, subordinó el ala económica del gobierno a su sector político y, por esa vía, transformó la tendencia de largo plazo al desplazamiento de poder desde el poder legislativo al poder ejecutivo en un medio para repolitizar la intervención del Estado en la lucha de clases. Además, desde 2009 avanzó en la recentralización y universalización de la política social y, aunque limitada y parcialmente, también en procesos de reestatización de empresas privatizadas.

Sin embargo, su intento de institucionalizar la relación de fuerzas alumbrada por la insurrección de 2001 a través de un nuevo dispositivo estatal fracasó. El intento de reorganización del aparato de Estado sobre la base de la reestructuración capitalista de los años 1990 condujo a la agudización de la contradicción entre economía y política y atizó el enfrentamiento con las fracciones dominantes del capital local. Por un lado, la (re)producción de una sociedad dual se tradujo en una segmentación de los mecanismos de institucionalización de demandas: negociaciones colectivas para el sector formal de los asalariados a través del Ministerio de Trabajo, asistencia social centralizada a través de la Asignación Universal por Hijo, ampliación de la cobertura previsional y asistencia social focalizada en el núcleo duro del desempleo (precarizados y desem-

Los procesos venezolano y boliviano mostraron momentos de aguda contradicción entre el papel de los gobiernos como garantes del orden y el rol de las fuerzas políticas gobernantes como dirección de los procesos de cambio.

pleados) a través del Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, los insuficientes aumentos de productividad tradujeron como inflación alta y persistente los intentos de transformar las demandas obreras y populares en expansión de la demanda agregada. El resultado fue la desorganización del Estado neoliberal y la configuración de un keynesianismo trunco.

Contradicciones y límites del modo de dominación política

Las dificultades para institucionalizar las relaciones de fuerza dan cuenta de los problemas que el kirchnerismo enfrentó a la hora de construir una hegemonía. Y ello nos lleva al muy trillado tema del populismo.

El núcleo del fenómeno populista en América Latina es la incorporación política de grupos sociales movilizados y políticamente excluidos en contextos de transformaciones aceleradas y de crisis de hegemonía. Su desarrollo en los años 1940 y 1950 del siglo XX dio cuenta de ese tipo de fenómenos y de allí la ambivalencia de esos movimientos: su tendencia en el gobierno a (re)construir variedades integradoras de capitalismo y, en la medida en que dicha integración fracasa, a transformarse en expresión del desafío popular. Frente a la imposibilidad de integrar o canalizar estatalmente el conflicto —núcleo de una hegemonía— el problema de la dominación se resuel-

ve desplazando el antagonismo capital/trabajo espacialmente (oposición pueblo–antipueblo) y temporalmente (de lo que es síntoma privilegiado la inflación). Si bien lo aleja del centro del sistema, este modo de dominación (re)produce el conflicto social. Por esa razón, las clases dominantes latinoamericanas solo han tolerado de mala gana a los gobiernos nacional-populares en los momentos de crisis aguda, ya que no ven en esos movimientos más que la forma bastarda de un desafío popular que no logran conjurar.

En Argentina el peronismo se caracterizó por ser el modo de constitución de la clase obrera como sujeto político heterónimo a través de la incorporación política del movimiento obrero. Y ello no pudo sino dejar marcas en los modos de acción y organización de los sectores populares. El kirchnerismo movilizó esas prácticas e imaginarios enfrentando un mundo popular más heterogéneo, producido por la ofensiva neoliberal que se desplegó desde 1976, y una clase dominante unida en torno a la defensa de las posiciones conquistadas y amenazadas desde 2001.

Agotamiento de la estrategia: los límites de la voluntad política

Hasta aquí lo que emerge es la contradicción entre una estrategia de construcción de consenso basada en la integración de demandas populares y los límites impuestos por la reestructuración capitalista de los años 1990, sobre cuya base se desplegó aquella estrategia sin intentos serios de revertirla. Ello nos devuelve al planteo inicial: la falta de radicalidad –en comparación con otros procesos latinoamericanos, como el venezolano e incluso el boliviano– de las transformaciones impulsadas por los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, detrás de esa falta de radicalidad asoma la relación de fuerzas alumbrada por la insurrección de 2001.

La insurrección de 2001 puso un límite a la ofensiva neoliberal contra la clase obrera y los sectores populares y rompió el dispositivo de dominación articulado en torno al régimen de convertibilidad monetaria. Pero la recomposición de la capacidad de acción y organización popular no revirtió los efectos de las derrotas de 1976 y 1989, que fragmentaron y desorganizaron a la clase obrera. Suficiente para frenar la ofensiva, insuficiente para impulsar transformaciones

más profundas, la estrategia kirchnerista le dio forma política a esa relación de fuerzas y se desarrolló sobre ella, aunque sin ir más allá.

Y ese «no ir más allá» nos lleva al problema de la voluntad política. La voluntad política no reside en dirigentes individuales ni en la determinación para la acción de grupos de militantes (o, al menos, no solo en ello). La voluntad política existe a través de los modos de organización política, es decir, es un hecho hasta cierto punto objetivo. El kirchnerismo fue la estrategia de reorganización del peronismo para volver al gobierno, como lo fueron en los años 1980 la renovación peronista y en los años 1990 el menemismo.

Los límites de la voluntad política del kirchnerismo fueron los límites de la coalición política sobre la que se sustentó. En cada enfrentamiento con la clase dominante, la ruptura o amenaza de ruptura de esa coalición debilitó la capacidad de respuesta del gobierno. Desde 2012, el estancamiento económico y la crisis de la estrategia política erosionaron su base popular. De modo que –especialmente desde 2008– una clase dominante desafiante en el escenario público, y capaz de ampliar su base de apoyo hacia una clase media de tradición antipopulista, fracturó y erosionó con su acción al kirchnerismo. En 2014, con la formación del Foro de Convergencia Empresarial, la clase dominante pasó del bloqueo a la construcción de una respuesta a la crisis. El programa de ajuste y reestructuración se articuló políticamente a través de Cambiemos, la alianza política que llevó al gobierno a Mauricio Macri.

El kirchnerismo después del kirchnerismo

Hablar de agotamiento de la estrategia kirchnerista no es antojadizo. Las condiciones globales que la hicieron posible empezaron a morir después de la crisis mundial de 2008, y la dinámica de la relación de fuerzas sobre la que se desarrolló lo hizo también a partir de la contraofensiva de la clase dominante iniciada el mismo año. Finalmente, la desestructuración de la coalición política peronista que lideraba abrió de nuevo la disputa al interior del peronismo sobre su reorganización para volver al gobierno.

Sin embargo, el período abierto con el ascenso de Macri al gobierno puso de manifiesto dos aspectos interrela-



cionados: la consolidación de una identidad kirchnerista y el hecho de que, agotada la estrategia kirchnerista posconvertibilidad, el kirchnerismo dejó de ser una *etapa* del peronismo para pasar a ser solo una *parte* de él.

El kirchnerismo en la oposición mostró la vitalidad y la potencia de una identidad política construida alrededor de los rasgos neopopulistas o nacional-populares antes señalados. Como movimiento político opositor, fue capaz de articular la movilización popular contra el gobierno; por lo tanto, a diferencia de lo que sucedió en 2003, se convirtió en su dirección. Sin embargo, en esa función puso de manifiesto su orientación a institucionalizar la movilización y su carácter de opción estratégica del peronismo.

La primera se hizo patente después de los enfrentamientos callejeros del 14 y el 18 de diciembre de 2017, cuando se enfrentó al dilema de apostar por la radicalización de la lucha popular o encauzar institucionalmente las demandas en la lucha electoral. La opción elegida —desmovilizar para encauzar institucionalmente la lucha política— mostró, además, la

capacidad de dirección del movimiento popular que ostentaba el kirchnerismo como fuerza política y su grado de cohesión interna.

Su carácter de opción estratégica del peronismo se puso de manifiesto en la conformación del Frente de Todos. Pero eso implicó que, una vez llegado el Frente de Todos al gobierno, el kirchnerismo se convirtió en una parte de esa coalición política y ya no su síntesis. El Frente de Todos reúne los pedazos de la coalición que el kirchnerismo supo liderar y, por ello, articula a aquellos sectores conservadores, que expresaron dentro y contra el kirchnerismo las posiciones de la gran burguesía, con los movimientos sociales que se movilizaron contra Macri y se desmovilizaron luego para integrarse al nuevo armado político.

En un contexto de presión redoblada por el ajuste y la restructuración, la pregunta es si el kirchnerismo será un factor de agudización de las contradicciones del Frente de Todos o el medio de disciplinamiento y desmovilización que viabilice esas políticas regresivas. ●

«El progresismo no se comprometió con la superación del capitalismo»

En vísperas de las elecciones presidenciales, Verónica Mendoza se proyecta como candidata de la izquierda peruana.

JAL | Desde que fuiste candidata a la presidencia en 2016, los medios no se cansan de calificarte como representante peruana del ciclo progresista latinoamericano. Sin embargo, pocos indagaron en tu propio sentido de pertenencia a ese ciclo político. ¿Cómo te sitúas en relación con el progresismo latinoamericano?

VM | En Perú siempre nos sentimos un tanto alejados de los procesos progresistas latinoamericanos. A veces los miramos con admiración, a veces de manera crítica, pero siempre con distancia. Valoramos su horizonte antimperialista, que sigue vigente y deberá ratificarse a cada paso para construir cada vez mayores márgenes de autonomía regional y continental. También valoramos la tendencia redistributiva que, en mayor o menor medida, todos compartieron. La intención de construir un Estado que se comprometiera con el bienestar de las mayorías y que, por medio de iniciativas de distinta índole, procure garantizar derechos y permitir el acceso a los recursos y a los bienes públicos es siempre una política saludable. Su

componente democratizador, que tuvo efectos concretos en la ampliación de derechos y de la dignidad de los sectores populares, es otro punto a resaltar.

También es valorable el arraigo histórico transformador que exhibieron, lo cual estuvo vinculado al hecho de poner en cuestión elementos estructurales como la identidad o la nación. Apuntar a remover el sustrato conservador-colonial-dependiente de nuestras sociedades resulta fundamental. En ese sentido, el caso boliviano, con el acceso de los sectores indígenas al gobierno y la puesta en práctica de una serie de mecanismos democráticos por fuera de los tradicionales, constituye un ejemplo a seguir. También lo fue el intento venezolano de generar otro tipo de participación, de construir el poder desde otras bases, tal como se observó durante el gobierno de Hugo Chávez.

Definitivamente, en Perú nos sentimos hermanados con estas experiencias, pasadas y recientes. Es innegable que hay una identidad y una cultura que compartimos con distintas experiencias populares,



No se puede negar que, aunque empalmaron con las demandas de cambio reclamadas por los movimientos sociales y por sectores ciudadanos, los gobiernos progresistas terminaron enmarcados en una dinámica más bien estatista.

particularmente en lo referido a la impronta plebeya de impugnar el neoliberalismo y denunciarlo en todas sus versiones.

Pero también existen deficiencias, y la posibilidad de extraer lecciones y volvernos mejores depende de que seamos capaces de identificarlas y discutirlos. Es necesario tener en claro lo que podemos y no podemos hacer y lo que debemos y no debemos hacer, tanto en Perú como en toda América Latina.

JAL | ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, algunas de estas deficiencias de los gobiernos progresistas y las lecciones que se desprenden de ellas?

VM | Desde nuestro lugar, a la izquierda del mapa político peruano, hemos sido críticos en varios aspectos. Venimos elaborando, desde los años 1990, algunas ideas más radicales vinculadas al movimiento alterglobalizador, al zapatismo, a los Foros Sociales. Trabajando junto a todo un movimiento que se atrevió a impugnar el orden en el momento en el que estaba mejor establecido, y que pretendió montar una plataforma que fuese mucho más allá de la crítica antineoliberal.

Desde ese lugar, cuando vimos emerger los gobiernos progresistas en nuestra región, si bien los recibimos como una buena noticia en relación con lo anterior, los percibimos en otra frecuencia, con otros códigos. Unos proyectos sin mucho compromiso por superar el capitalismo, sin vocación de ir más allá en la búsqueda de alternativas.

Existe una limitación muy desarrollista en el progresismo, que se expresa en su afán por *gestionar* lo establecido, particularmente en todo lo que tiene que ver con el modelo económico extractivo. Vimos cómo los países con gobiernos progresistas mantenían una creciente dependencia de sus materias primas, de la minería, del petróleo o de la soya, sin proponerse superar realmente el modelo primario exportador extractivista. Al contrario, muchos terminaron por exacerbalo. Ese, creemos, es un primer déficit del que aprender: no se puede transformar realmente un país manteniendo una política económica meramente rentista y primario exportadora.

Un segundo déficit importante gira en torno a que, a pesar de los esfuerzos y de cierta radicalidad exhibida en algunos países, no se pudo desmontar la estructura de los Estados tal y como fue construida a lo largo de todos estos siglos. En Venezuela se habla de la Quinta República, pero vale la pena preguntarse cuántas de las taras de las otras repúblicas pesan sobre esta Quinta. El Estado cambió de manos, pero no hubo una reforma profunda. La forma de organizar el poder, a pesar de todo, parece persistir de forma inalterada.

No se puede negar que, aunque empalmaron con las demandas de cambio reclamadas por los movimientos sociales y por sectores ciudadanos, terminaron enmarcados en una dinámica más bien estatista. Con ello, surge un tercer aspecto aleccionador: la compleja relación con los movimientos sociales, muchas veces tensa y ambivalente, terminó a menudo



convirtiéndose en opositoras a las organizaciones que no encajaron en esa lógica estatalista, lo cual terminó por tender un manto de sospecha sobre su autonomía. Una experiencia dramática, en este sentido, es la de Brasil, donde todo el acumulado del PT y su relación con los diversos movimientos sociales entraron en tensión, lo cual lo llevó a replegarse frente a fuerzas conservadoras como las que condujeron a Bolsonaro al gobierno. Otro ejemplo lo constituye Ecuador: la relación de tensión entre Correa y una parte importante del movimiento indígena y ecologista continúa hasta el día hoy.

Pero la dinámica histórica de las últimas décadas en Perú no es asimilable a ninguna de las trayectorias anteriores. Es un país hecho de retazos. Puede que un sector de la ciudadanía —especialmente en el sur— se sienta identificado con el proceso de cambio de Bolivia. Pero también hay otro sector que no, y que se identifica más con lo que pasa en Argentina, donde existe un bloque más amplio y nacionalista con fuerte presencia de una capa tecnocrática de corte moderno. Entre los jóvenes peruanos, por otra parte, la identificación más fuerte pasa por el movimiento chileno y la movilización social por una nueva constitución.

JAL | Iniciaste tu militancia política a principios de la década del 2000, en las filas de lo que alguna vez —aunque de manera efímera— fue aclamado como el vehículo del progresismo peruano: el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Ahora, como candidata presidencial de Juntos por el Perú en

Hoy nuestra realidad en Perú comienza a cambiar.

2021, ¿qué balance haces de la transformación de la izquierda peruana en estas últimas décadas?

VM | En Perú fue el nacionalismo de Ollanta Humala el que, hacia el año 2011, intentó subirse a la ola latinoamericana de gobiernos progresistas. Pero, pese a las expectativas depositadas por buena parte de la población, el Partido Nacionalista nunca lo logró del todo. Humala nunca fue revolucionario, ni mucho menos. No tenía una cultura de izquierdas, ni siquiera en clave nacional-popular. Su proyecto estuvo muy limitado desde sus orígenes. La correlación de fuerzas al momento de su ascenso al gobierno fue el factor que más condicionamientos impuso, y el poder económico —en medio de una bonanza generalizada— se volvió rápidamente dominante. Más allá de la implementación de algunos programas sociales y del incipiente desarrollo de la arista social de la gestión estatal, Humala terminó siendo profundamente conservador.

Y es que, en nuestro país, la correlación de fuerzas heredada del fujimorismo ha permanecido hasta hoy inalterada. La herencia que recibimos a su caída nos legó todo su andamiaje de poder, incluyendo la Constitución promulgada en el año 1993. Las reformas neoliberales en el Perú fueron sumamente profundas, producto del conflicto armado y la crisis política de las décadas de 1980 y 1990. El gran logro de largo plazo del fujimorismo fue la rearticulación y la consolidación de un bloque dominante neoligárquico, aliado a las Fuerzas Armadas y sumamente poderoso.

Pero el retrato no estaría completo si no contemplamos también las debilidades propias: la crisis política y el pragmatismo dominante en la izquierda. Sin calibrar de manera justa la profunda derrota sufrida por el movimiento popular durante el conflicto armado y la consecuente implementación en toda línea del modelo neoliberal (no solo como programa de gobierno, sino también en el sentido ideológico), resulta imposible comprender la crisis del campo progresista en Perú. Su versión más deforme fue encarnada por la figura de Humala, pero también se expresó en la crisis de la izquierda, replegada en torno a las ONG y buscando atajos al gobierno para acomodarse con mayor facilidad.

Pero hoy nuestra realidad comienza a cambiar. Las intensas movilizaciones desatadas a partir de la destitución de Vizcarra sacaron a la luz la necesidad de transformaciones de otro orden y la disposición de amplios sectores de la población para impulsarlas. La construcción de un proyecto firmemente arraigado en los procesos populares puede permitirnos revertir el camino de renuncia que viene transitando hace tiempo la izquierda. Es un esfuerzo propio, que solo podemos hacer nosotros mismos, porque la búsqueda de atajos ya se ha evidenciado infructuosa en el pasado. No se trata de llegar más rápido, sino de llegar mejor, con mejores posibilidades de triunfar. Las experiencias progresistas en nuestra región representan un punto de referencia del cual extraer lecciones positivas y negativas. Pero la fortaleza de nuestro arraigo popular dependerá de la originalidad de la senda que logremos trazar: *ni calco ni copia, sino creación heroica*, una apuesta por avanzar más allá. ●

Medios de Deducción

PISA LA PELOTA MARADONA

¿Crisis de la democracia o crisis del capitalismo?

Hace algún tiempo que se habla del «deterioro de la democracia», haciendo referencia con ello a una suerte de desafección democrática o inclusive a un creciente rechazo de la democracia por parte de la ciudadanía. Esta infravaloración de lo democrático es abordada, por lo general, lejos de la pregunta por sus causas económicas estructurales o por su dimensión histórica. Por el contrario, se la examina a partir de la presentación e interpretación de estudios de opinión pública que ilustran las secuencias más superficiales.

Que hay registros que muestran un creciente desinterés por la democracia es algo evidente. También existen datos —más preocupantes y contrastables con resultados electorales— que dan cuenta de la consolidación de tendencias abiertamente antidemocráticas, fundamentalmente durante el período posterior a la crisis global de 2008.

Cuando analizamos con más detenimiento la aprobación explícita de la democracia (que en Estados Unidos o en Argentina alcanza niveles muy altos por diferentes motivos históricos), observamos que estos mismos estudios de opinión pública revelan a su vez porcentajes elevados de ciudadanos que, en determinadas circunstancias, justificarían un golpe militar (en EE. UU. estos representan el 24,6% de la pobla-

ción y, en Argentina, el 30,2% en el año 2018). Esto contradice la idea de una supuesta adhesión homogénea a los «valores de la democracia».

¿Cómo entender la presencia de corrientes ideológicas que arrastran a una parte importante de la población a posiciones que socavan esta forma política del Estado, la cual en teoría defiende sus derechos fundamentales y su capacidad para decidir sobre su futuro? ¿De qué maneras particulares la democracia entra en crisis para la ciudadanía?

Hay lecturas que identifican la crisis contemporánea de la democracia con el síntoma de la polarización política. Se sugiere, así, que estamos frente al despertar de pasiones políticas oscuras que condujeron a la ciudadanía a salirse de los carriles «normales» de las democracias liberales y las economías de mercado. Otras versiones de la misma explicación suelen traer a colación la idea de un deterioro de la cultura política de la región, que se revelaría en su forma auténtica en los contextos de crisis.

Cuando se intenta ir un poco más allá de la superficie del fenómeno, aparecen estudios y opiniones que hablan de las frustraciones identitarias frente al carácter irrefrenable del multiculturalismo y los valores

Durante los últimos años ha aumentado la presencia de corrientes ideológicas hostiles a la democracia. La derecha encabeza una rebelión contra la igualdad que, paradójicamente, en lugar de renegar del valor de la igualdad, intenta apropiárselo.

emancipatorios o de la difícil situación que enfrentan los trabajadores con bajas calificaciones educativas para adaptarse a las lógicas laborales y de reconocimiento social de la globalización. Si revisamos estas interpretaciones, vemos que es difícil decidir si nos encontramos frente a alguna causa real del desencanto con la democracia o más bien nos topamos con una constelación de efectos político-ideológicos de un proceso que no se termina de comprender.

En cualquier caso, una de las grandes fallas de muchas de las lecturas sobre el malestar contemporáneo con la democracia consiste en homogeneizar al extremo la instancia de la determinación de las posiciones políticas, haciendo valer para cada sujeto una única posición verdadera, que simplemente se representa y se despliega, después, en el espacio político. La lectura crea, así, un ciudadano ideal, autocentrado alrededor de un motivo y un interés únicos, que se transforma luego en la razón de un desencanto con la democracia exageradamente idealizada.

Por ese camino, lo que suprimen las explicaciones y los modelos es precisamente lo que hoy resulta más importante para pensar la crisis de las democracias en la ciudadanía: las contradicciones en el sujeto político y el carácter paradójico de muchas de las acciones de

los diferentes grupos y clases sociales. Entre las primeras cabe destacar las contradicciones que genera el principio igualitario de la democracia. Entre las segundas se deben analizar los modos paradójicos en los que se interpretan —gracias a la extraordinaria supervivencia de una serie de mitos de la ideología neoliberal— las desigualdades sociales y las lógicas de explotación del capitalismo contemporáneo. En la experiencia y el conocimiento de estas contradicciones y paradojas se juega la posibilidad (o la imposibilidad) de pensar, detrás de la crisis de la democracia, la contundencia de la crisis del capitalismo.

Dialéctica de la igualdad

Si se trata de pensar la rearticulación de la derecha a nivel regional, hay un hecho que no puede pasarse por alto. Luego de los años de la confluencia de gobiernos progresistas, las derechas latinoamericanas mostraron (y siguen mostrando) una habilidad nada desdeñable para explotar las contradicciones de las clases populares. Y es que, por medio de la idea de «igualdad», han logrado encauzarlas y articularlas ideológicamente en torno a proyectos políticos de derecha.

Las diferencias nacionales son vastas y resulta imposible aunar procesos políticos dispares (desde Trump

a Piñera, pasando por Bolsonaro, Macri, Lenin Moreno, Lacalle Pou y Añez) en el marco de una explicación única. Sin embargo, sí podemos decir que todos ellos cuentan con un mismo éxito político-ideológico: articular los discursos antiglobalistas que crecían como críticas a los procesos políticos progresistas.

En el examen de esta estrategia política, que habría que llamar «rebelión contra la igualdad», debemos poner especial atención en lo siguiente: se trata de una estrategia que no busca expresar de modo manifiesto un simple rechazo a la igualdad en nombre de algún otro valor prioritario. Por el contrario, el rechazo sienta sus bases sobre alguna forma —más o menos imaginaria— de igualdad que se convoca contra otras igualdades denunciadas como falsas.

Este fenómeno ideológico forma parte de la reacción autoritaria que la derecha logró articular con diferentes alianzas y herramientas políticas en cada país en los últimos años, poniendo en escena una erosión del principio inclusivo de las democracias de la región.

El presente de la democracia en América Latina no puede entenderse sin mirar al sustrato ideológico antiglobalista que aparece, por ejemplo, en las posiciones contrarias al gasto de los gobiernos nacionales en políticas de inclusión social de los más pobres. De los datos presentados en los gráficos se desprende un acuerdo lábil con el gasto social en sociedades profundamente desiguales y con niveles de pobreza en crecimiento en los últimos años.

Estas posiciones sobre el rol activo del Estado para combatir la pobreza (con distintos grados de acuerdo y desacuerdo en cada país) deben interpretarse en relación con otras representaciones sobre la igualdad. Es en ese pasaje, en esa articulación, donde opera la ideología de derecha. En los países en donde la aprobación a las políticas estatales para combatir la pobreza es alta (Brasil y Chile), también es alta la adhesión a otra idea de igualdad, expresada en el otro gráfico: la imagen mítica de una igualdad de posibilidades en el mercado laboral, en disponibilidad para todos, que puede luego usarse dentro de la dialéctica de la igualdad como justificación de la oposición neoliberal a la intervención y/o redistribución ejercida por el Estado.

Es esta dialéctica de la igualdad lo que debemos interrogar para poner en cuestión qué modelos de igualdad están en disputa en el campo ideológico contemporáneo y para desentrañar, también, qué criterios de justicia se desprenden de cada reivindicación que se hace en el espacio político en nombre de la igualdad y qué relación guardan entre sí las diferentes representaciones en pugna.

Podemos ensayar algunas respuestas preliminares a estas preguntas. Es posible identificar tres grandes narrativas de esta «rebelión contra la igualdad» que explotan el propio significado interno de la aspiración igualitaria. En primer lugar, una narrativa que, aunque dice aceptar y reconocerle un rol al Estado en la producción de la igualdad de oportunidades, critica la implementación de las políticas de intervención y redistribución.

La segunda estrategia consiste en criticar la intervención estatal y el uso de recursos públicos para combatir las desigualdades a partir de una identificación con la *justicia de mercado*, que sería la que en teoría produce verdaderas reglas de juego igualitarias.

Finalmente, una tercera posición critica cualquier mecanismo redistributivo (fiscal, regulatorio) a partir de la reivindicación del *igualitarismo del esfuerzo*, que sería el único capaz de garantizar una simetría transparente entre la contribución y lo que toma cada uno del trabajo socialmente útil.

Se trata de tres tramas que aparecen entrelazadas en los discursos, asociadas a una serie de mitos que se repiten a la hora de justificar la oposición a las ayudas sociales que financia el Estado y sobre las que puede decidir democráticamente la sociedad. Y es esta última posibilidad, que esta ideología ataca y apunta a neutralizar, la que explica el carácter elusivo del deterioro de la valoración de la democracia en la ciudadanía.

La teoría neoliberal de la plusvalía

La operación ideológica que utiliza a la idea de igualdad en contra de las políticas igualadoras se completa, en la actualidad, con algo que llamaremos «teoría neoliberal de la plusvalía», que invierte (con y sin ironía) la teoría de Marx. Veamos, para finalizar, una aplicación típica de esta teoría en su uso masivo. El

intercambio que citamos a continuación se dio en una discusión que relevamos haciendo trabajo cualitativo en Argentina:

MODERADOR | ¿Por qué creés que esa gente acepta lo que ustedes llamaban «la cultura de los subsidios»?

P1 | Yo creo que es gente más cómoda, no creo que envíen currículums. Se embarazan para cobrar cosas, también. Es todo un mundo de vivir del Estado.

Tengo 32 años y esta es la primera vez en la vida que me dieron el IFE [Ingreso Familiar de Emergencia]. Jamás me pagaron nada. Yo conozco vecinos, familiares que entre la pareja llegan a ganar 100 000 mil pesos; cada uno tiene sus planes y por pareja ganan cerca de 100 000 pesos y no trabajan. Te da como... ¡güau! Nadie se lo va a sacar a eso, ya está.

M | ¿Y qué sentimiento te genera enterarte de eso?

P1 | A mí me da una bronca... un fastidio. Porque yo siempre trabajé y nunca tuve ayuda de nadie. Del gobierno, nada: ni un plan, ni una tarjeta para comprar mercadería, nada de nada. Recién ahora, que pedí el IFE, me lo dieron: un milagro. Pero si no, no.

P2 | Para mí, lo bueno sería elegir y pensar bien a quién le dan cada subsidio. Porque, como decía P1, sumás y sumás y sumás y terminás sin trabajar, estando en tu casa, con aire acondicionado, con la Hilux... Y al que trabaja le cuesta un montón.

La imagen mítica de «los que viven del Estado» y van a cobrar sus prestaciones sociales en camionetas 4x4 permite explicar por qué la redistribución estatal puede ser vivida como un mecanismo que produce desigualdad. Pero no solo esto: en esta representación queda clara, además, una denuncia. La denuncia del pobre y del prójimo que «puede vivir sin trabajar» (más allá de si esa posibilidad se realiza efectiva-

mente o no). Es desde allí que se produce un desplazamiento continuo hacia la justificación o la demanda de violencia sobre el cuerpo de ese otro que impide la realización de la igualdad abstracta del esfuerzo.

Tanto en términos teóricos como políticos, reflexionar acerca de la supervivencia de estos mitos resulta fundamental. ¿Cómo perviven representaciones tantas veces desmentidas en la experiencia?

¿Qué grado de compromiso tienen los sujetos con estos mitos? ¿Se creen, honestamente, esas ideas que ubican a los pobres como los «grandes explotadores» de las sociedades o, en cambio, lo que vemos no es más que una creencia-refugio, a la que se adhiere sin convicción, simplemente para no molestar a los poderosos?

Crear que todos los desempleados podrían conseguir trabajo si se lo propusieran, implica creer que toda la población podría seguir viviendo bajo el dominio de las reglas del capitalismo

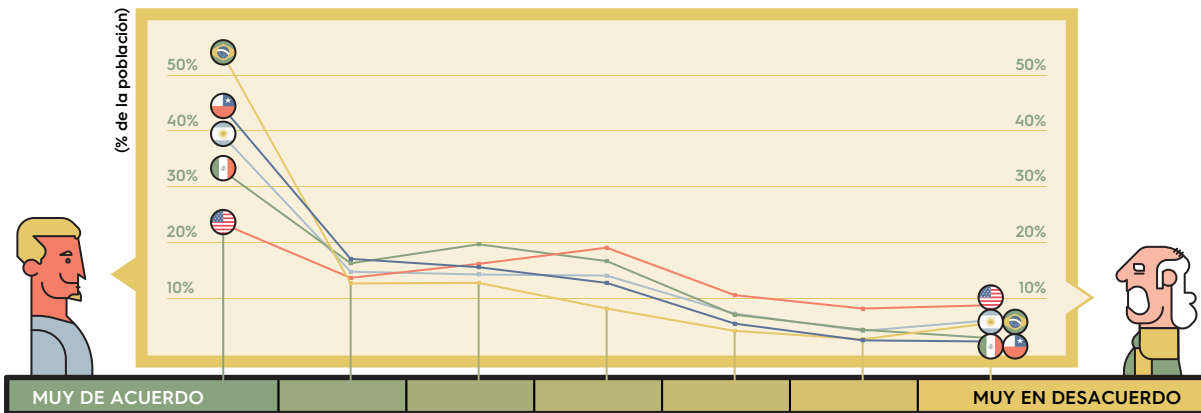
actual, aun cuando la falsedad contenida en esa creencia ha sido demostrada. La ideología, en este caso, no funciona escondiendo lo que realmente sucede, sino transformando los fracasos estructurales del sistema económico en fracasos individuales de sus miembros.

En cualquier caso, en nuestro tiempo han crecido estas contradicciones y se han ramificado estos combates paradójicos entre los de abajo, inducidos por la ideología neoliberal. Estos mitos le imponen a los sujetos populares grandes desafíos en su vida social ordinaria porque los someten a imperativos contradictorios: preocupate por la pobreza, pero denuncia activamente al pobre que no se esfuerza lo suficiente; no aceptes sin protestar el crecimiento de la desigualdad social, pero no te olvides de controlar el monto de las ayudas sociales que recibe tu vecino porque allí reside la fuente de la misma.

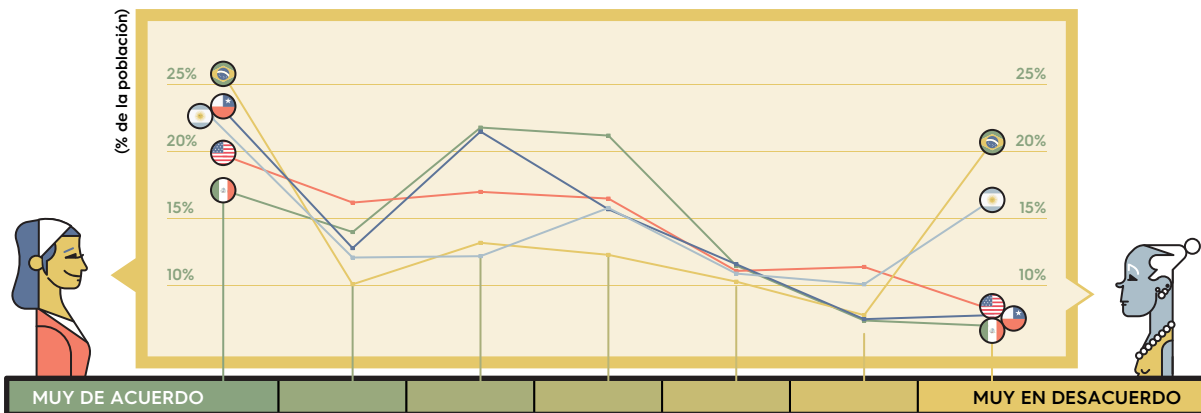
Escapar a estas trampas de las mitologías neoliberales, que hacen que hombres y mujeres luchen a favor del sistema que los explota como si estuvieran luchando contra la explotación, no es tan fácil como parece. ●

La ideología, en este caso, no funciona escondiendo lo que realmente sucede, sino transformando los fracasos estructurales del sistema económico en fracasos individuales de sus miembros.

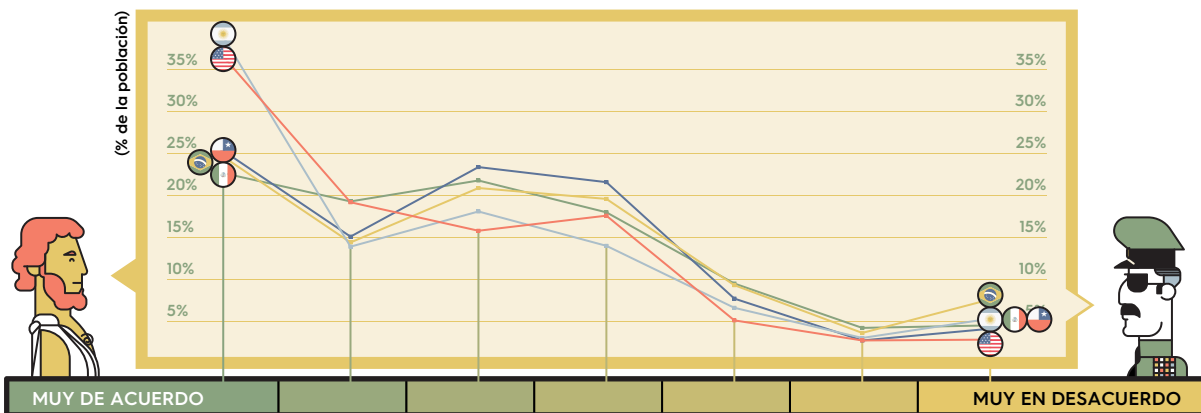
El gobierno debe gastar más en ayudar a los pobres



La mayoría de los desempleados podría encontrar un trabajo si quisiera



La democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno



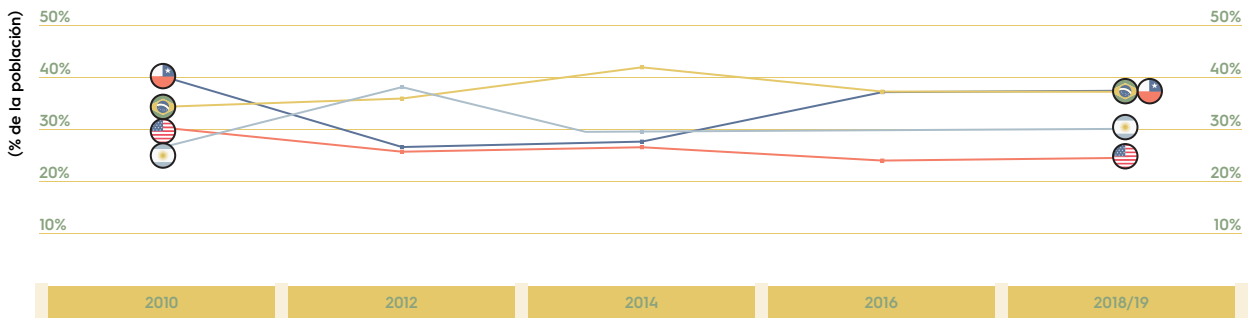
Fuente: elaboración propia en base al Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)

La democracia en cuestión

Entre las contradicciones que genera el principio igualitario de la democracia y los modos paradójicos en los que se interpretan las desigualdades sociales y las lógicas de explotación del capitalismo contemporáneo, se juega la posibilidad de pensar, detrás de la crisis de la democracia, la contundencia de la crisis del capitalismo.

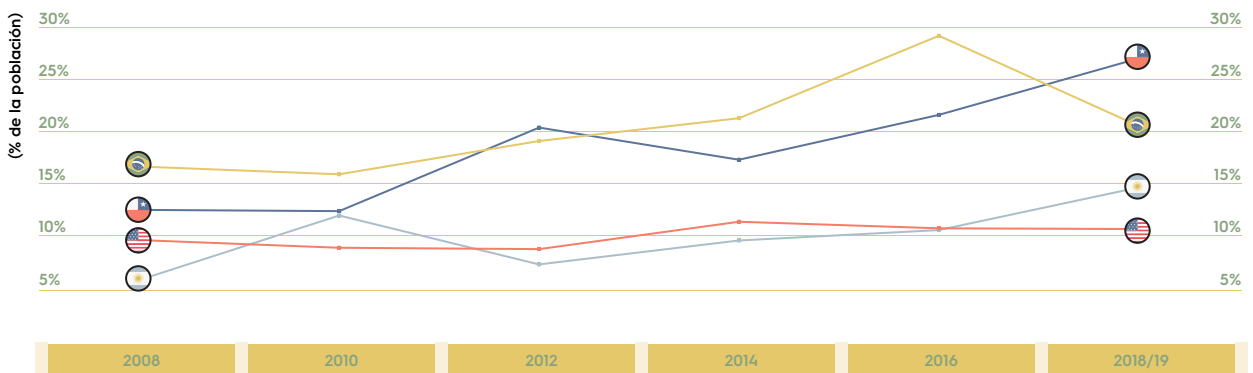
Justificación del golpe militar.

Porcentaje de ciudadanos que contestan afirmativamente a la pregunta: "Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los militares de este país tomen el poder por un golpe de Estado. En su opinión, ¿se justificaría que hubiera un golpe de estado por los militares frente a un aumento de la delincuencia?"



Rechazo de la democracia.

Porcentaje de ciudadanos que expresaron su rechazo frente a la afirmación: "La democracia tiene algunos problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno."



Fuente: elaboración propia en base al Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)

«Soy un leninista de la NEP»



Conversamos con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia y uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos. Las lecciones del golpe de Estado, el balance de los gobiernos progresistas, la relación del Estado con los movimientos sociales, el vínculo con la burguesía, las vías hacia el socialismo. Nada menos.

MARTÍN MOSQUERA / FLORENCIA OROZ | **La primera pregunta, ineludible, es sobre el balance del último año, es decir, el ciclo que se extiende desde el golpe de Estado de 2019 hasta la nueva victoria electoral del MAS. Tus análisis sobre el golpe se centraron en la dinámica generada en torno a las clases medias tradicionales. ¿En qué medida la evolución de los acontecimientos modifica o confirma esa caracterización?**

ÁLVARO GARCÍA LINERA | Los golpes de Estado siempre son maquinarias conspirativas de grupos muy reducidos, pero su viabilidad no radica en este factor. La viabilidad para un golpe de Estado radica en la existencia de un sector social que lo habilite, que le abra las puertas, que cree cierta predisposición, disponibilidad, apetencia y receptividad a una ruptura del orden constitucional y de la democracia.

Ciertamente, dentro del grupo que ha conspirado se cuenta un conjunto de generales –de las Fuerzas Armadas, de la Policía–, un conjunto de empresarios, que ha puesto el dinero para sobornar oficiales

y mandos de tropa, y también, claro, Almagro, el Departamento de Estado, algún funcionario de la Iglesia Católica y algún expresidente (dos expresidentes, de hecho). Digamos que hay un núcleo que ha articulado el acto sorpresivo y de fuerza. Pero esto no ha surgido de la nada: en los últimos cuatro años se fue formando un colectivo social, un sector social enfurecido y cada vez más resistente a la democracia. Ese sector fue la clase media tradicional que, a través de sus debates, de su discurso racializado, de sus editoriales, de sus grupos en las redes sociales y de su léxico fue generando una predisposición para una solución de fuerza, para una solución autoritaria.

Creo que esta es la explicación. De hecho, modestamente, no creo que haya otra explicación sólida y consistente que funcione para explicar tanto el golpe de Estado como lo previo y lo posterior. El resultado final es que esta clase media tradicional no puede creer lo que ha sucedido, y entonces sale a hincarse delante de los cuarteles para que den otro golpe. Sus editorialistas, sus líderes cívicos y sus redes comienzan a opinar que ha habido fraude. No hay pruebas,

pero no importa: ha habido fraude porque si los indios ganan, lo han hecho con fraude. Siguen siendo los mismos. Ese bloque social, que es el que ha dado sustento al golpe, no ha variado.

Todo golpe de Estado es una articulación entre una élite pequeña, reducida, que tiene la capacidad de desentrañar el sentido de la acción, con un grupo social que la mantiene, la alimenta, la respalda, la aplaude, que la apoya en sus redes, en sus editoriales, en sus consignas... Ese grupo social sigue ahí. Esta clase media tradicional, que se rebeló contra la igualdad para intentar contener este proceso de democratización del consumo, del estatus, del reconocimiento, del acceso a bienes, sigue ahí. Derrotada, porque el mundo resultante no ha sido *su* mundo. Le fue mal —y le va a seguir yendo mal— porque ya es una minoría; es, en cierta manera, una minoría en decadencia.

MM / FO | Una cosa que sorprendió a todos en noviembre de 2019 fue la poca capacidad de respuesta popular y gubernamental ante el golpe. ¿No asistimos a una repetición del problema de Allende, de la excesiva confianza en la «neutralidad de las FF. AA.»? Esta inacción, a su vez, contradice tu propia concepción sobre el «momento leninista-jacobino», que en tus escritos no se relaciona con el momento de ocupación del poder (que puede realizarse por vía electoral, pacífica) sino con la defensa —por medio de un hecho de fuerza— del gobierno frente al golpismo de las clases dominantes. ¿Cómo interpretar, entonces, la falta de respuesta de noviembre de 2019? Planteado en términos más generales: el asedio imperialista, derechista, golpista hacia los gobiernos populares va a seguir existiendo. Entonces, ¿cómo enfrentar ese tipo de acciones conspirativas?

AGL | Lo que pasó en noviembre de 2019 fue una derrota militar del proyecto nacional-popular. Las fuerzas conservadoras salieron al frente, se movilizaron, ocuparon ciudades y ocuparon territorios. El gobierno confrontó esa fuerza social de manera no coercitiva, privilegiando los preceptos de la lógica de la acción colectiva, buscando que no irradiese su control territorial e impulsando acciones que hagan las veces de «colchón de contención» para esas movilizaciones, a la espera de que se agoten.

La nuestra fue una respuesta política. Y, de hecho,

si ahí se quedaba, la hubiéramos derrotado. Lo que nosotros no tuvimos en cuenta —y eso es un error político— es que a su acción política ultraconservadora ellos iban a sumarle una acción militar. Ahí radica la novedad. Porque en el año 2008, cuando intentaron un golpe de Estado, nosotros asumimos dos tácticas: primero, la contención política, que quede aislado, que no se irradie, movilizaciones-colchón y esperar a que se agote. Y, a medida que fuera agotándose, desarrollar la movilización social hacia el lugar.

Aquí ellos nos ganaron de mano, se movilizaron y respondimos políticamente: contención, debilitamiento. Pero, antes de que se debilite más, dieron un salto y recurrieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía, con lo que añadieron una fuerza policial militar al golpe. Eso fue lo que nosotros no habíamos calculado: que iban a sobornar a las Fuerzas Armadas (que, de hecho, fueron sobornadas). Puede ser que haya existido un exceso de confianza en que iban a mantenerse como en el 2008. Pero lo cierto es que esto no sucedió. Y cuando ellos toman esta acción militar, tenías tú que tomar otra contraofensiva. La primera te había resultado: los estabas debilitando, la acción política de contención era efectiva, y el paso del tiempo iba a conducir al agotamiento. Estabas logrando la victoria política.

Pero cuando ellos recurren a lo militar, a nosotros se nos presentan dos opciones: convocar a movilización para enfrentar a los policías y a los militares, o no. Y en esa decisión está la autoridad del presidente, que es el que evalúa: o bien definiendo esta victoria popular, definiendo este proyecto convocando a las personas a resistir como sea posible frente a una fuerza militar superior —no sabemos con qué resultado—, o bien retrocedo. Y, claro, en esas horas aciagas de los días 9, 10, el cálculo, la reflexión del presidente, era «yo no voy a tomar la decisión de convocar a mis compañeros militantes para que haya muerte; no quiero ser el responsable de esas muertes». Es una decisión. Una decisión fundada, básicamente, en una ubicación, en una mirada moral de la vida y la muerte. Teóricamente, lo podríamos haber enfrentado, sí, pero con muchísimas bajas, con muchísimas muertes. Entonces se toma la decisión de no movilizarnos: «prefiero la renuncia».

¿Qué lecciones sacar para el futuro, para los gobiernos progresistas? Que las clases medias tradicionales

—no todas las clases medias, sino las tradicionales: las que están siendo asediadas, igualadas por otras clases medias, populares, indígenas, emergentes— son sectores que, a pesar de no estar sindicalizados, de no tener estructuras corporativas, se unifican bajo otras estructuras (grupos de fútbol, grupos de barrio, redes, universidades y colegios) que son distintas a las estructuras clásicas de la acción colectiva, como pueden ser los sindicatos, los gremios y otras. Nuestro gobierno no había sido receptivo, no tenía mecanismos de interlocución frente a estas estructuras corporativas alternativas.

Primera lección: hay que ir a neutralizar políticamente sus nichos de operaciones. Hay que intentar desmontar las causas de ese proceso de endurecimiento, de fascistización, sin retroceder en las políticas de igualdad. Dar marcha atrás con la igualación de los indígenas, que ocupan espacios, que ocupan puestos y consultorías, implicaría dejar de ser un gobierno progresista. Lo que sí puedes hacer, sin embargo, es mantener las políticas de ascenso, de movilidad social en las clases plebeyas y populares e impulsar, simultáneamente, políticas de movilidad o de rotación social de las antiguas clases medias tradicionales para desmontar desde el interior su encostramiento y su ultraconservadurismo.

La cuestión de la Policía y los militares es un tema más complicado, porque nunca vas a poder colocar una muralla frente a un soborno de cuatro o cinco millones de dólares de un empresario. Están ahí, es parte de la *autonomía relativa del Estado*; es un poder que tiene su propia dinámica y hay que tener políticas de contención, de respeto de su institucionalidad y de modificación de las estructuras curriculares para establecer un tipo de formación y de espíritu de cuerpo menos corrosible por este tipo de sobornos y más cercano a lo popular. Se trata de una modificación de la composición de clase de las Fuerzas Armadas.

En parte, los militares se animaron también a dar el

paso en falso al golpe de Estado porque vieron que pasaban uno, dos, tres días y no había una fuerza social movilizad para resistir. Claro, porque no parecía algo complicado: habíamos pasado por experiencias similares hace unos años (cuatro, diez) y no parecía algo extraordinario. Pues bien, no te confíes: cuando se den este tipo de procesos, en los que se articulan conspiraciones entre empresarios y generales y se suma la predisposición de las clases medias tradicionales y conservadoras, es necesaria una mayor movilización social. Eso puede ayudar a contener o a neutralizar cierto accionar golpista.

No se trata solamente de un aprendizaje del intelectual, del gobierno o del candidato. Creo que se trata,

ante todo, de un aprendizaje social: desconfiar, movilizarse para defender lo que se tiene... Eso es lo que vimos en agosto, principalmente. Cuando el MAS convocó a las organizaciones sociales, a la gente, por su cuenta, mostró lo que había aprendido. Y lo que había aprendido es que frente a la represión por parte del gobierno, de militares y policías, su fuerza radicaba en el control territorial, como sucedió en el año 2000.

Esta clase media tradicional, que se rebeló contra la igualdad para intentar contener este proceso de democratización del consumo, del estatus, del reconocimiento, del acceso a bienes, sigue ahí. Derrotada, porque el mundo resultante no ha sido su mundo.

La fuerza política que emergió en el año 2000 lo hizo inicialmente por su capacidad de *apoblarse* en los territorios, de confiar en un tipo de soberanía popular territorial y hacer una especie de cerco concéntrico a las ciudades. Eso es lo que ha pasado acá, y es interesante porque era una experiencia que se había perdido: en 2005 no fue necesario, en 2008 no fue necesario, en 2009 tampoco... Pero con este golpe militar, sí. Y entonces, la gente (no los dirigentes, ni siquiera el partido: la gente), con su sabiduría popular, supo que frente al riesgo de una nueva represión nos hacemos fuertes si controlamos el territorio. De ahí la fuerza de agosto. Es un tipo de experiencia práctica y táctica de la sociedad para prevenir los riesgos de una nueva intentona, abuso o intento de masacre o escarmiento militar sangriento por parte de los sectores golpistas, y me parece algo extraordinario.



De hecho, agosto no fue solamente esta experiencia de control territorial. Fue una primera experiencia cuasinsurreccional, a diferencia de las movilizaciones anteriores, que habían sido meramente demostrativas. Esta tenía una cualidad seminsurreccional y, claramente, se notaron cuáles son las fuerzas fundamentales en términos de capacidad organizativa: el Altiplano, el Chapare, las zonas rurales del norte de Potosí, las ciudades de El Alto y la zona sur de Cochabamba. Se trata de cinco sectores sociales con alta capacidad de agregación, con alta disciplina, con una alta capacidad de irrigación y de control territorial. Esa es una táctica que permitió demostrarles a los golpistas que la capacidad de repetir masacres y de reprimir lo popular ya no sería tan fácil. No es que no habría confrontación cuerpo a cuerpo; pero, ante fuerza militar, la gente iba a desplegar este tipo de control territorial activo, muy bien organizado y con capacidad de desplazamiento y de cercamiento.

Este tipo de aprendizajes colectivos, en tanto conforman una experiencia social efectiva, debe ser reforzado y potenciado. La manera de defender un proceso político es esa; la discusión no es tanto la temática específicamente militar, sino cómo se da el aprendizaje táctico de las personas ante la posibilidad de una confrontación, de una acción colectiva «jacobina». En un país con fuerte presencia de lo rural, con fuerte presencia de lo que se llama «sectores urbanos empobrecidos», sin mucho proletariado organizado en sectores industriales, esta fue la manera que el pueblo encontró. Su propio camino, digamos. Y esta es una veta que hay que profundizar y desarrollar. No la habíamos visto antes porque ha emergido fruto de la derrota táctica de 2019. Creo que, a futuro, hay que irradiar, ampliar y mejorar estas maneras de acción para volver inútil el desplazamiento policíaco y militar en caso de golpe.

MM / FO | ¿Y cómo caracterizás el momento actual en América Latina? Tiendo a pensar que hay un exceso de optimismo entre quienes ven en este «nuevo ciclo» una mera reedición de la etapa progresista anterior, más allá de los límites que ya aparecieron en aquella etapa. Tanto por la coyuntura internacional como por el perfil que parecen adoptar estos nuevos gobiernos, este atisbo de nuevo ciclo progresista aparenta ser una edición devaluada, más moderada, más contenida, más de consenso con los grandes poderes que la anterior. Me gustaría saber cómo ves vos este momento.

AGL | Yo prefiero hablar más de oleadas que de ciclos... porque «ciclo» es como muy determinista, en cambio «oleada» es más de fluir, es algo más dinámico. El concepto de oleada es un concepto que usa Marx para estudiar la revolución de 1848, un concepto de Marx para estudiar las revoluciones: «dentro de una revolución, los movimientos se dan por oleadas», dice.

Entonces la nueva oleada no puede ser (no va a ser, ni es) una repetición de la primera oleada, y esto por un conjunto de elementos: ya no hay una expansión de los *commodities*, la economía ha entrado en los últimos años en una recesión jamás vista, las personas son distintas, no tienen por qué ser iguales los nuevos líderes que están emergiendo... Pero hay un hecho fundamental, más allá de estos elementos: a diferencia de los años 2005 a 2015, en los que la derecha

quedó atónita frente a esta oleada, en los que no tenía respuesta, ahora ha intentado una. Es una respuesta improvisada y de pies muy cortos, pero es una respuesta. Violenta, agresiva, machista, racista, muy conservadora... Sí, esa es su respuesta, y es antidemocrática: es un neoliberalismo enfurecido.

A la crisis del neoliberalismo, entre los años 2000 y 2005, le siguió el posneoliberalismo, y ellos no tenían con qué responder. Intentaban reponer el viejo neoliberalismo, pero no funcionaba, no atraía a nadie. Así estuvieron una década y, pues, tuvieron que inventarse esto. En verdad no es un nuevo proyecto, es el viejo pero recalentado, podrido. No es una nueva propuesta, pero enfrenta algo que sí es nuevo, y eso es lo que hace de este período un período de oleadas y contraoleadas simultáneamente.

A la gran oleada conservadora le siguió una oleada rosa. Ahora, lo que hay, es una oleada rosa fragmentada y una oleada conservadora fragmentada. Pugnando, peleando, avanzando en un territorio, cediendo en otro. Y esta va a ser la dinámica por un buen tiempo. Entonces no puede ser igual que la anterior, y sería un error ponerte a pensar que va a regresar ese tipo de acuerdos, ese tipo de estabilidad y consenso progresistas. Es imposible, porque las victorias —propias y ajenas— son temporales. Y eso es una cualidad que se observa a nivel mundial. Mi hipótesis es que el mundo está viviendo en un tiempo suspendido. El mundo y también América Latina. Porque no hay un horizonte, y cuando no hay horizonte no hay línea del tiempo, y cuando no hay línea de tiempo no hay curso del tiempo.

Evidentemente, hay un tiempo físico: pasa un minuto, pasan dos, pero no está habiendo tiempo social. Hay tiempo social cuando hay una flecha de tiempo que apunta, imaginariamente, hacia cierto lugar. Pero cuando esa flecha no aparece, el tiempo social no tiene orientación, es un tiempo suspendido. ¿Por qué no tiene orientación? Porque no se sabe a dónde va ir el mundo: no sabes si vas a tener trabajo de

aquí a tres meses, no sabes si va a haber una nueva pandemia. Nadie sabe, nadie puede prever qué va a suceder en un año.

Esta reflexión filosófica, que siempre perteneció a pequeños cuadros sofisticados, ahora es una reflexión de la gente. La gente no puede prever su futuro, en el mundo entero no podemos prever el futuro. El vecino, el vendedor, el comerciante, el transportista, el obrero... Se ha desdibujado el imaginario de lo que se viene, de lo que debería ser nuestro destino. En verdad, la vida es siempre así. Pero eso lo sabe el filósofo o el sociólogo (que el futuro siempre es contingente); las sociedades no funcionan con creencias de contingencia, las sociedades funcionan con creencias de horizonte, con creencias de predictividad de ese horizonte. Tienen que inventarse, narrarse esa predictividad, y en el mundo social eso tiene un efecto performativo: imaginar un destino es crear un destino.

Entonces ahora, cuando no se nos presenta un destino, la política se vuelve tácticamente muy intensa y estratégicamente suspendida. Tácticamente, vas a encontrar que lo que tenía que suceder en diez años ha sucedido en un año en Bolivia.

Lo que tendría que haber sucedido en catorce años en Argentina, un ciclo conservador, dura cuatro, y no sabes si este ciclo progresista durará más allá de otros cuatro años. Con Bolivia, igual: ¿quién sabe si durará dos años, cuatro o seis? Nadie puede prever nada, y la gente lo sabe y lo vive con angustia.

Esta incertidumbre estratégica en común (ya no solamente de una élite filosófica, universitaria, sino de la gente de a pie, que es lo que importa) configura un mundo excepcional. Esta es una nueva cualidad de la nueva oleada. En el año 2005, como no había una respuesta conservadora, el ciclo progresista aparecía como la sustitución definitiva del momento neoliberal. Luego se vio que no, que tiene problemas, que tiene dificultades. Aunque no es un proyecto agotado, tiene que reorganizarse, extraer aprendizajes de la experiencia... Pero hoy ya no es un proyecto exclusivo,

Mi hipótesis es que el mundo está viviendo en un tiempo suspendido. El mundo y también América Latina. Porque no hay un horizonte, y cuando no hay horizonte no hay línea del tiempo, y cuando no hay línea de tiempo no hay curso del tiempo.

puesto que se presenta otro más: el ultraconservador.

A su modo, lo que ha pasado con Estados Unidos también demuestra que el discurso del odio tiene un límite. Porque eso es Trump: discurso del odio, neoliberalismo enfurecido con algo de proteccionismo, más anfíbio; recoge cosas del viejo neoliberalismo y mete otras que no son del neoliberalismo, y tiene pies cortos en el mundo entero. Pero todos los proyectos tienen pies cortos. Por un tiempo, ningún proyecto va a presentarse como definitivo. En este caos planetario, que iba a darse en algún momento, es importante que los proyectos progresistas puedan cuestionarse, superar debilidades, continuar y enriquecer lo que vienen haciendo. Que puedan ser el norte de la humanidad a mediano plazo, algo que está aún por definirse.

Decir, entonces, que este ciclo es una repetición del anterior es un falso debate. No, este es muy nuevo, es un ciclo extraordinario, y el hecho de que haya propuestas progresistas le puede brindar a las clases menesterosas, a las clases humildes, a las clases sencillas, la posibilidad de que no les vaya tan mal. Pero eso no es algo inevitable, no va a suceder solo por contar con mejores repertorios para mejorar sus condiciones.

Lo interesante, sin embargo (y yo creo que esa es la enseñanza a extraer de lo que ha pasado en Bolivia), en esta circunstancia tan caótica, tan suspendida en lo estratégico y tan caótica en lo táctico, es que la posibilidad de que un proyecto, una propuesta progresista, de izquierda, pueda remontar en medio de tantas adversidades y tantas turbulencias planetarias radica en dos cosas. Una es la que dijimos antes: que esté sustentada en acción colectiva previa, que haya habido acción, construcción. Pero además hay otra: que el proyecto de poder sea *su* proyecto de poder, de lo popular; no un proyecto *para* lo popular, sino *su* proyecto.

Entonces puede haber golpes de Estado, puede haber retrocesos temporales, pero al final vas a vencer. Creo que Bolivia enseña eso: cómo se vuelve a reconstruir después de tanto maltrato, agobio y persecución. Luego se puede analizar en detalle, pero lo central es esto: que este gobierno indígena popular fue imaginado como el gobierno, el proyecto, el proceso de cambio propio de los sectores subalternos. En tanto logres eso, tienes combustible histórico. Porque

si no, si solamente piensas «voy a hacer *para* ellos», tu combustible se agota una vez que lo cumples. Pero cuando no solamente vas a hacer *para* ellos sino que de lo que se trata es de lo que ellos quieren hacer *sobre sí mismos*, tienes un combustible casi infinito (metafóricamente hablando) que te permite sobreponerte a la adversidad, a los golpes, a los escarmientos y puedes remontar las circunstancias más duras.

No significa que no te vayas a equivocar. Puedes equivocarte y vas a equivocarte muchas veces, vas a tener problemas y fallas, malos manejos tácticos... Pero si no pierdes de vista que este es el proyecto de ellos, que se trata de su autorreconocimiento, de su organización, de su capacidad de tomar decisiones en la historia, entonces vas a reponerte. Te pondrán muchas murallas y aparecerán retos y dificultades, pero si no pierdes ese enraizamiento vas a poder remontarlos.

MM / FO | Hay un viejo debate sobre cómo los gobiernos populares deben enfrentar la reacción de las clases dominantes. Dentro de la historia latinoamericana, se desarrollaron de manera condensada en la experiencia de la Unidad Popular. ¿Son inevitables las concesiones a las clases dominantes y a la oposición política para neutralizar su agresividad y para ampliar el campo de apoyo político o, por el contrario, es necesario radicalizar el enfrentamiento para quitarle poder social y político a la burguesía y galvanizar una base social propia en condiciones de derrotar a la reacción? En términos del debate al interior de la UP, ¿«Consolidar para avanzar» o avanzar para consolidar (lo que, en términos del MIR, se expresaba como «Avanzar sin transar»)? ¿Cuál es tu opinión en relación a este debate? ¿Y cómo ves al nuevo gobierno del MAS en ese aspecto?

AGL | El qué hacer con las oligarquías es un tema complicado. Las revoluciones militarmente triunfantes no tuvieron que hacerse esa pregunta, porque el triunfo militar resuelve ese problema. Las transformaciones que se hacen por la vía democrática electoral, en cambio, te plantean esto como un problema inevitable y que te va a acompañar durante toda tu gestión, porque tienes que convivir con ellos, tienes que convivir con esa clase social. Las soluciones militares más radicales te colocan ante la posibilidad de la disolución de esa clase social, pero una transfor-

mación democrática no te plantea esa posibilidad y hay que ser claros —no hay que hacerse los astutos, es una obviedad— en que has de convivir con ellos. Son los límites del modo en que llegaste al gobierno, no tienes la capacidad ni la posibilidad real histórica de disolver una clase social. Y estas son las formas de transformación que se están dando en el continente (y que se seguirán dando en el continente).

En torno a esas formas de transformación hay que pensar la idea de socialismo democrático. Si, por circunstancias históricas específicas y no planificadas, el proceso toma otro curso, pues, ¡bienvenido! y te montas. Es el lado leninista de las cosas. Pero si no se da, convives con esta manera de transformación social sustentada en el ámbito democrático electoral. Y entonces ahí los gobiernos progresistas tienen que tener una relación de articulación y desplazamiento temáticos.

Un gobierno progresista —por muy radical que este sea— que ha accedido por la vía democrática tiene que encontrar métodos prácticos de convivir con ese sector empresarial del país. No solamente porque posee un conjunto de recursos y de propiedades reconocidas por el ámbito constitu-

cional, sino porque en sus manos está el desarrollo y el impulso de ciertos sectores de la sociedad frente a los cuales la sola estatización no resuelve el problema de la transformación del sistema económico. Porque la estatización de los medios de producción no es socialismo. Estatizando los medios de producción, quedan en manos de un monopolio: el Estado es un monopolio (el monopolio de monopolios) y la socialización es la democratización de los medios de producción. Entonces, por definición, no hay posibilidad de socialismo alguno vía el Estado.

Puede ayudar a defender un proceso de transformación, puede ayudar a atemperar cierto tipo de presiones, sí, sin duda, pero son soluciones tácticas, circunstanciales. Lo que puede hacer un gobierno progresista (y para ello usa el monopolio de monopo-

lios, el conjunto de recursos que están a disposición del Estado) es atemperar el poder económico de ese sector. Para ello, un gobierno progresista necesita un Estado con un mínimo indispensable de control del Producto Interno Bruto, para no estar sometido, no estar engrillado, a los poderes fácticos económicos (muchos de ellos más poderosos que el Estado). Ahí tienes un conjunto de mecanismos: tributarios, impositivos, de políticas fiscales, de inversiones y, llegado el caso, también de nacionalización.

Ese sería el momento en que el proyecto progresista va más allá de los acuerdos tácticos y de desplazamiento. Desplazamiento en el sentido de que el Estado tenga un nivel de poderío económico con el que pueda romper el efecto de encierro y de aislamiento al que lo llevan los poderes económicos más grandes. Un 30% del PIB, mínimo, tiene que ser del Estado. Eso permite que cuando entre al diálogo o a la acción con otros sectores empresariales, lo haga desde una posición de poder y no de subordinación. Y, evidentemente, si estos sectores entran en una actitud conspirativa hay que afectarlos. No puedes simplemente contemplar, o asumir la actitud de dejarlos seguir con su conspiración. Revisa sus impuestos, mira sus propiedades,

sus cuentas bancarias, tienes un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones.

¿En qué momento de un proceso progresista se podrá ir más allá de esta convivencia táctica y de desplazamiento? Cuando las sociedades sean capaces de rebasar a estos sectores. Cuando se ponga en debate —por parte de la misma sociedad, no del gobierno progresista, no de un partido— la posibilidad de la democratización de esa riqueza. Si esto no se da como un debate de la sociedad, como un requerimiento de la propia sociedad, el gobierno simplemente va a sustituir un tipo de monopolio privado por otro tipo de monopolio, y no va a variar la distancia del trabajador con respecto a la propiedad. Habrá un cambio de forma, porque ya no es un monopolio meramente priva-

La estatización de los medios de producción no es socialismo. Estatizando los medios de producción, quedan en manos de un monopolio: el Estado es un monopolio (el monopolio de monopolios) y la socialización es la democratización de los medios de producción.

do, sino que el monopolio pasa a formar parte de los recursos comunes (porque el Estado es esta dualidad de lo común por monopolio, de los bienes comunes por monopolio).

Si tú nacionalizas, esas propiedades pasan a formar parte de los recursos comunes; pero son recursos comunes al Estado como monopolio, y frente al trabajador sigue habiendo distancia: no se ha roto o no se ha superado la distancia entre trabajador directo y medios de producción. La posibilidad de ir más allá en el régimen de propiedades (ir más allá frente a las conspiraciones y no meramente de manera defensiva) va a radicar en que la sociedad plantee la posibilidad de la gestión social de la riqueza. Y eso va a depender de qué pasa con los trabajadores de cada sector (de los bancos, de la industria), qué pasa con la sociedad en su conjunto, de cómo esté asumiendo el debate sobre sus condiciones de existencia, de si la aflicción de una crisis económica la conduce a pensar en asumir el control de esa propiedad, etcétera. Si eso se da, pues le toca a un gobierno progresista apuntalar y pujar por su realización. Por eso los términos de la discusión que ustedes planteaban se me hacen muy de élite: ¿qué corresponde hacer, transar o desplazarlos? Estás transando y desplazando en tanto eres solamente tú, gobierno. ¿Cuándo se rompe esto? Cuando la sociedad va más allá.

MM / FO | Si analizamos tus textos más teóricos, uno puede encontrarse con una sorpresa. Si bien sos muy crítico con las tesis del tipo «cambiar el mundo sin tomar el poder», colocás, sin embargo, el centro del cambio en la sociedad civil y no en el Estado. Incluso limitás de forma bastante tajante la capacidad de acción transformadora del Estado, sobre todo en tus reflexiones sobre la forma-valor y la forma-comunidad. Eso me genera una duda teórica y estratégica: ¿en qué sentido podemos esperar que se mantenga activa la sociedad civil si el centro de la actividad de la izquierda luego del acceso al gobierno pasa a la gestión del Estado (y más específicamente, según tu opinión, a la gestión macroeconómica, es decir, a una actividad netamente estatal)? ¿La relación con los movimientos sociales no tiende entonces a convertirse en una relación de integración al Estado que erosiona su capacidad disruptiva? A su vez, esta concepción sobre el límite tan marcado de la capacidad de ac-

ción del Estado, ¿no termina por «desresponsabilizar» al gobierno de sus propias limitaciones?

Has escrito que las masas suelen girar hacia la apatía luego de los primeros avances políticos de un gobierno popular y, a la vez, que el centro de la actividad de la izquierda luego del acceso al gobierno debe estar en la economía. ¿Cómo hacer, entonces, para que la irrupción de la sociedad civil no se convierta en un *deus ex machina*?

AGL | Lo que pasa es que el Estado es un estado de la sociedad. Así como hay un estado líquido, uno gaseoso, uno sólido de la materia, el Estado es un estado de la sociedad, es una «manera de estar» de la sociedad, y esa concepción te permite superar muchas de las lecturas instrumentalistas, antiestatalistas y algo ingenuas dentro del marxismo. Esto viene aparejado con esta lectura de Marx de que el Estado es una *comunidad ilusoria*, es una comunidad, es lo común, sólo que es ilusorio porque está hecho por monopolios, es «lo común por monopolios», aunque parezca una paradoja.

Así te enfrentas con todas las corrientes anarquistas o marxistas que sostienen que no hay que tomar el poder, porque el poder es lo que tiene en común una sociedad. ¿Qué tienen en común los argentinos? Lo que está en el Estado: comenzando por el idioma, sus instituciones, su historia, sus riquezas naturales, sus impuestos, su sistema de salud, sus derechos... Eso está en el Estado, no es que ha salido del Estado, lo que pasa es que el Estado lo centraliza, se lo apropia. Eso es el Estado: esa facultad de monopolizar y centralizar lo que surge de la sociedad, la relación estatal. No puedes imaginar el Estado por fuera de la sociedad porque el Estado es una manera de estar de la sociedad.

Por eso esa lectura de Gramsci del Estado ampliado como sociedad política más sociedad civil. Así puedes criticar de esta manera marxista muy sólida a estas lecturasseudomarxistas que sostienen que no hay que tomar el poder. Y lo aplauden los ricos, porque dicen «qué bien que no tomen el poder, porque yo tengo el poder y voy a hacer lo que me da la gana con el poder». Y tú en tu casa, en tu barrio, pensando que no hay Estado, igual vas a usar el dinero del Estado, igual vas a mandar a tu hijo al colegio de ese Estado. Enton-

ces, ellos dicen «yo voy a decidir dónde va estudiar tu hijo, voy a definir cuánto vale el dinero, voy a pagar tu salario para que sigas escribiendo que no hay que tomar el poder». Es así, perverso, pero es así.

Pero así como hay esa crítica a esta lectura está la crítica de quienes te dicen que el Estado es un Estado perverso, maléfico, que está para dominar e imponerse a la sociedad. Una crítica que tampoco funciona, claro, porque simplemente ponle dinamita a ese ente maléfico y ya, tienes el comunismo. Eso no es cierto, porque en tu alma está el Estado, en tu manera de delegar cosas está el Estado, en tu manera de aceptar e imaginar cosas está el Estado, y mientras eso no sea demolido en tu misma psique, en tu esquema mental, va a seguir habiendo Estado.

Esta es la manera de enfocar teóricamente esta temática: dentro del Estado está la sociedad, la fuerza del Estado es la fuerza de la sociedad, su manera de ser, de estar articulada o desarticulada como Estado. ¿Cuándo se da la posibilidad de que sectores populares sean reconocidos por el Estado? Cuando se movilizan. ¿Cuándo hay un derecho? Cuando la gente asume que tiene ese derecho y lo conquista. ¿Cuándo se amplían los recursos comunes del Estado? Cuando la gente cree que ese es un recurso común y la manera de volverlo un recurso común es apelar al Estado, que los interconecta a todos, y puede convertir ese recurso en común. ¿Cuándo deja de tener recursos comunes el Estado? Cuando la gente cree que están mal utilizados por una burocracia política de corruptos y ve con buenos ojos que eso deje de ser de todos, porque cree que al pasar al sector privado también le va a alcanzar a él, y da paso entonces a la privatización, la acepta. Porque se ha privatizado con aceptación de las personas, no es que necesariamente se le metió bala para que acepten. A unos cuantos, sí, pero la mayoría aceptó porque creía que era la mejor manera de acceder directamente a esas cosas que eran comunes.

La fuerza y la debilidad de un Estado en su estructura material, en su infraestructura, en sus recursos, es la propia sociedad. En la experiencia continental, ¿cuándo se han dado procesos de nacionalización de recursos que estaban en manos de los ricos? Cuando la sociedad había discutido previamente que había que nacionalizar, que era injusto que eso, que era de



los bolivianos, o de los ecuatorianos, o de los venezolanos, se lo llevarán los gringos. Antes de que entre Evo, antes de que entre Correa, antes de que entre Chávez, la gente lo sentía así. Cuando entran, la gente les dice «eso es nuestro, ¿por qué sigue en manos de un extranjero?», entonces viene el gobierno y lo nacionaliza. Y entonces hay más dinero para construir escuelas, construir hospitales, pagar mejores salarios, y la gente lo vive así.

Se mejora, claro, pero eso no quita que haya un monopolio de esa mejora. No es un control directo sobre esa riqueza, sino a través de un monopolio. Un monopolio por el que la gente se siente representada, con el que puede dialogar, pero sigue siendo un monopolio. Un gobierno progresista se mueve en esos márgenes.

Claro, siempre hay un margen limitado de autonomía en cualquier gobierno. Si es más progresista, será más radical en función de la demanda social. Y si es progresista pero más centrada, a la demanda social siempre le pondrá un «pero», la dilatará un poco, en la letra chica del decreto o la ley establecerá un conjunto de limitaciones, de comisiones, que dilatarán en el tiempo la eficacia de una medida. Si es un gobierno más vinculado a lo popular, emergente de lo popular, no habrá letra chica y será como una acción más directa de ampliación de derechos, de ampliación del bien común, de estatización, de nacionalización.

Pero, en el margen, un gobierno progresista siempre se sostiene o está en la cresta de una ola social. ¿Por qué un gobierno progresista no puede andar, ir más allá? ¿Por qué no se plantea el horizonte socialista? Pero, además, ¿quién sabe qué es el socialismo? ¿Que estaticemos la banca, las empresas, la industria...? Resulta que no fue eso. Cuando uno revisa lo que pasó en 1917, en la comuna de París en 1871, reaparece el viejo debate marxista, el viejo debate comunista: el socialismo no es la estatización. Son medidas temporales, una serie de instrumentos temporales y circunstanciales para favorecer, para defenderte. Pero el socialismo era la capacidad de que la gente, la sociedad, pudiera ir democratizando no el posibilidad

de *beneficiarse* de esos bienes, sino el *control* de esos bienes, la *propiedad* de esos bienes, el *uso* de esos bienes, la *gestión* de esos bienes.

¿Cómo implantas esa forma de comunidad de bienes? ¿Por un decreto? No, eso no se establece por decreto, porque el decreto lo va a hacer cumplir una burocracia, una élite, que podrá ser popular, revolucionaria, pero que se asume la ejecutante de lo popular, y algo que podemos sacar de la experiencia de las revoluciones sociales del siglo XX es eso: no se puede suplantar, no se puede decir «yo represento a la clase obrera», no me puedo atribuir la representación de la clase obrera, ni me puedo atribuir la representación de las mujeres, la representación de los indígenas... O lo hacen las mujeres o no, no se hace. Al movimiento lo hacen las mujeres, al movimiento lo hacen los indí-

genas, al movimiento lo hacen los obreros, no yo, simulando, suplantándote a vos como mujer, como obrero, como campesino, como indígena.

Suplantar es fácil, pero no te conduce a ninguna revolución. Eso no es el socialismo. Ese tipo de experiencia revolucionaria es la que fracasó, la que sacamos como herencia

del siglo XX. Se trató de un proceso de suplantación por parte del Estado de la propia experiencia de la sociedad. Entonces, ¿qué? ¿Hay que esperar porque es la sociedad la que, en última instancia, en definitiva, puede marcar el horizonte? Pues sí. ¿Cuándo se va a poder avanzar en procesos de radicalización de las medidas de un gobierno? Cuando haya ese movimiento previo, ese debate previo de que hay que avanzar.

¿Cuándo un gobierno progresista puede ir más allá? Cuando tiene un debate social, un empuje social que abre, que produce una ruptura cognitiva, algo distinto, que no se ha dado todavía. ¿Se dará? Ojalá, ese es nuestro sueño, ¿no? Nuestro sueño es que pueda ir más allá y, de hecho, eso es el socialismo democrático. No es una medida en particular: el socialismo democrático es la posibilidad de que un conjunto de transformaciones sociales *in crescendo* sean una conquista. Es el desborde de la democracia, es ir del hecho electoral al hecho estatal, del hecho estatal al

El socialismo democrático es la posibilidad de que un conjunto de transformaciones sociales *in crescendo* sean una conquista. Es el desborde de la democracia.

hecho económico, del hecho económico a la fábrica, al banco, al dinero, a la propiedad... un desborde de la democracia.

Ahora, ¿qué significará eso en los hechos concretos? Hubo algunos atisbos cuando se dio el debate en la Asamblea Constituyente sobre la distribución de las tierras en Bolivia, o cuando los mineros tomaron la mina y comenzaron a gestionarla. ¿Qué hizo el gobierno ante esta toma de la mina para hacerla producir? La estatizas, y dejas que los compañeros se hagan cargo, no solamente del sindicato, sino de la gestión, de la administración, de la parte técnica, confiando también en que van a hacerse cargo de las ganancias a favor de todos y no solamente de ellos (cosa que no se dio, pero es lo que intentas impulsar). Yo reivindico eso.

Decías «pero, ¿no es una manera como de *lavarte las manos*?». Lo cierto es que no hay otra manera de avanzar la propuesta práctica de un socialismo democrático: o la sociedad avanza y empuja al Estado a procesos de mayor democratización, o no hay tal socialismo democrático. Porque el Estado no va poder sustituir esa acción, el Estado siempre va a ser —por más popular, democrático, revolucionario que sea, por muy compuesto por bolcheviques, leninistas, indianistas, cataristas— siempre va a ser un monopolio. Si no, ya no es Estado. Cuando deja de ser monopolio, ya no es Estado, ya estás en otra sociedad.

Si la sociedad no se anima a experimentar por su cuenta y riesgo propios formas distintas de propiedad del dinero y de las empresas, el Estado no puede hacerlo, porque eso no es socialismo, eso es simplemente una nueva estatización de medios de producción administrados por una élite. Buena gente, progresista, pero una élite que define qué se invierte, cuándo se invierte, dónde se compra, cómo está la relación con el trabajador... y el trabajador sigue siendo un trabajador dependiente de un salario, sin poder frente a la máquina y sin poder frente a la gestión de esa empresa.

Hemos llegado a la reflexión de cómo convivir (en nuestra experiencia) con la burguesía, cómo convivir y cómo desplazar temáticamente a la burguesía hasta que se dé un proceso de mayor radicalización. Proceso que no tiene que ser solamente nacional, sino la perspectiva de que sea una radicalización más regio-

nal, que se puedan apoyar entre distintos países, para que esta experiencia de nuevas formas de propiedad sean apoyadas por otras formas de propiedad en el continente. Eso es algo que ya no depende solamente de una experiencia a ser resuelta por un solo país (el viejo debate de si se puede dar el socialismo en un solo país).

MM / FO | El argumento sobre la estatización tiene varios puntos sobre los que me gustaría detenerme. En primer lugar, hay un aspecto sobre el que no tengo objeciones: la estatización no es suficiente para la socialización. Esto ya fue planteado, por ejemplo, por Castoriadis y Lefort, cuando hacían eje en que se necesitaba cuestionar la división capitalista del trabajo al interior del proceso productivo y que no bastaba con cambiar la forma jurídica de las relaciones de producción. Sin embargo, desarrollás también un segundo argumento que indica que no es *deseable* ir muy lejos con la estatización, porque si uno va muy lejos lo que está haciendo es suprimir mediante actos de voluntad formas sociales —el dinero, el mercado, el valor— que solo pueden transformarse en el curso de «largos procesos» y no mediante actos administrativos de gobierno.

Respecto a este segundo punto: la crítica a una concepción «hipercentralista» o «hiperestatista», ¿no corre el riesgo de recaer en el problema inverso, es decir, ignorar las constricciones estructurales que la propiedad capitalista impone a todo proceso de cambio social y político? Estoy pensando en explicaciones clásicas, como las de Fred Block, cuando describe la dependencia del Estado respecto al capital: en la medida en que se mantiene el monopolio privado de la inversión, los capitalistas pueden abstenerse de invertir, fugar capitales, y todo concluye en espirales inflacionarias que suelen deteriorar a los gobiernos y derrotar los procesos.

Fue el caso de Allende (la crisis inflacionaria posterior al aumento de salarios de 1971), de Venezuela (sobre todo, a partir de la caída del precio del petróleo) o incluso de experiencias menos radicales: cuando se genera un clima que no es considerado confiable o favorable a los negocios, las clases dominantes responden de este modo, incluso de forma espontánea. La pregunta es: aun si no es *suficiente* la estatización, ¿no es *necesaria* respecto a

los resortes fundamentales de la economía (lo que creo que incluye la banca y el comercio exterior), para evitar las constricciones estructurales que impone la «confianza empresarial» sobre la acción del Estado? Cuestionando las lógicas hiperestatistas, ¿no corremos el riesgo de recaer en una concepción gradualista, que siempre nos enfrenta al problema del límite objetivo que pone a las reformas redistributivas el imperativo de rentabilidad de una economía que sigue siendo capitalista? ¿Qué se puede esperar de la estabilidad de un proceso de cambio, si la burguesía sigue allí como clase económicamente dominante?

AGL | Es interesante el enfoque de Block porque te muestra (a diferencia de todas las otras interpretaciones marxistas) un hecho muy práctico, real, concreto: cómo son las constricciones. Es decir, tipos que, sin necesidad de acordar, cuando ven un gobierno muy progresista, que no sabemos bien qué va a hacer, guardan su plata, de forma natural, sin necesidad de ninguna conspiración, pero sugiriendo sí una acción de clase y una comprensión de clase hacia el Estado, hacia el gobierno.

Pero se supone que un gobierno de izquierda o progresista ha irrumpido en un momento de crisis, donde esos que tienen la plata no están pagando bien, no están contratando, están teniendo problemas... Porque si estaba funcionando bien el gobierno y la economía, entonces el gobierno de izquierda no hubiese llegado. ¿Cuándo ha entrado un gobierno de izquierda cuando la economía está bien, cuando todo está tranquilo, cuando todos tienen empleo? No, no entran. Los gobiernos progresistas entran porque está funcionando mal, es decir, cuando esa construcción justamente está en duda, porque sacaron sus capitales al extranjero, porque no están invirtiendo, están especulando en la banca, están generando desempleo y sufrimiento social.

Cuando llega un gobierno progresista de izquierda es porque la gente le dice «oye, haz algo frente a estas agresiones que vivimos». Eso le da la autoridad y la legitimidad para poder tomar un conjunto de medidas. Que no lo haga ya no es un tema de constricciones, ya no es un tema de veto, sino que es que no quieres hacerlo, no te sientes predispuesto, no ha habido el suficiente debate, le tienes miedo o no estás para eso.

Ya se trate de una limitación del gobierno, de sus esquemas mentales, de su manera de ver el mundo, de entender el mundo, y de lo que se cree capaz de hacer, la cuestión es que los mecanismos están ahí.

Nosotros entramos en medio de una crisis económica y, si no hubiéramos tomado medidas de nacionalización, la crisis hubiese continuado durante los diez años siguientes. Entramos y no había plata, pues, ¿dónde está la plata? En telecomunicaciones, en energía eléctrica y en hidrocarburos. También hay dinero en otras cosas, sí, pero ya es más complicado; con esto ya tienes una primera fuente. El Estado se potencia, has nacionalizado el gas, el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, ya tienes una fuente de ingreso que te permite un conjunto de políticas públicas.

Luego, el tema de los salarios siempre va a ser una cosa complicada. Pero, en catorce años, nosotros nunca nos reunimos con los empresarios para negociar salarios: nos reuníamos con la COB (Central Obrera Boliviana) y no con los empresarios; no había nunca una tripartita. Pero también hacías tus cálculos: cómo está el tema de ventas acá, cómo está el tema de ganancias, cómo están registrando los impuestos, cómo ha crecido la economía... Tienes una mirada sobre dónde puedes ajustar, y vas a ajustar a los empresarios por acá, pero después tienes que devolver el dinero por otro lado (subvención de tarifas eléctricas, subvención de transporte, de gasolina). Entonces, cuando el empresario protesta, le puedes decir: «si te doy a vos gasolina a mitad de precio, te doy gas a la tercera parte y te doy agua a la quinta parte, y tú no quieres aumentar el salario. ¿Quieres que nivele? ¿Quieres que ponga un precio industrial a todo, un nuevo precio, sin subvenciones?».

El Estado tiene esas facultades, eres monopolio de monopolios. Uno de tus monopolios es fijar los precios, fijar las tasas de convertibilidad de la propiedad, del dinero, de los servicios. Esas son facultades del Estado, y las utilizas. Porque tu horizonte de acciones es distinto: no has entrado con temor a tomar decisiones, pero sabes también que no puedes jalar mucho, ¿no? Nosotros logramos aumentar 450% el salario real del trabajador: de 50 a 306 dólares. Si le quitas la inflación, del 50%, en catorce años tienes un aumento de salarios del 400%.

¿Por qué no más? Pues porque si seguías aumentando los salarios corrías el riesgo —y comenzó a suceder— de afectar a las empresas pequeñas, cuyas tasas de rentabilidad son menores. Habías jalado lo suficiente, entonces. Pasar de 50 a 306 dólares es un buen avance. Queríamos 400 dólares de salario mínimo, pero ahí ya veías que a las microempresas, a la que contrata cuatro personas para vender zapatos, o bicicletas, ya no le da. De hecho, algunas habían comenzado a cerrar. Entonces te detienes. Ahí un gobierno progresista tiene que saber cómo moverse, porque vas a tomar en cuenta a los trabajadores, pero luego también a los que están encima de los trabajadores, este sector medio, medio-popular, la gente que tiene pequeñas empresas, que contrata dos operarios para una tienda, para un servicio, para vender comida. Los de arriba pueden soportarlo, siguen ganando y no te preocupas por ellos. Pero sí preocúpate por este sector que, en nuestra sociedad, es parte del bloque popular.

El ajuste, entonces, se dirige hacia arriba. Has nacionalizado las empresas extranjeras, te has peleado, y comienzas pues a afectar la banca: le pusimos un impuesto de 50% a sus ganancias, que van al Estado, y eso funciona. Si la banca generó dos mil millones de bolivianos en un año, mil pasan al Estado. Y la banca puede disminuir aún más su rentabilidad, entonces obligas a que preste crédito productivo, y eso fue lo que hicimos: el 60% del dinero de la banca al sector productivo y el 40% a especulación, a comercio, a las tasas que quiera. Pero el 60% al sector productivo. ¿Para qué? Para que generes inversión, para que todo ese dinero ahorrado (que en verdad es de los bolivianos) se reinyecte a la producción.

Tienes así una dinámica de crecimiento de la economía utilizando el dinero de los privados. Porque eres monopolio, puedes definir tasas de convertibilidad, puedes definir tasas de interés, puedes obligar al dinero a ir en una determinada dirección. La posibilidad de que el Estado implemente un conjunto de políticas económicas que rompan este poder de veto empresarial pasa por políticas de ese tipo. Allí donde el poder de veto es demasiado fuerte, simplemente lo quiebras: te metes y construyes una empresa del Estado.

Un ejemplo: el caso de la soja en Bolivia. La soja se produce en el oriente; hay cuatro empresas agroindus-



triales, de la oligarquía cruceña (que no solamente era nuestra enemiga política antes –y lo es ahora–, sino que encima dependía de ellos el abastecimiento del alimento de una parte de la población. Y como la carne de pollo es la más popular, porque es la más barata, entonces ellos tenían un poder de veto: no vendo torta de soja a los pequeños productores de carne de pollo, entonces el precio del pollo se encarece y entonces, ¿quiénes protestan? Pues la gente, la familia popular, que come pollo, y protesta contra el gobierno porque el pollo ha subido de 10 a 15 o 20 bolivianos. ¿Qué haces entonces? Te metes, le quitas al sector sojero la base social de dependencia del pequeño productor. El pequeño productor campesino, nuestra gente, depende del productor sojero porque le adelanta dinero para insumos, para fumigantes, para máquinas, y le compra por adelantado la soja, pues tiene toda la cadena. Pero, como Estado, puedes intervenir: le compras tú la soja a ellos y, como siempre va a haber un empresario más pequeñito dispuesto a procesar esa soja, entonces es posible cortar esa cadena. Ahí es cuando comienzas a aumentar tu facultad de negociación, a quebrar ese poder de veto, ese poder de control frente al gobierno.

Pongo este ejemplo pero es un razonamiento general. Se trata de cruzarle el camino a los sectores empresariales que tienen demasiado poder de veto. No necesariamente estatizas todo, pero sí cortas la cadena, los debilitas, y eso hicimos con la soja; ya nunca más volvió a ser un problema. Desde 2009 hasta el 2020 ese mecanismo de chantaje que existía con la soja nunca más volvió. Y si molestan un poco más, les suspendes las exportaciones, porque como gobierno tienes el monopolio de decidir si se exporta o no se exporta. Entonces estableces, simplemente, que no se puede exportar porque es para el consumo interno. Aunque el 80% de la producción de soja es para el extranjero, hay un 20% que es para consumo interno. Pues bien, dejas exportar solo el 20, 30, 50%, ellos se asfixian (no tú) y ya. No voy a hacer la guerra, voy a vender la soja a los polleros a un precio definido por el Estado. Cualquier poder de veto por parte de las fuerzas

empresariales puede ser disminuido, relativizado o afectado. Depende de si el gobierno tiene la decisión de hacerlo.

Sin embargo, el problema central en todo esto sigue siendo, para mí, si en la sociedad hay fuerza para ir más allá de estas regulaciones, de estas convivencias. Y eso ya no es un tema del Estado. Un Estado y un gobierno tienen una infinidad de herramientas para mantener este control, esta regulación y convivencia; pero no disponen de las herramientas para ir más allá de eso, para plantearte una nueva relación de propiedad de la riqueza. Ningún gobierno las tiene, porque dependen del empuje de la sociedad.

Ahí veo yo la preocupación, la dificultad, de nuestras experiencias progresistas. Y aquí también me estoy peleando con la mirada de los compañeros que dicen

que las experiencias progresistas son un tipo de “revolución pasiva”. Porque, claro, eso funciona si tuvieras una poderosa acción colectiva yendo más allá, planteándote temas de nuevas relaciones de propiedad, de democratización de la riqueza más radical. Si ahí viniera un gobierno progresista a asfixiar, a encasillar, a contener, a reprimir ese tipo de experiencias... Esos compañeros hablan de memoria, no conocen la experiencia real de la sociedad.

**Hay que estar a un paso
–y nada más que a un paso–
de la gente. No dos, ni cuatro.
Un paso: ochenta centímetros.
No más de ochenta
centímetros de las personas,
de lo que están sintiendo, de
lo que están experimentando.**

Los que intentan introducir el concepto de revolución pasiva o la idea de pasivización de la sociedad por parte de los gobiernos progresistas tienen que, primero, con hechos prácticos, con algo de etnografía social, mostrar qué experiencias de la sociedad, qué experiencias de acción colectiva han ido más allá de las formas de propiedad, de las formas de gestión que están prevaleciendo. Pongo el caso de Bolivia. Cuando ha habido alguna experiencia –como el caso minero de Huanuni – de ir más allá de la forma de propiedad y de gestión por parte de los trabajadores, el gobierno se ha sumado. Pero el resultado ha sido todo lo contrario a lo que se suponía: en una mina con cinco mil trabajadores, en la que los trabajadores

hacen una autogestión de la empresa con recursos públicos, al final resulta que las ganancias de esa empresa no regresan a la sociedad sino que se quedan en los mismos cinco mil trabajadores.

Al final, no son dos personas las que se apropian y gestionan un bien de todos, pero se lo apropian y gestionan cinco mil personas en lugar de 10 millones, como debería ser en una forma de autogestión real. Entonces estas formas de autogestión, que se dieron entre los años 2010-2011 y 2017-2018, incluso fomentadas por el gobierno, apuntaladas por el gobierno, acabaron –por la propia dinámica de los compañeros, por la falta de experiencia en gestión y por la propia experiencia cultural– en una forma de apropiación privada. Ese es el caso más novedoso de una forma de gestión que se planteó la propiedad y la gestión más allá del régimen capitalista pero, al final (y no por culpa del gobierno, al contrario, con apoyo financiero del gobierno), recayó en esta forma de apropiación.

Entonces esta otra crítica tampoco tiene asidero, es más un juego de palabras para ver quién es más gramsciano, más izquierdista, pero no tiene sustento en la realidad práctica de acciones colectivas que hayan apuntado más allá y gobiernos progresistas malvados, que hayan venido a asfixiar ese despertar de la sociedad. Los gobiernos progresistas, por lo general –puede haber excepciones– han acompañado los niveles de maduración y de debate de la propia sociedad. Tampoco se han distanciado mucho más hacia arriba ni han ido por atrás: han acompañado, ha habido una relación más bien virtuosa entre la acción colectiva y la dinámica del gobierno progresista.

**MM / FO | La concepción de que es necesario es-
perar nuevas oleadas de movilización popular para
que el Estado pueda ir más lejos, ¿no corre el ries-
go de convertir al gobierno en una representación
pasiva de la sociedad, disminuyendo la autonomía
estatal y, por lo tanto, también su responsabili-
dad? ¿No es posible pensar una figura intermedia
entre el vanguardismo «sustituista» y el mero
acompañamiento al estado de ánimo social, un
concepto de dirección en el que las fuerzas gober-
nantes de un proceso de cambio funcionan como
un revulsivo de radicalización de la experiencia de
las masas?**

Para tomar ejemplos de la historia latinoamericana: la experiencia de Chávez luego del intento de golpe de 2002 y, sobre todo, del *lockout* patronal de 2004, ¿no puede entenderse así, como un revulsivo permanente que empujaba hacia la radicalización social? La declaración del carácter socialista de la revolución cubana en 1961, ¿no puede también comprenderse de este modo? A mi juicio, es una mala explicación la que adjudica la radicalización de la dirección cubana fundamentalmente a la “presión de las masas”. En todo caso, la evolución de la dirección encontró un eco, un contexto propicio, en la dinámica social. Nunca es transparente qué es lo que quieren las masas, hasta donde están dispuestas a ir, cuáles son las relaciones de fuerza. Se trata de interpretar y actuar políticamente sobre ellas. El gobierno considerado como *agente* que actúa sobre la sociedad, y no solo como *representante* de la sociedad, ¿no tiene más para hacer en pos de tensar y abrir las relaciones de fuerza sociales?

AGL | Ciertamente, un gobierno tiene muchas herramientas para ayudar, e incluso para agendar temas. Tener el control de las cosas comunes de una sociedad ya es mucha cosa. No todo lo común está en el Estado, ojo. Hay cosas comunes que no están en el Estado. Pero, cuando pueda, se las va a jalar: esa es su función. Si no, no es Estado. El tener esas cosas comunes ya te da una fuente de poder muy grande, incluso sobre los elementos de la reflexión, del sentido común, de los esquemas mentales. Si a eso le sumas los recursos... El 20, el 30 o el 40% del PIB de un país otorgan los elementos materiales y técnicos para convertir esas ideas o esas propuestas en hechos eficaces. No es poca cosa.

En ese sentido, un gobierno progresista puede ayudar a agendar temas de debate, puede ayudar a esclarecer la propia experiencia de la sociedad. Hay una infinidad de tareas que se le presentan a un gobierno, más allá de la mera gestión. Tareas de carácter pedagógico, de carácter reflexivo para con la sociedad, pero lo que nunca puede hacer es sustituir la experiencia de la sociedad, no. Ni siquiera convirtiéndola en relato, convirtiéndola en libro, en texto, en video, en ley o en decreto. No puede sustituir esa experiencia, y el socialismo es una experiencia de la sociedad.

En ese sentido, soy más leninista. Pero no del co-

munismo de guerra, sino de la NEP, que es un poco la confesión de Lenin: no importa cuán radical haya sido la vanguardia, no importa cuántas medidas de avanzada haya podido implementar (un momento necesario para protegerse). En los hechos, solo se podrá avanzar hacia algo distinto al capitalismo si la sociedad experimenta la necesidad de algo distinto al capitalismo. Eso es la NEP y ahí he quedado yo, en ese Lenin del «Más vale poco y bueno» de 1923.

Ese textito es una reflexión, una especie de confesión de Lenin, que evalúa lo que se hizo, el comunismo de guerra, y traza una especie de balance de esos tiempos tan turbulentos en los que se creía que se podían tomar medidas muy audaces para que luego vengan los hechos a decirte «bueno, lo que tenemos es un capitalismo de Estado». Hemos de poder superar el capitalismo de Estado no por cuántas estatizaciones hagamos, sino por cuántas maneras de comunidad real construyan las personas en el hecho económico. El fondo es cómo construyes esas formas de comunidad en tanto experiencia de las personas.

Porque el socialismo es eso: avanzar en la construcción de comunidades, no desde arriba sino como la única forma de comunidad que puede haber: entre personas. No por decisión de élites o de los monopolios, porque eso es justamente la negación de la comunidad. El Estado es, por definición, una negación de la comunidad. Es un monopolio y, por lo tanto, no puede construir comunidad. Puede colaborar, puede visibilizar, decir «por aquí van las cosas», ayudar a crear... Pero decir «oye, bueno, ahora ustedes hacen comunidad; vengan, produzcan»... eso no es comunidad. Eso es comunidad desde arriba, y ya sabemos a dónde conduce.

El debate de los cubanos de los últimos diez años va un poco en esa sintonía: cómo implementar un conjunto de medidas que no sean las medidas que el Es-

tado ha decidido, que el Estado ha regulado. Porque, según el Lenin de 1921, eso no es más que capitalismo de Estado, y entonces ponle ese nombre: capitalismo de Estado. ¿Cómo da un paso más ese capitalismo de Estado? Con comunidad. ¿Quién forma la comunidad? La gente y el trabajador en la fábrica o en el campo.

Y ahí viene todo el debate sobre cómo se dan las experiencias de comunidad en la sociedad, pues, claro, hay experiencias locales, fragmentadas. El mundo indígena campesino tiene una herencia de comunidad. Mutilada, sí, pero la tiene. El mundo urbano tenía construidas comunidades locales en lo barrial, sí, en ciertos aspectos: para temas de consumo, de servicios... En fin. Tienes un fragmento de comunidades, de retazos de comunidades, y eso puede ser un punto de partida para lo nuevo, para lo comunitario. El Estado puede ayudar, pero no puede sustituir ni puede inventar. Porque comunidad hay en tanto hay creación libre y asociada de los propios productores directos, no puede ser una asociación impuesta, regulada y administrada por el monopolio del Estado, porque eso ya no es una comunidad.

Entonces la posibilidad de una salida intermedia, es decir, una salida no vanguardista que sustituye, pero tampoco el simple acompañamiento, está en ese Lenin. En esa versión leninista que te decía que hay que estar a un paso —y nada más que a un paso— de la gente. No dos, ni cuatro. Un paso: ochenta centímetros. No más de ochenta centímetros de las personas, de lo que están sintiendo, de lo que están experimentando. No estás arriba, no estás en el segundo piso, ni en el tercero: estás a un paso, pero al lado de ellos. En el mismo hueco, quizás. No se me ocurre una salida intermedia, no la he reflexionado, no la veo, no me convence, tampoco. Me gusta esa expresión de Lenin. Ir exactamente a un paso y nada más que a un paso de la experiencia de la sociedad laboriosa, de los trabajadores. ●

Las armas de la crítica

ARRANCA POR LA DERECHA
EL GENIO DEL FÚTBOL MUNDIAL

Entre la inclusión y la igualdad

¿Es menos desigual América Latina luego del ciclo de gobiernos progresistas?

¿Qué sucedió con la estructura social de América Latina durante el posneoliberalismo? Esa es la pregunta que abordamos en *La ¿nueva? estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas* (Siglo XXI, 2020). Allí presentamos un balance de los cambios en la estructura social durante los primeros quince años de este siglo, un período caracterizado por un crecimiento económico generalizado y por lo que se ha llamado «posneoliberalismo» o «giro a la izquierda». Entre 1998 y 2011, once países latinoamericanos eligieron presidentes de izquierda, centroizquierda o nacional-populares, una situación hasta entonces inédita en la historia de la región.

Analizamos, entonces, las tendencias y los lineamientos generales de la política en dimensiones clave de la estructura social: población, familia, distribución del ingreso, salud, educación, vivienda y hábitat. Nos detuvimos en los patrones comunes, pero también en las diferencias entre países y, dentro de cada uno, en las desigualdades de clase, de género y étnicas.

Una mirada de conjunto sobre estas dimensiones muestra importantes cambios. Durante estos años prácticamente todos los indicadores sociales mejoraron. Se trató, en este sentido, de una etapa de claro

incremento del bienestar de las y los latinoamericanos. Pero el alcance de la transformación no fue el mismo en cada tema abordado, ni tampoco el lapso de tiempo en que tuvo lugar. Algunas de las mejoras, si bien se intensificaron en esta etapa, comenzaron antes.

Esto se observa, por ejemplo, en los indicadores demográficos (mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, fecundidad) o en materia de ampliación de la cobertura educativa, y se vincula con que cada dimensión tiene condicionantes del pasado, ciclos y temporalidades específicas. Los cambios en los patrones demográficos y en las relaciones familiares en general ocurren lentamente; las transformaciones en salud, educación y vivienda un tanto menos, porque en términos relativos son más sensibles a las políticas de un período dado. En fin, las tendencias en la pobreza, la distribución de ingresos y el mercado laboral suelen ser más inestables, al estar afectadas de manera más directa por las políticas y los ciclos económicos (y, de hecho, aquí es donde la marca del período resulta más potente).

¿Cuál fue, entonces, la impronta que dejó el posneoliberalismo en nuestras sociedades? El elemento distintivo fue una mayor inclusión social. Pero inclusión



no es lo mismo que equidad. Nuestro argumento central es que es más ajustado decir que el posneoliberalismo se caracterizó por una disminución de la exclusión que por un avance en términos de igualdad, y esto a pesar de que la promesa por la reducción de la desigualdad estuvo en el centro de las preocupaciones por la cuestión social durante esta etapa.

La agenda posneoliberal puso el foco en remediar las formas de exclusión más extremas producidas en las últimas décadas del siglo XX y, en menor medida, otras de mucha más larga data, como las que afectan a los pueblos originarios y afrodescendientes. ¿En qué se ve esto? En primer lugar, en los incrementos que experimentaron los ingresos de la población de menores recursos, producto de las mejoras en el mercado laboral y de la expansión de los programas de transferencias condicionadas y las pensiones a la vejez. En particular, las transferencias públicas hacia los hogares más desfavorecidos devinieron en políticas de muy amplia cobertura y de carácter permanente (no solo para atacar coyunturas críticas), dotando de recursos económicos —aunque, en muchos casos, insuficientes— a millones de latinoamericanos que literalmente no contaban con ningún ingreso a principios del milenio.

En segundo lugar, la reducción de la exclusión fue también el resultado de la ampliación de las coberturas en salud y educación, que se intensificaron en estos años, así como de las mejoras en hábitat y vivienda. En todos estos casos, el papel del Estado fue crucial. No tanto por el carácter novedoso de las medidas implementadas (pues hubo pocas innovaciones en las políticas públicas), sino por el incremento de la inversión y el aumento de los beneficiarios, así como por la decisión de retomar las políticas de protección laboral que habían sido debilitadas en el período neoliberal.

Por supuesto, los avances no tuvieron la misma magnitud en los distintos países: en algunos, como Bolivia, fueron notables; en otros, más modestos. En cada país, además, persisten núcleos de exclusión importantes: grupos sociales que no acceden a la educación básica; asentamientos informales que continúan distinguiendo a las ciudades de la región, enfermedades de la pobreza que, lejos de desaparecer, se intensificaron, y otras que, consideradas erradicadas, reaparecieron. Estos problemas siguen concentrándose en los sectores de menor nivel socioeconómico, los pueblos originarios, los afrodescendientes y la población rural.

Hay también diversos aspectos de la inclusión que han sido cuestionados. En primer lugar, su carácter

El elemento distintivo del posneoliberalismo fue una mayor inclusión social. Pero inclusión no es lo mismo que equidad.

limitado, en el sentido de que en muchos casos se trató de una «integración excluyente», como la ha llamado la socióloga María Cristina Bayón. En segundo lugar, hay sectores que, a pesar de haber mejorado, permanecieron en una situación de alta vulnerabilidad, como los trabajadores informales, con altas chances de ser los primeros en ver caer sus niveles de vida ante cambios en el contexto económico. Finalmente, otro tema se refiere al balance entre bienes privados y públicos. Algunos han advertido que las mejoras en el bienestar de la población se basaron más en avances en el consumo privado que en la provisión de bienes colectivos como infraestructura, transporte, salud o educación.

Sin embargo, aun con estos límites, creemos que en su conjunto las políticas de vivienda, salud, educación, ingresos y trabajo tendieron a tejer una red de protección básica y un piso mínimo de bienestar para los sectores más desfavorecidos.

Pero, ¿qué sucedió con la disminución de la desigualdad, la gran promesa de la década progresista? En comparación con el ciclo previo, en esta etapa hubo una tendencia a la disminución de las desigualdades. Sin embargo, en general los gobiernos modificaron poco las bases estructurales de las desigualdades persistentes. No hubo casi transformación en las estructuras productivas ni muchas alternativas a los modelos extractivos o neoextractivistas; la propiedad y la riqueza se mantuvieron tanto o más concentradas que en el pasado; a pesar de algunos avances, no hubo reformas tributarias integrales que dieran a los sistemas un carácter más progresivo. En otras palabras, no hubo procesos que llevaran a un cambio

profundo en la relación entre las clases, los sexos y los grupos étnicos.

A fin de cuentas, si bien es cierto que hubo menos pobreza y disminuyó la desigualdad de ingresos, las élites se tornaron aún más ricas. En la misma dirección, la mayor parte de los indicadores sociales mejoraron en términos absolutos; los «pisos de bienestar» se incrementaron y casi todos los grupos, clases y regiones conocieron mejoras en el período. Sin embargo, en muchos casos las brechas no disminuyeron. Y esto porque los países, regiones subnacionales y grupos más favorecidos avanzaron más que los países más pobres y que los grupos y zonas más desaventajados.

Por lo demás, la desigualdad adquiere nuevas formas. América Latina fue exitosa en la expansión de la cobertura educativa, pero la inclusión parece haber estado acompañada de un aumento en las desigualdades de calidad. Los déficits de vivienda son menores, pero la segregación espacial se hizo más visible. Se expandió el acceso a servicios básicos de salud, pero debido a las necesidades de atención de la población envejecida y a los avances tecnológicos, aparecen tratamientos y drogas muy caros, inaccesibles para los de menores ingresos. Aumentó la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero son aún peor remuneradas y experimentan una sobrecarga de trabajo porque a su mayor presencia en el mundo laboral todavía suman el peso de las tareas domésticas. Si, como dijimos, hay ciertas mejoras en los indicadores sociales de los pueblos originarios, el avance de la frontera agrícola y en particular de la minería extractiva está perjudicando de manera violenta a sus comunidades. Por último, es preciso señalar que corrientes del pensamiento latinoamericano, como la del «buen vivir», han puesto cada vez más en cuestión nuestras perspectivas hegemónicas sobre el desarrollo y el bienestar económico.

Ante estas evidencias, la pregunta que surge es si en el período hubo un apoyo de las sociedades a la reducción de la desigualdad. Juan Pablo Pérez Sáinz sostiene que durante esta etapa la repolitización de la cuestión social puso la temática de la desigualdad en el centro del debate público y, como corolario, abrió una profunda disputa por la definición legítima de los modos de percibirla, medirla y juzgarla en tanto una de las claves para procesar políticamente los conflic-

tos en la región. Y, en efecto, no solo los temas como ingresos, género o etnia fueron juzgados bajo la lente de la desigualdad, sino también cuestiones ambientales, de violencias de todo tipo, entre otras que por lo general no habían sido decodificadas desde este punto de vista.

Los análisis sobre la opinión pública latinoamericana mostraron indicios de una mayor preocupación por la injusticia distributiva y una reducción de la tolerancia social a la desigualdad en el nuevo milenio. Las encuestas documentaban un incremento en el porcentaje de personas que afirmaban que sus sociedades debían ser menos desiguales e, incluso, un creciente «hartazgo respecto de las élites», un cuestionamiento a las formas de legitimación de la desigualdad extrema.

Ahora bien, ¿es suficiente la percepción de injusticia distributiva para construir políticas activas de reducción de la desigualdad? Nuestra hipótesis es que, a pesar de las opiniones constatadas, en esta etapa no se habría logrado un consenso social amplio en torno a la necesidad de reducir la desigualdad en forma significativa, en términos de las medidas que de hecho son necesarias para lograrlo.

La nueva agenda política posajuste, que volvió a poner en el centro de la escena los históricos déficits sociales de América Latina, parece haber involucrado más un consenso respecto de la inclusión social que de la igualdad. Los gobiernos progresistas gozaron por años del apoyo de amplias coaliciones sociales, que reunieron a diferentes grupos que habían sufrido los efectos de la etapa neoliberal. Sectores marginales, trabajadores industriales, clases medias empobrecidas, colectivos de mujeres, grupos de derechos humanos, población indígena y afrodescendiente, entre otros, formaron parte del apoyo social inicial a estos gobiernos. Ese soporte permitió desarrollar políticas para mejorar la inclusión social. Es decir, cuando el objetivo fue reducir las manifestaciones más extremas de la exclusión social, las coaliciones sociales brindaron amplio apoyo.

Pero no debe darse por sentado que las coaliciones sociales que apoyaron políticas destinadas a ampliar la inclusión social también estarían dispuestas a dar su apoyo a la reducción de la desigualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad es muy exigente. La igualdad no

En general los gobiernos modificaron poco las bases estructurales de las desigualdades persistentes.

solo exige medidas que eleven las condiciones de vida de la población de menores ingresos –como las transferencias de ingreso, las pensiones no contributivas e, incluso, los salarios mínimos–, sino también medidas que reduzcan la elevada concentración de los ingresos y del patrimonio. Exige, asimismo, evaluar cada eventual medida pública, inversión privada, obra de infraestructura, plan de seguridad, salud o educación y preguntarse cómo gravita en las desigualdades de clase, género, grupo étnico, edad o territorio.

Pero, por sobre todo, la igualdad exige prestar atención a las clases bajas, pero además a las clases medias y altas. Por ejemplo, en las políticas tributarias se deben aplicar, como señala J. P. Jiménez, criterios de «equidad vertical» (trato adecuadamente desigual a quienes están en distintas circunstancias) y de «equidad horizontal» (trato igual a quienes se hallan en la misma situación) dado que el gran peso de los impuestos recae sobre las y los asalariados.

Una disminución significativa de la desigualdad, en suma, supone que los grupos más favorecidos acepten resignar recursos y privilegios. Esta dimensión de la desigualdad estuvo poco presente en las agendas políticas posneoliberales, y, cuando la estuvo, en general encontró fuertes resistencias de los grupos de poder y, a menudo, hasta de sectores de las clases medias. El interrogante de cara a la tercera década del nuevo milenio que recién comienza es si los movimientos progresistas han aprendido de los logros y de las limitaciones del pasado reciente así como de los nuevos retos, en particular conciliar la agenda de desarrollo y distribución con la agenda ambientalista o, más bien, con el cuidado de todas las formas de vida. ●

El ajuste espacial



David Harvey analiza la confrontación entre Estados Unidos y China, la dinámica capitalista que la impulsa y los motivos por los cuales debería preocuparnos la posibilidad de una nueva guerra.¹

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se planteó un verdadero problema en el horizonte de la economía global. Había grandes posibilidades de que se recrearan las condiciones de la depresión de los años 1930, aunque esta vez en el marco del enorme incremento de la capacidad productiva favorecido por la economía de guerra y con una gran cantidad de tropas militares regresando a sus hogares. Frente a esta situación, las autoridades políticas de Estados Unidos comprendieron algo importante: el proceso de descolonización, que se había convertido en un hecho desde que terminó la Primera Guerra Mundial, representaba una ventaja. Era necesario deshacerse del control que el Reino Unido, Francia y Holanda ejercían sobre sus posesiones coloniales para que estas dejaran de ser mercados cautivos de las potencias imperiales. Dado que no tenía tantos mercados cautivos, Estados Unidos dirigió la apertura en beneficio de sus propios intereses. Entendió que podía colonizar el mundo con tanta facilidad como el Reino Unido y Francia, pero a través de un sistema global de libre comercio.

La descolonización y la apertura del mundo a estructuras alternativas de desarrollo ayudarían a absorber los excedentes de capital estadounidense de la posguerra. Esta fue la genialidad del Plan Marshall. Sin embargo, el plan no consistía simplemente en utilizar a Europa como un sumidero para las mercancías excedentes de EE. UU. Se trataba también de reconstruir el capital y los sitios de acumulación de capital en todo el mundo, expandiendo considerablemente

el mercado mundial. El capital excedente se desplazó hacia Japón y Europa, lo cual conllevó la revitalización de estas economías.

El período que va desde 1945 hasta 1970 estuvo caracterizado por un crecimiento espectacular de la economía global, y esto dependió en buena medida de la creación de estos centros alternativos de expansión y de acumulación de capital. Sin embargo, en los años 1980, Japón y algunas partes de Europa Occidental empezaron a superar a EE. UU. en el escenario mundial. Estados Unidos se encontró en la situación de haber ayudado a crear a sus propios rivales. Si estuviese escribiendo esto en los años 1980, estaría describiendo a Japón y a Alemania Occidental como hegemónicas en términos del capitalismo mundial. Estos eran los países que llevaban la delantera en aquel entonces.

Estados Unidos alentó este proceso porque representaba un beneficio particular, especialmente en el contexto de la Guerra Fría con la Unión Soviética y frente a las perspectivas de surgimiento de una alternativa comunista en China. A EE. UU. se le planteó entonces el problema de cómo combatir el crecimiento explosivo de Alemania Occidental y de Japón. Su solución fue crear un orden mundial normativo en el cual todos los países pudieran competir y beneficiarse del comercio libre. Estaba convencido de que podía resultar ganador bajo este nuevo sistema,

1. Este artículo es un fragmento del libro *The Anti-Capitalist Chronicles* (Pluto Press, 2020).



en parte porque fue construido salvaguardando la ventaja de sus propios capitales.

Este fue el orden neoliberal del libre comercio: la reducción sistemática de las barreras aduaneras y la creación de un sistema financiero global que facilitaba el desplazamiento tanto del capital como de las mercancías a lo largo y ancho del mundo. El auge de las nuevas tecnologías del transporte y de las comunicaciones también fue de gran ayuda. Una de las consecuencias de esto fue el desarrollo de múltiples centros alternativos de acumulación de capital. Japón, por ejemplo, se desarrolló enérgicamente durante los años 1960 solo para terminar, en los años 1970, con enormes cantidades de capital excedente. ¿Y qué iba a hacer con él? Japón exploró la posibilidad de un ajuste espacial [*spatial fix*].

Marx brinda una descripción interesante de cómo funciona este ajuste espacial. El territorio con capital excedente presta dinero en otras partes del mundo, que luego lo utilizan para comprar mercancías del país con excedente de capital. El país de destino puede utilizar las mercancías que compra para satisfacer los deseos y necesidades de su población —a través del consumismo— o para construir infraestructura y trabajar en proyectos que conduzcan a seguir desarrollando el capitalismo en su territorio.

De esta manera, Japón empezó a «colonizar»

el mercado de consumo de Estados Unidos.

Esto derivó en la «invasión» japonesa de la economía estadounidense: compraron el Centro Rockefeller y se metieron en Hollywood mediante la compra de Columbia Pictures. De esta forma, el capital excedente volvió a fluir desde Japón hacia EE. UU., pero también se expandió por el resto del mundo, con lo cual el país llegó incluso a asumir una postura minimalista en muchos mercados emergentes, como los de América Latina. Poco tiempo después pudimos apreciar secuencias similares en toda Asia. Aunque al comienzo lo hizo bajo una dictadura militar y no en el marco de una economía de libre mercado, Corea del Sur se desarrolló. Estados Unidos impulsó este proceso por un motivo muy sencillo: la contención del comunismo.

La Unión Soviética y China planteaban una amenaza. EE. UU. necesitaba una Corea del Sur próspera y procapitalista para limitar la expansión comunista. Por lo tanto, apoyó el desarrollo de la economía coreana, facilitándole transferencias tecnológicas y ofreciéndole un acceso ventajoso a los mercados estadounidenses. Pero hacia fines de los años 1970, Corea del Sur estaba generando un capital excedente con su gran aparato productivo. Entonces, ¿qué hace? Intentó hacer un ajuste espacial. Localizó la producción de automóviles en EE. UU. y compró algunas empresas de electrónica, mientras colonizaba los mercados es-

**Estados Unidos entendió
que podía colonizar el mundo
con tanta facilidad como el
Reino Unido y Francia,
pero a través de un sistema
global de libre comercio.**

tadounidenses y organizaba la producción en algunos mercados emergentes al mismo tiempo. El capital excedente salió de Corea del Sur hacia fines de los años 1970. Aparecieron de repente empresas subcontratistas coreanas en América Central y en África. Las prácticas de estas empresas en relación con los derechos humanos y laborales eran notoriamente brutales.

Antes de que nos diéramos cuenta, la misma secuencia había ocurrido en Taiwán. Estados Unidos apoyó a Taiwán porque prefería asegurarse un desarrollo económico próspero que permaneciera en su órbita en vez de arriesgarse a una reabsorción por la China comunista. Entonces la industria taiwanesa comenzó a ser muy importante. Aproximadamente en 1982, el problema del excedente de capital volvió a surgir y de repente hubo una corriente de exportaciones de capital desde Taiwán. ¿A dónde iba? Se movía a lo largo y ancho del mundo, pero una parte considerable iba hacia China, que recién se abría al desarrollo capitalista.

Este fue el momento en el que Foxconn, que ahora es uno de los conglomerados de empresas más grandes del mundo, empezó a desplazarse hacia China. Por lo tanto, el desarrollo chino posterior a 1978 se apoyó en gran medida sobre el capital taiwanés, japonés, surcoreano y, por supuesto, hongkonés. Hong Kong es un caso muy interesante. Antes de la apertura de China, la industria textil y de indumentaria de Hong Kong había logrado derrotar al Reino Unido, que en ese momento atravesaba un proceso de desindus-

trialización. Las fábricas textiles de Manchester no podían competir con los productos de Hong Kong. El capital de Hong Kong quería expandirse pero carecía de suficientes recursos, mercados y fuerza de trabajo en su propio territorio. Entonces Shenzhen se abrió de repente y el capital de Hong Kong se desplazó rápidamente hacia China para aprovechar la masa de fuerza de trabajo barata. La industrialización china de los años 1970 y 1980 fue el resultado de todas estas importaciones de capital provenientes de Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Japón.

La consecuencia fue la creación de una economía increíblemente productiva al interior de China. ¿Y qué hizo esta economía? Empezó a derrotar a sus competidores. ¿Qué pasó con Japón? La economía japonesa había empezado a desplomarse alrededor de los años 1990. Taiwán estaba en dificultades aun cuando Foxconn, que es una empresa taiwanesa, empleaba 1,5 millones de personas en China. Ahora Foxconn tiene capacidad productiva también en América Latina y en África. Está llegando incluso a Wisconsin. Aquí está en marcha el ajuste espacial. El capital está desplazándose perpetuamente de un lugar a otro.

Ahora es el turno de China de confrontar el problema de qué hacer con el capital excedente.

La orientación general de China parece haber cambiado luego de 2008. Este fue el año en el que pudo observarse una enorme crisis del capitalismo global.

El despliegue de estos ajustes espaciales, de Estados Unidos hacia Japón, de Japón hacia China, de China hacia África y Asia Central, es una manifestación geopolítica de la lógica del crecimiento compuesto del capital.

Durante este proceso, el mercado de consumo más grande de China en EE. UU. quebró y las exportaciones cayeron drásticamente. Pero en 2008, por primera vez, la inversión extranjera directa en China fue superada por la exportación de capital. Luego de esto, las exportaciones de capital se dispararon, alcanzando niveles muy por encima de las importaciones de capital. China se convirtió en un exportador neto de capital. En vez de tomar la forma de inversiones directas en la producción, la mayor parte de este capital tomó la forma de crédito comercial, especialmente en los casos de África y América Latina. Los tiempos habían cambiado desde el año 2000, cuando el mapa de las exportaciones de capital de China estaba prácticamente vacío.

Para 2015, el capital excedente chino estaba en todas partes. El mundo entero quedó atrapado en el intento chino de implementar un ajuste espacial. China empezó a orquestar todo esto alrededor de algo denominado la Nueva Ruta de la Seda, un plan de expansión geopolítica que se propone destinar el capital excedente de China a la reconstrucción del transporte y de la conectividad comunicacional del continente euroasiático, con ramificaciones que se extienden a lo largo y ancho de África y de América Latina.

El ajuste espacial para resolver el problema del capital excedente chino se está convirtiendo en un

proyecto geopolítico en el marco del cual, por medio de inversiones en infraestructura, Asia Central está siendo atraída hacia la esfera de influencia de China. Estados Unidos organiza buena parte de su influencia global gracias a su potencia marítima y está emergiendo un grave conflicto entre China y EE. UU. en el mar de la China Meridional, pero China también le otorga mucho valor a su potencia terrestre en Asia Central, en donde EE. UU. enfrenta muchas más dificultades para ejercer cualquier tipo de dominio.

China está empezando a reivindicar un control casi completo sobre Asia Central y EE. UU. no parece ser capaz de disputar en este terreno. Pero el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda es mucho más ambicioso. Está jugando un rol muy importante en África, que en unos pocos años, desde 2008, ha contraído una enorme deuda con China para construir obras de infraestructura, como los ferrocarriles de África Oriental. China está implementando la táctica clásica de prestar dinero a otros países para que compren productos excedentes chinos —acero, equipos de transporte y cemento— de la misma forma en la que, durante el siglo diecinueve, el Reino Unido sustentó el desarrollo de Argentina para satisfacer sus propios intereses.

El objetivo es reducir radicalmente el tiempo que toma viajar desde China hacia Europa mediante una



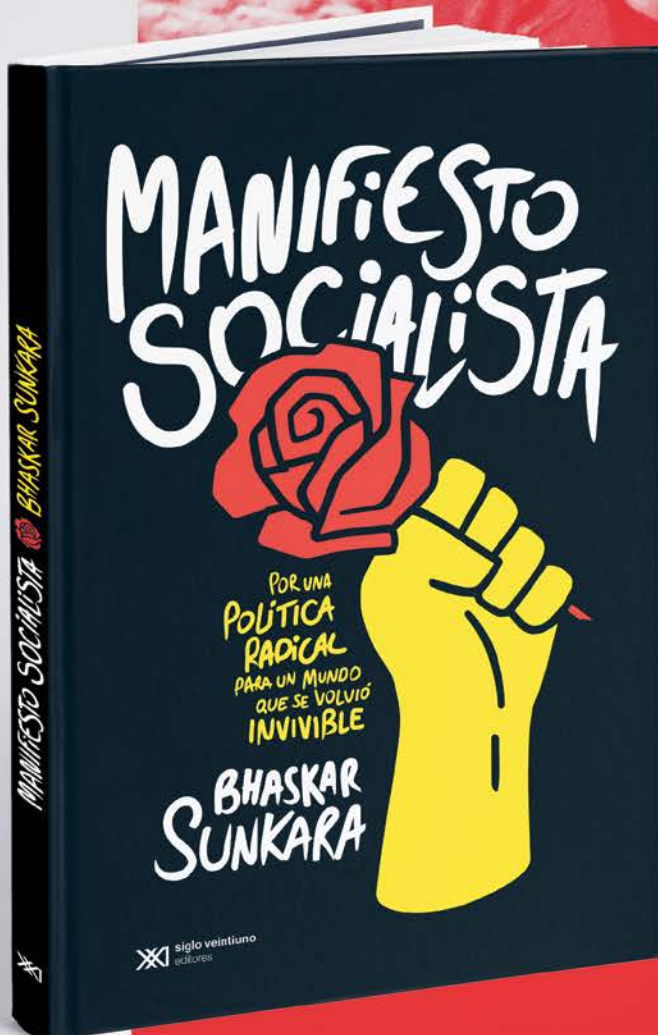
red de ferrocarriles de alta velocidad que atraviese Asia Central. Esto es lo que están construyendo. Muchos analistas occidentales suelen describir todo esto como una inversión irresponsable, argumentando que no puede ser rentable. Es probable que, en el corto plazo, esto sea verdad, pero en el largo plazo terminará por reconfigurar la forma en la que se estructura el mundo en términos geopolíticos. Puede decirse, casi con certeza, que el proyecto chino es más geopolítico que económico.

Por lo tanto, no es un accidente que China, un país que durante muchos años evitó cualquier confrontación con EE. UU., esté desafiando en este momento su poderío en el mar de la China Meridional. Pero, al mismo tiempo, han logrado hacerse de un territorio —Asia Central— en el que no compiten con nadie. Cuando estuve en China me advirtieron muchas veces que no debía decir nada negativo sobre Rusia, puesto que claramente existe una alianza de intereses en Asia Central y más allá. Ambos países están apoyando a Venezuela frente a los repetidos intentos de EE. UU. de derrocar al gobierno de Maduro, sea mediante un golpe de Estado directo, mediante sanciones o mediante el fomento de conflictos internos. Empezamos a percibir la emergencia de una división geopolítica global que pronto podría transformarse en una contienda activa. Pero debe notarse cómo este

proyecto de la Nueva Ruta de la Seda converge también con el problema de encontrar un ajuste espacial adecuado para colocar el capital excedente y distribuir la capacidad productiva.

El capital está sujeto eternamente a una tasa de crecimiento compuesto del 3%, lo cual implica a su vez una tasa de reorganización compuesta de la geografía del capital y de la acumulación capitalista global. Lo que empezamos a percibir es que el despliegue de estos ajustes espaciales, de Estados Unidos hacia Japón, de Japón hacia China, de China hacia África y Asia Central, es una manifestación geopolítica de la lógica del crecimiento compuesto del capital. Este es el tipo de condiciones que dieron origen a dos guerras mundiales durante el último siglo.

La perspectiva escalofriante de una futura guerra mundial no es evidente, pero el rol que cumplen las rivalidades geopolíticas y las teorías debe ser analizado con cuidado. Considerando todas las tensiones actuales, especialmente en Medio Oriente, sería necio ignorarlas. Cuando la búsqueda de ajustes espaciales para el capital excedente que ha sido acumulado se fusiona con las rivalidades geopolíticas, tal como sucedió durante los años 1930, es tiempo de retroceder y tener mucho cuidado para no precipitarse de cabeza en la vorágine de las guerras mundiales. La geopolítica del ajuste espacial debe ser analizada con seriedad. ●



Manifiesto socialista
Por una política radical
para un mundo que se
volvió invivible

Bhaskar Sunkara

director de la revista Jacobin.

Capital Cultural

Y DEJA EL TERCERO Y
VA A TOCAR PARA BURRUCHAGA



En un pueblo llamado Bacurau

Los directores de la mejor película de 2020 se tomaron un momento para conversar con *Jacobi* América Latina sobre política y resistencia cultural.

NICOLAS ALLEN / DANIEL CARNEIRO LEÃO | Los diez años que tardaron en hacer *Bacurau* fueron tiempos durante los cuales sucedieron muchas cosas en Brasil: Dilma fue reelecta en 2014 solo para ser removida de su cargo dos años después por medio de un golpe de Estado, la concejala Marielle Franco fue asesinada y, por último, en 2018, resultó electo Bolsonaro. ¿Cómo fue hacer una película inspirada en la historia de la sociedad brasileña cuando esa historia estaba cambiando a un ritmo tan vertiginoso?

JULIANO DORNELLES | La idea de *Bacurau* comenzó con cierta sensación de incomodidad que nos generaba a Kleber y a mí lo que se estaba produciendo en el cine brasileño. Veíamos muchos documentales sobre el sertón, la zona donde se encuentra Bacurau, que retrataban a las personas que habitan la región como si fuesen simplonas y vivieran en un aislamiento absoluto. Al mismo tiempo, la tradición de películas de género al estilo hollywoodense era prácticamente inexistente.

Básicamente, *Bacurau* es fruto del deseo de hacer una película de género que a la vez sea completamente brasileña, y, en parte, esto implicaba apropiarse de las tradiciones del periodismo televisivo y de las telenovelas, que tienen una forma muy «genérica» de repre-

sentar a las clases populares brasileñas. Queríamos explorar los conflictos reales y las contradicciones que había detrás de esas representaciones.

En realidad, empezamos a escribir el guión en 2016. Pero fue entonces cuando Donald Trump entró en escena. En ese momento, nos dimos cuenta de dos cosas: en primer lugar, la película debía cambiar el enfoque para centrarse en algo más intenso. Y, en segundo lugar, habíamos encontrado a los antagonistas de *Bacurau*: los estadounidenses.

Estados Unidos está lleno de contradicciones, al igual que Brasil. Teniendo esto en mente, empezamos a conversar sobre el género western, a pensar cómo en las películas clásicas de los años 1940 la cámara siempre se mantiene a distancia de los indios —retratados como amenazantes y salvajes—, asumiendo la perspectiva privilegiada del hombre blanco. La forma en la que se representa a los indios en estas películas no es tan distinta de la forma en la que suele representarse a las clases populares brasileñas.

KLEBER MENDONÇA FILHO | Escribí mi película *Sonidos vecinos* en 2008. En ese momento, Brasil había alcanzado un nivel de estabilidad notable y sin prece-



dentés. Pero la sociedad brasileña es contradictoria, e incluso en ese entonces había algo raro en el aire, una especie de inquietud.

Escribí mi siguiente película, *Aquarius*, entre 2013 y 2015. Cuando empezamos a filmar en 2015, luego de la reelección de Dilma, empecé a percibir ciertas cosas que no había visto ni oído en Brasil durante mucho tiempo. En primer lugar, la imperceptible división política y cultural entre el Sur rico y el Norte pobre de Brasil estaba retornando a la escena política. Al ser de Pernambuco, que está en el Nordeste, siempre fui sensible a esta división social y geográfica. También empecé a notar que ciertas figuras de derecha, e incluso algunas de extrema derecha, que prácticamente habían desaparecido después de los años 1990, empezaban a reaparecer cada vez con más virulencia.

Mientras filmábamos *Aquarius*, Lula estaba siendo víctima de una campaña de persecución política completamente absurda y deshonesta. Y esa situación empezó a encontrar su camino hasta llegar al guión. Recuerdo vívidamente un momento durante la filmación de *Aquarius*. Había alrededor de cien personas trabajando con cámaras y equipos, cuando de repente alguien pasó y gritó: «¿¡Por qué no se buscan un tra-

bajo de verdad, hijos de puta!?» Más tarde, durante el estreno de *Aquarius*, empezamos a recibir ataques de parte de la extrema derecha.

La gente ha señalado que muchas de las ideas de *Bacurau* terminaron cobrando vida. Pero hay que remarcar que, a diferencia de lo que piensan algunas personas, *Bacurau* no predijo los acontecimientos de Brasil. Es cierto que el guión de *Bacurau* fue escrito con una gran sensibilidad frente a la historia brasileña. Pero la historia brasileña tiene el hábito de repetirse a sí misma. En realidad, todo en *Bacurau* es antiguo. Brasil es como una persona que no logra aprender las lecciones del pasado. Cuando la gente señala que *Bacurau* está situada en un futuro cercano, piensa: «esta es una película futurista». Pero, en realidad, la película trata sobre la repetición histórica. La historia de Brasil es una historia repetida.

NA / DCL | Estrenaron *Bacurau* en un momento de recortes generalizados a la financiación pública del arte y del cine nacional, por no mencionar los casos de censura directa. ¿Qué tipo de resistencia puede ofrecer el arte en esta situación?

JD | En la actualidad, la Agencia Nacional de Cine

La transformación del paisaje humano de la región está vinculada al trabajo social y político que se realizó durante los años de Lula.

de Brasil pende de un hilo. Es sorprendente todo el tiempo que se necesita para crear una cultura y el poco tiempo que toma desmantelarla. Si tomamos el caso de Bolsonaro, cabe recordar que eliminó el Ministerio de Cultura el primer día de su mandato.

No tiene sentido negar que, en lo que respecta al cine y a las artes, bajo el gobierno de Lula se desarrolló una revolución. En términos de apoyo y de inversión en el campo de las artes audiovisuales, lo que sucedió aquí en Pernambuco sinceramente no tiene paralelo en ninguna parte del mundo. Dicho esto, no sé cuánto tiempo pasará hasta que alcancemos nuevamente esos estándares. Hay que recordar que Brasil producía 300 películas por año, algo que nunca antes había pasado. Fue realmente una época dorada para el cine brasileño.

KMF | *Bacurau* avergonzó enormemente al gobierno. Luego del estreno, lo que más intimidó fue el éxito comercial de la película. La cantidad de entradas vendidas, el hecho de que se proyectó en distintos países y ganó premios en Cannes, todo esto fue extremadamente bochornoso para un gobierno que no cree en los productos ni en la cultura brasileños. Hoy en día, cuando pasan *Bacurau* en la televisión brasileña junto a *The Avengers* y *Spider-Man 4*, lo considero seriamente y pienso que es muy importante.

La industria cinematográfica local se construyó en Recife durante quince años de forma completamente de-

mocrática, lenta y gradual. El actual gobierno está intentando sabotear la industria, pero todavía hay un núcleo importante de cineastas aquí en Recife y hay que decir que el clima es mucho más saludable que en otros lugares de Brasil. Cuando digo «saludable» me refiero a que la política se nutre del ámbito de la cultura.

Con algo de suerte, en poco tiempo estaremos trabajando para rearmar la industria cultural. Porque, honestamente, en Recife, en el Nordeste brasileño, no hace mucho tiempo jugábamos –en términos de apoyo estatal e inversión en el área de cultura– en la misma liga que Francia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Italia o Portugal.

NA / DCL | **El economista brasileño Celso Furtado dijo una vez: «En el Nordeste descubrí que el mundo es absurdo, violento e injusto». ¿Qué piensan de estas palabras? Hace mucho tiempo que el Nordeste es uno de los ejes centrales para los proyectos progresistas de desarrollo nacional en Brasil.**

KMF | Como alguien que nació en el Nordeste, pasé buena parte de mi infancia viajando por la región, inclusive por el sertón. Está claro que Celso Furtado es una de las personas más inteligentes de Brasil, pero mi visión del Nordeste es más física, más inmediata.

Tengo 52 años y solo recientemente he sido capaz de reflexionar sobre mis primeros recuerdos de los viajes que hice hacia afuera de la ciudad de Recife, hacia

otras partes del Nordeste. Fue ahí donde observé familias que sufrían hambre, niños y niñas desnutridos, gente que pedía comida en la ruta, y todas esas imágenes me generaron una impresión profunda.

Durante años, naturalicé completamente ese paisaje. Pero a medida que fui creciendo y viajé de nuevo a través del Nordeste, me volví consciente del paso del tiempo al darme cuenta de que las imágenes de mi infancia —las familias hambrientas, la pobreza— empezaban a desaparecer.

Hay una cosa que es imposible ignorar: la transformación del paisaje humano de la región está vinculada al trabajo social y político que se realizó durante los años de Lula. Lula sabía lo que hacía, o lo que intentaba hacer. El panorama social del Nordeste se había vuelto más digno. Comencé a observar transportes escolares que viajaban a lo largo de los caminos de tierra para buscar a los niños y a las niñas de las zonas rurales. También se donaron miles de bicicletas. Y, por supuesto, hubo muchas políticas de distribución del ingreso. Es realmente conmovedor hablar con la gente y darse cuenta del enorme significado que tuvieron estos cambios en sus vidas.

En *Bacurau* queríamos mostrar ese rostro humano de Brasil enfocándonos en el Nordeste, una región que, debido a la forma en la que se organizó y se desarrolló históricamente el país, siempre terminó recibiendo mucho menos de lo que merecía. Habiendo dicho

esto, Brasil es un país que tiene muchas regiones diferentes, y durante los años del PT —específicamente, bajo los gobiernos de Lula— vimos que se tuvo una consideración sin precedentes por todo Brasil. Los gobiernos del PT comprendieron que la infraestructura y los recursos públicos del país habían sido distribuidos de una manera completamente injusta.

Teníamos en mente muchas de estas ideas cuando hicimos *Bacurau*. Sorprendentemente, mucha gente se escandalizó por la forma en que *Bacurau* retrata la división social entre el Sur y el Nordeste. Para millones de personas que viven en Brasil, esta división es completamente evidente, pero lo cierto es que hubo gente que se ofendió por nuestra decisión de otorgarle tanta relevancia a este tema. Aunque, de nuevo, cuando uno vive en el Nordeste y viaja a un lugar como São Paulo, todos los problemas económicos y raciales de la sociedad brasileña se vuelven muy nítidos. Todo lo que hicimos fue adoptar este punto de vista en *Bacurau*, pero no exageramos ni inventamos nada.

NA / DCL | ¿Qué los inspiró a concebir el conflicto principal de la película? Ha sido interpretado de formas completamente divergentes: como un estandarte democrático en la lucha contra el fascismo, como una especie de fantasía de venganza populista...

JD | Pensamos en los wésterns revisionistas de los años 1960 y 1970. Esas películas se basaban de al-

Esta disposición a mirar con desprecio lo propio, en este caso una película brasileña, dice mucho sobre la mentalidad que tienen algunas personas en Brasil hoy en día.

guna forma en la Revolución cubana, en los levantamientos populares y en las revueltas. En tanto participaban del género *wéstern*, mantenían la fidelidad a la fórmula hollywoodense, pero se filmaban en España, se producían en Italia y, generalmente, ponían en primer plano toda una serie de temas políticos que estaban ausentes de los *wésterns* tradicionales.

En el *wéstern* clásico encontramos con frecuencia un poblado acosado por villanos que vienen a invadirlo para reducir a su gente a la servidumbre. Pero esta dinámica no es exclusiva del *wéstern*, ¡también estudiamos la guerra de Vietnam para buscar ideas!

Creo que *Bacurau* es esencialmente una película catártica, donde termina alcanzándose cierta forma de justicia. En la primera conferencia de prensa de la que participamos en Brasil, un periodista del Sureste preguntó si *Bacurau* era una película de venganza. Mi respuesta en ese momento —aunque volvería a decir lo mismo— fue: «*Bacurau* no es una película de venganza. Es una película sobre reflejos y reacciones». Trata sobre lo que sucede inevitablemente cuando se hostiga a una persona: no pasará mucho tiempo hasta que devuelva el golpe. La catarsis está en representar a un grupo de gente que simplemente no está dispuesta a aceptar la sumisión.

KMF | Como dijo Juliano, creo que reconsiderar la historia puede ser muy útil a la hora de desarrollar relatos propios y originales. Cuando uno trabaja con seres humanos y con la sociedad, no tarda en darse cuenta de que la mayor parte de las cosas ya sucedieron antes, y esto puede ser de gran ayuda a la hora de desarrollar las propias ideas.

La idea del «colaboracionismo» brasileño que practican los personajes del Sudeste se inspiró en realidad en la historia del colaboracionismo ucraniano con la Alemania nazi durante la invasión soviética. Hubo gente en este contexto que sentía más simpatía por Alemania que por su propio pueblo. Siempre me fascinó esta faceta de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad pienso que cierta dinámica colaboracionista encuentra la forma de repetirse en la mayoría de los conflictos armados.

Pero en términos históricos, al hacer una película localizada en el sertón, es imposible no evocar la guerra de Canudos (levantamiento popular que enfrentó a Antônio Conselheiro contra el Ejército brasileño en Bahía). El museo de *Bacurau* está lleno de objetos que recuerdan tanto este como otros episodios del violento pasado brasileño.

A pesar de todo, por más importante que sea evocar



Kleber Mendonça Filho
(izquierda) con los
actores de Bacurau.

este recuerdo, no hay que obsesionarse con él. En *Bacurau* hay una alusión constante a personajes de la vida real, figuras de la historia brasileña que basta nombrar en voz alta para reconocerlas. Por ejemplo, João Pedro Teixeira, un líder campesino que fue asesinado por la policía en 1962. Organizamos una lista de nombres que consideramos que servirían para comunicarle algo a la sociedad brasileña. Está Marisa, la esposa de Lula que murió luego de sufrir una terrible persecución política. También aparece Marielle (Franco). La idea al utilizar estos nombres es no detenerse ni un segundo al mencionarlos para que entren directo al torrente sanguíneo de la película.

NA / DCL | ¿Alguna vez les preocupó el hecho de que el contexto histórico y social de *Bacurau* pudiera perderse en la recepción de la película por parte de una audiencia internacional? Hay muchas referencias a la historia colonial de Brasil...

KMF | Fue la realidad misma la que nos presentó las referencias a las que se refieren. Por ejemplo: estábamos buscando una casa para filmar el escondite de los villanos. Encontramos la casa, y solo entonces nos dimos cuenta de que había un letrero que decía «saudade da casa grande», expresando nostalgia por la época de las plantaciones señoriales. Esa casa pertenecía a una plantación de algodón en Río Grande

del Norte, y el letrero era de esa época. En vez de removerlo, queríamos incluirlo en la película.

En la misma hacienda encontramos algunas máquinas de cosecha fabricadas en Estados Unidos: las «cotton gins», conocidas como desmotadoras. Como sucedió con el letrero, apenas vimos las desmotadoras supimos que serían parte de la película. De alguna forma, sirvió para aclarar el asunto de que, aun siendo la experiencia colonial brasileña la que constituye el trasfondo de la película, el colonialismo no es una experiencia singular de Brasil.

Cuando la película se proyectó en otros países, mucha gente en Brasil adoptó una posición conservadora. Hay una expresión brasileña para referirse a esto: el «complexo de vira-lata», que se usa para señalar cierto sentimiento de inferioridad frente al mundo que afecta a algunas personas de Brasil. Fue esto lo que llevó a mucha gente a pensar que la película era tan brasileña que era prácticamente imposible que le fuera bien en el exterior, o también que la película sería considerada como antiestadounidense. Pero lo cierto es que la película tuvo un éxito enorme en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esta disposición a mirar con desprecio lo propio, en este caso una película brasileña, dice mucho sobre la mentalidad que tienen algunas personas en Brasil hoy en día. ●

Diego, hijo de Fidel

Maradona tal vez haya sido el más grande jugador de fútbol de la historia, pero lo que significa su leyenda para los sectores populares excede con creces la dimensión deportiva. Su talento y su protagonismo global fueron experimentados como una redención social por parte de los desposeídos de este mundo.

Diego espera. Lo acompañan Doña Tota, Claudia, Dalma y su preparador físico y amigo, Fernando Signorini. También sus hermanas. Está impaciente. Quizá no era tan buena idea venir hasta Cuba, morir de calor, depender de las mañan y la burocracia comunistas. Sobre todo cuando, además, la política no le importa tanto. Dalma llora. Tiene apenas tres meses. Y la espera. Y el calor. El protocolo los hizo abandonar las playas de Varadero y aceptar el traslado a una casa de La Habana para —otra vez— continuar la espera. Invitado por la Revolución, hace nueve días que se posterga el encuentro con Fidel Castro. Es julio de 1987. Hace exactamente un año que Diego Maradona es campeón del mundo y dueño para siempre de la historia del fútbol. Pero Diego todavía tiene que trabajar la paciencia. Porque Diego, en Cuba, es un rey que espera.

Recién cerca de las 9 de la noche del martes 28 de julio, Maradona recibe la autorización para ingresar al Palacio de la Revolución. Tiene zapatillas deportivas, un jean clarito y una remera azul de rayas horizontales. El abrazo con Fidel es total. Amor súbito. Fidel habla de cocina. Pregunta cosas de fútbol: los

penales, la técnica. Sus colaboradores anotan las respuestas. Antes de que todo termine o, mejor dicho, de que todo comience, Diego le pide la espada. Fidel procede al bautismo. Parados frente a frente, el comandante cubano se saca su boina verde y la calza en la cabeza del rey, que mira para arriba mientras se entrega al ritual.

Cuenta el periodista Pablo Llonto que Diego, antes de ese encuentro, ya fantaseaba con la posibilidad de tatuarse al Che. Llonto, amigo de Diego, exdelegado gremial de Clarín y actual abogado de Derechos Humanos, recuerda en una entrevista a Página 12:

Él todavía no era campeón mundial y jugaba en Italia. Hablábamos bastante por teléfono antes de México 86, cuando estaba en Nápoles. En una de esas charlas me contó que por un reclamo de premios para todo el plantel, tuvo una discusión con el presidente del Napoli y en ese conflicto Diego le decía que no iban a jugar y Corrado Ferlaino le preguntó: «Diego, ¿y vos quién te creés que sos? ¿El Che Guevara?». Y él le respondió: «Sí».



Con el tiempo vendría el tatuaje, más viajes a Cuba, la internación en Cuba, la recuperación en Cuba el amor en Cuba. Con Fidel –desde Fidel–, Diego le da una estructura ideológica a su conducta política. Es cierto que fue el mejor de la historia de su deporte. Está claro también que ese deporte, en su vida, fue solo una actividad más. Porque Diego, además, jugó al fútbol.

La lógica aspiracional que habita ese deporte en la Argentina no fue –ni es– exclusiva de la vida de Maradona. Baste recordar a jugadores como Carlos Tévez, el Kun Agüero o, más atrás en el tiempo, Ariel Ortega y Juan Román Riquelme. Extraordinarios futbolistas que recorrieron con éxito el camino del héroe. Gracias a sus habilidades lograron abandonar la pobreza, rescataron a sus familias de un destino lleno de limitaciones y, después de atravesar una serie de desafíos, lograron imponerse como figuras en el mundo. La pelota como método de ascenso social. Pero entonces, ¿qué diferencia a Maradona del resto? A los ojos de la historia, la diferencia la hizo la política.

Su debut fue el 20 de octubre de 1976 con Argentinos Juniors y su retiro el 25 de octubre de 1997 con

Boca. Los 23 años que le siguieron a su jubilación fueron, probablemente, sus años de mayor protagonismo político. Diego no solo fue un símbolo de resistencia. Diego fue un buscador de resistencias. A la máxima peronista «donde hay una necesidad, hay un derecho», Diego podría replicar: «donde haya una lucha, hay Maradona». Con el cuerpo o con la palabra, su intervención en los conflictos fue constante.

El apoyo a los jubilados durante los 90 en Argentina, cuando ese reclamo, sostenido por un grupo de ancianos conducidos por Normá Plá, una mujer incansable y combativa, constituía una de las mayores vergüenzas del Estado nacional. La intervención a favor de Bolivia en 2008, para impedir que la FIFA le quite la localía de 3600 metros de altura en las eliminatorias. La altura, para esa selección que históricamente tuvo menos recursos que las del resto de Sudamérica, era clave para poder soñar con la posibilidad de garantizar algunas victorias y mantener abierta la posibilidad de jugar un Mundial. Cuando explotó el conflicto, Diego le salió al cruce al capo de la corporación. Ya no era Havelange, pero daba igual. Ni Dios, ni Joseph Blatter decidirían dónde se iba a jugar: «ustedes

Con Fidel –desde Fidel–, Diego le da una estructura ideológica a su conducta política.

tienen que jugar donde nacieron, hermanos», le dijo Diego a la prensa boliviana.

Estrellas mundiales como Pelé y Michel Platini fueron miembros activos e influyentes en las decisiones de la FIFA. Dos figuras con orígenes disímiles, de distintas clases y distinta formación, pero con el mismo horizonte: servir a la acumulación de riqueza.

¿Alguien se imagina la cara de Platini o de Pelé en una movilización popular? A tres días de la muerte de Maradona, las protestas contra la ley de seguridad aprobada por el parlamento tomaron las principales ciudades de Francia. En París, unos encapuchados sostenían una bandera mientras avanzaban entre los gases lacrimógenos de la policía. La bandera decía en español: «Nació la mano de Dios. Llenó de alegría en el pueblo». A un costado de la tela, un contorno dibujado de Maradona campeón en 1986.

Diego es un protagonista en la política de masas. Su muerte destruyó las comparaciones con otros jugadores de la historia y de la actualidad porque puso de manifiesto su potencia simbólica. Es que la figura de Diego Maradona –como la del Che– construía y construye sentido.

Su trayectoria como futbolista y como técnico es una búsqueda no de épica sino de subversión. Por definición, la subversión tiene una épica inmanente. Pero no toda épica tiene subversión. Fue eso lo que buscó

y logró en el Napoli. El Napoli no solo era un equipo que nunca había ganado un campeonato local. Nápoles –la ciudad más grande del sur de Italia– simbolizaba la condena del capitalismo industrial italiano, el abandono estatal, la mafia, el desempleo, la pobreza, la desesperanza: los excluidos. A mediados de los años 1960, el auge de la industria automotriz italiana, anclada en el norte y con FIAT a la cabeza, necesitaba mano de obra para sus fábricas. Desde el sur llegaron miles y miles de trabajadores, que cuando buscaban pensiones y hoteles baratos se encontraban con carteles que decían «non si affitta ai meridionali», o sea, «no se alquila a sureños». Hasta hace no mucho, todavía se podían encontrar algunos de esos carteles colgados.

El fútbol en Italia –como en Argentina y en muchas partes del mundo– cataliza las tensiones sociales. Juventus, equipo multicampeón de Torino y, sobre todo, de la FIAT, recibía a los hinchas del Napoli a mitad de los años 1980 con el canto: «Napolitanos, enfermos de cólera, víctimas de terremotos, nunca se lavan con jabón. Nápoli mierda, Nápoli cólera, son la vergüenza de toda Italia. Napolitanos, trabajen duro, por Maradona van a tener que vender el culo». Ciro Ferrara, compañero de Maradona y figura del Nápoli, después de ganar el primer campeonato de su historia (1986-1987), dijo: «La victoria fue una redención social para la ciudad».

Mucho antes de esa victoria, en 1984, cuando todavía era la nueva joya del Nápoli, Diego recibió un pedido de su compañero de equipo, Pietro Puzone. En su localidad –Acerra, periferia napolitana, pobre y abandonada por el Estado– había un chico que necesitaba operarse el paladar. Diego se puso al frente de la organización y llevó a su equipo a la cancha donde solía jugar el club local. Fue un día de lluvia. La cancha era un pantano. Poco le importaron las puteadas y las amenazas de Corrado Ferlaino, presidente del Nápoli, que se resignó a ver cómo su reciente y millonaria compra metía las patas en pozos de agua y tierra, ponía la pierna con ganas y gambeteaba las patadas para ganar el partido contra el Acerrana. Diego y sus compañeros jugaron con la indumentaria oficial del club y con la energía de una final del mundo. Clavó dos golazos. Se enojó cuando las jugadas no le salieron. Arengó a sus compañeros para asegurar la

victoria. No importaba si el partido no daba puntos oficiales para el Campeonato de la Serie A o para la Copa UEFA, ni si los rivales eran figuras exquisitas o el estadio tenía las condiciones profesionales necesarias. Como en Fiorito, como en La Boca, como en La Paternal o en el Camp Nou. Por donde pasara, Diego desplegaba su máquina igualadora.

Daniel Arcucci, el periodista que más lo conoció, dice en el documental *Diego Maradona*, de Asif Kapadia: «rabia, bronca y luchar contra la adversidad son los combustibles que ha usado siempre Maradona». Después de Fidel Castro, esos combustibles encontraron un andamiaje ideológico que lo lleva, por ejemplo, a formar el primer sindicato de futbolistas del mundo. Después de Fidel, hay rabia organizada. El sindicato fue un intento fugaz, apenas un gesto simbólico, de identificar al futbolista como un trabajador más allá de los salarios siderales. Si hay un trabajador, hay una patronal. Diego, al armar el sindicato, expone una lectura clasista del fútbol: «el jugador de fútbol es lo más importante y vamos a defender sus reivindicaciones hasta la muerte», dijo en 1997 durante una de las reuniones de la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales (AIFP). Del otro lado de la vereda Maradona estaba Joao Havelange, presidente de la FIFA, una de las multinacionales más poderosas del planeta.

Diego quizá haya sido la persona más fotografiada del mundo. Entre todas esas fotos, aparecen abrazos a Carlos Menem y encuentros con Fernando de la Rúa. Pero cuando decidió poner el cuerpo, lo hizo siempre en oposición al bloque hegemónico. La movilización en contra de la IV Cumbre de las Américas, desarrollada en 2005 en Mar del Plata con la concurrencia de George W. Bush, marcó un paradigma en su trayectoria pública. El gobierno de Bush llegaba con la voluntad de imponer un tratado de libre comercio que ponía en riesgo a las economías regionales: el ALCA.

Diego se puso al frente de la Cumbre de los Pueblos, que congregó a Evo Morales, Hugo Chávez, y a una movilización popular que copó la ciudad y se manifestó en contra del tratado y en contra de la presencia de Bush. Diego, Evo —que al año siguiente se convertiría en presidente de Bolivia— y cientos de militantes e intelectuales partieron desde Constitución, en el

centro de Buenos Aires, hacia Mar del Plata en una formación de trenes de cinco vagones. Lo llamaron el Tren del Alba.

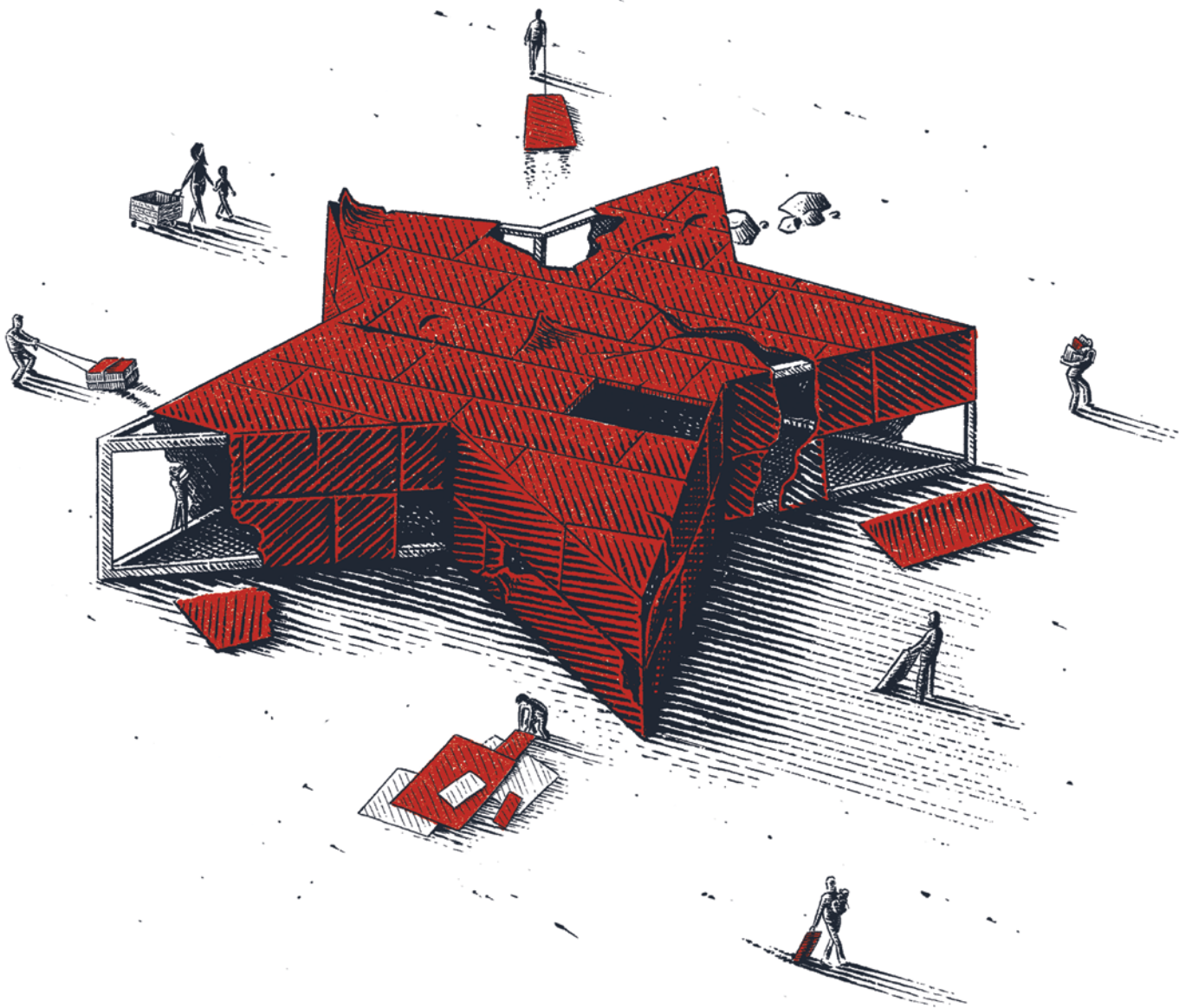
Durante el Mundial de Fútbol de 2018, en Rusia, profundizó su apoyo a la causa palestina y aprovechó para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. «Este hombre quiere la paz en Palestina. El señor presidente Abbas tiene un país y derecho. Mi corazón es palestino», escribió en su cuenta de Instagram. Era la primera vez que concretaba un encuentro formal con la dirigencia palestina, pero su posición en el conflicto palestino-israelí no era una novedad. Mientras caían cientos de bombas en la Franja de Gaza en julio de 2014, Diego dijo públicamente: «lo que Israel está haciendo a los palestinos es vergonzoso».

Sus últimos años, marcados por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), lo encontraron con un estado de salud que se deterioraba progresivamente. Con las palabras cada vez más espaciadas, con un relato cojo y patinoso, criticó al entonces presidente de todas las maneras posibles: «Macri no conoce el barro, fue a La Boca y dijo ‘fango’. No, fango, no. Barro, hijo de mamá. Esto es barro, tierra y agua. Acá llovió ayer. Entonces lo que no puedo entender de los argentinos es que lo sigan votando y nos siga hundiendo».

El 13 de octubre de 2020 escribió en sus redes su último disparo contra Macri que decía, entre otras cosas: «yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno (el de Alberto Fernández). Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos». Y, en su última intervención pública, remarcó: «tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos».

Diego Maradona murió a las pocas semanas, el 25 de noviembre de 2020, el mismo día que murió Fidel Castro cuatro años antes, en 2016. En su crónica de 1987, publicada en la revista *El Periodista*, Carlos Bonelli —que ayudó a organizar y cubrió el encuentro en La Habana— cita una frase de Diego a la salida del Palacio de la Revolución: «ya le dije (a Fidel) que cuando tenga un rato libre me llame para charlar. Yo me invité solo». ●

¿Qué sucedió con aquel PT?



Durante décadas, el Partido de los Trabajadores estableció las pautas principales de la izquierda brasileña. Esas banderas siguen vigentes aun cuando el PT parece haberlas abandonado.

TEXTO
LINCOLN SECCO

TRADUCCIÓN
VALENTÍN HUARTE

ILUSTRACIONES
PANCO SASSANO

Cuando la primera concejala negra electa en Río de Janeiro tomó posesión de su cargo, la Cámara intentó negarle el automóvil oficial porque supuestamente no era capaz de subir al morro de la favela en la que ella vivía. Durante ese año fueron muchos los trabajadores electos a la Cámara de Diputados. La bancada más importante de São Paulo estaba compuesta por tres mujeres de izquierda. Los mandatos eran concebidos como colectivos y se hacían plenarios regulares. En el partido confluían militantes del movimiento de la salud y la vivienda, psicólogos y arquitectos, profesores y estudiantes, empleadas domésticas y pequeños comerciantes, gays y lesbianas, amas de casa e integrantes del movimiento negro, clubes de madres y católicos de las Comunidades Eclesiales de Base, ecologistas y grupos de teatro. Las reuniones se desarrollaban en sindicatos y parroquias, en escuelas y en centros religiosos, en las plazas públicas y, principalmente, en las casas de los militantes.

Este no es el retrato de la izquierda durante las elecciones municipales brasileñas de 2020 ni de algún

nuevo partido-movimiento europeo. Es la historia de las elecciones de 1982. Y, por supuesto, del Partido de los Trabajadores. Y, en cierto modo, del mismo partido conciliador que venció en cuatro elecciones presidenciales durante el siglo XXI, aquel cuya dirección envejeció apegada a sus cargos y despojada de sus ideales, y que sufrió un golpe de Estado en 2016.

El PT de aquellos distantes años 1980 tenía ya sus limitaciones. Por ejemplo, muchos militantes mantenían las cuestiones feministas en un lugar periférico en comparación con la «centralidad obrera». Pero, al mismo tiempo, la diversidad social que el partido expresaba en aquellos años abría la puerta para incorporar la lucha contra la opresión de género, étnica y otras, sin olvidar la clase. La insistencia del PT en la naturaleza económica de la dominación no impedía, y hasta fomentaba, que otros segmentos del partido intentaran incorporar una dimensión cultural.

Estas y otras banderas democráticas lograron implantarse en la cultura política brasileña gracias al PT. Por

La primera época del PT estuvo profundamente marcada por la lucha de clases.

eso, es posible afirmar que la nueva izquierda brasileña es, de cierto modo, el producto de ese legado complejo, olvidado o simplificado tanto por los críticos como por los apologistas de la experiencia del PT.

Lucha de clases

La primera época del PT estuvo profundamente marcada por la lucha de clases. La primera alcaldesa de una capital del PT fue Maria Luiza Fontenelle, en Fortaleza. Gobernó con los Consejos Populares y fue acusada de incentivar a la población a ocupar edificios abandonados y de convocar a una huelga a los propios funcionarios municipales. En Diadema, el vicealcalde Tonhão se alió al movimiento por la vivienda y enfrentó a la policía y al alcalde de su propio partido. En Salvador, los militantes de un grupo clandestino vinculado al PT decidieron expropiar un banco. Los bancarios lanzaban canicas contra las vidrieras por las noches. Durante las campañas electorales, miles de militantes eran detenidos, corrían huyendo de la policía o se enfrentaban a sus adversarios de la derecha.

El sindicalismo en Brasil estaba dominado históricamente por los laboristas de Getúlio Vargas y, en menor medida, por los comunistas. Durante la dictadura

militar (1964-1985) muchos dirigentes sindicales fueron nombrados por el gobierno como interventores y, luego, continuaron en sus cargos apelando a fraudes y a la persecución de sus oposiciones. Estaban todos inmersos en la estructura legada por el presidente Vargas que, luego de la Revolución de 1930, legalizó los sindicatos e institucionalizó la mayoría de los derechos laborales. Pero también estableció el control estatal sobre las elecciones sindicales, un impuesto para sustentar el patrimonio de los sindicatos y la unicidad: cada categoría podía tener solo una representación sindical.

Una parte fundamental de la formación del PT provino de las oposiciones sindicales que cuestionaban a los *pelegos* (nombre que se les da en Brasil a los dirigentes que buscan la conciliación y no la lucha de clases). La oposición metalúrgica de São Paulo, por ejemplo, enfatizaba la organización en los lugares de trabajo y la existencia de una central sindical que incluyera a las oposiciones y no solo a las direcciones electas. Por eso la CUT se llamó Central Única de Trabajadores. La mayoría de los sindicalistas *cutistas* estaba ligada al PT, luchaba contra la legislación laboral legada por Getúlio Vargas (la CLT) y defendía la pluralidad sindical y el fin del impuesto sindical, la



contribución obligatoria que en realidad solo servía para sustentar a los *pelegos*.

Era un momento de ascenso de las luchas y había una posibilidad de superación positiva en el horizonte de la clase trabajadora más radicalizada. Sin embargo, los comunistas y los viejos laboristas advirtieron los riesgos de dejar a la intemperie a los pequeños sindicatos y a las categorías profesionales menos movilizadas. «Mal con el *pelego*, pero peor sin él», decían. Sostenían que esto era así porque la ausencia de asistencia jurídica a los trabajadores y a las trabajadoras impedía la protección de los derechos, tanto en el momento de la contratación como en el de la rescisión de los contratos, lo cual terminaba dejando a las personas solas frente a las empresas. Es cierto que la destrucción de los sindicatos también puede generar inestabilidad en las relaciones laborales para los empresarios, pero no son ellos los que más pierden, puesto que en la mayoría de los casos no surge una movilización espontánea para presionar a los patrones.

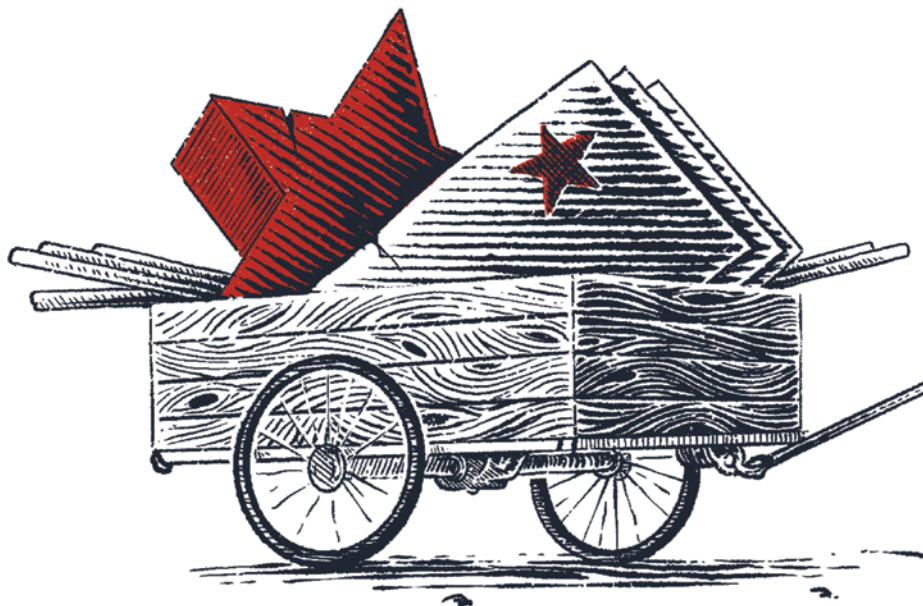
A pesar del discurso de la CUT y del PT, en los años 1980 la autoorganización de la clase trabajadora intentó hacerse cargo de las direcciones sindicales sin suprimirlas. Al final, terminó por convivir con la legis-

lación laborista, lo cual se tradujo en el sostenimiento, e incluso en la ampliación, del patrimonio material y jurídico de los sindicatos. Pero esto no impidió a los sindicalistas petistas innovar en las formas de lucha.

Trayectorias

Con los cambios que el neoliberalismo imprimió sobre el mercado de trabajo y con la expansión electoral del PT, el peso del sindicalismo al interior del partido disminuyó. Pero durante los años 1980, muchos representantes parlamentarios eran sindicalistas y los debates de la CUT atravesaban también las filas petistas.

Aquel PT de los años 1980 tampoco fue simplemente un gremio obrero que creció a partir de las huelgas metalúrgicas del ABC paulista. Sin duda, el sindicalismo y el liderazgo de Lula fueron vitales y ejercieron una atracción centrípeta. Pero esto solo sucedió porque había cierta energía social que se difundía por todo el país y que dio lugar a procesos de autoorganización. La investigación de las fuentes históricas permite reconstituir un movimiento que se parecía mucho más a una red de manifestaciones regionales y sociales plurales que a un partido centralizado en São Paulo.



Las contradicciones y las luchas internas también se originaron en esta diversidad. Los trabajadores manuales sin educación universitaria que conformaron las primeras direcciones partidarias nunca llegaron a ocupar cargos públicos ejecutivos destacados ni ministerios durante los gobiernos petistas. Entre los casos que se destacan, pueden nombrarse los de Osmarino Amâncio, del sindicato de recolectores de caucho; los hermanos Ganzer, peones del oeste de Pará; Manoel de Conceição, trabajador rural del interior maranhense; o los sindicalistas de São Paulo, Jacó Bittar, Vicentinho y Meneghelli. Claro que hubo excepciones importantes. Lula, el tornero mecánico de Villares, llegó a ser presidente; la empleada doméstica Benedita da Silva, gobernadora de Río de Janeiro; y el metalúrgico João Paulo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.

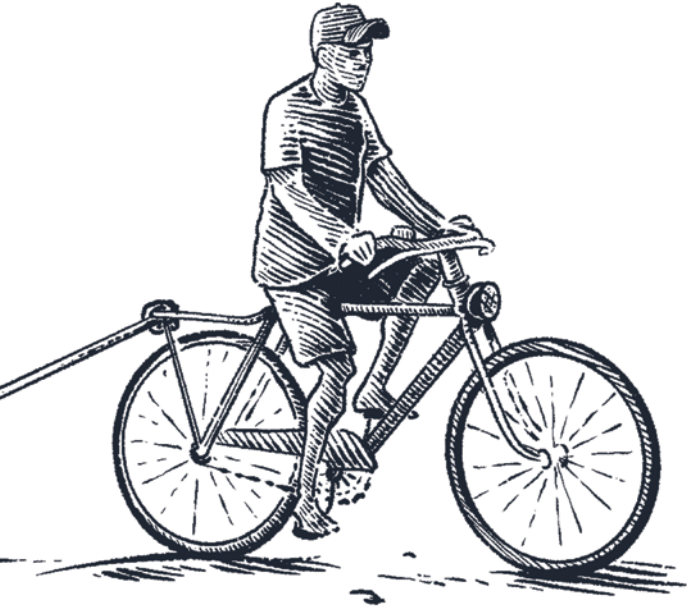
El partido formado por núcleos de base que surgió en los asentamientos informales de personas sin tierra, en las plantaciones de caucho, en los conventos católicos, en los sindicatos, en los grupos de izquierda y en el movimiento estudiantil terminó dándose de frente con la realidad de la institucionalización. A partir de 1984, el PT sustituyó gradualmente la lógica federativa de núcleos por la disputa de tendencias organizadas. La tendencia Articulación, que ganaba poder en aquella época, reunía la fuerza de los sindicatos y de los políticos con mayor expresión electoral,

y priorizaba una práctica moderada, de alianzas y pragmática. En ese contexto, los grupos de izquierda partidaria intentaban como podían incluir en los programas de gobierno algunos elementos más radicales, especialmente en la política de alianzas y en las propuestas económicas. La adopción de la proporcionalidad en la composición de las direcciones del PT fue el *modus vivendi* de la dirigencia. Aunque algunas corrientes trotskistas abandonaron el partido o fueron expulsadas, la mayoría de las tendencias de izquierda terminó acomodándose en la estructura burocrática.

Aggiornamento

Más allá de la tendencia inherente a la política institucional que lleva a la conformación de una especie de oligarquía partidaria, lo cierto es que las direcciones petistas tenían un proyecto para el país. Aun domesticado por sucesivas concesiones, alianzas, compromisos y el abandono de ciertos ideales, el programa reformista que llegó al poder en 2003 cambió a Brasil, transformando las relaciones entre las clases y dejando tras de sí programas sociales y derechos humanos.

Desde el V Encuentro Nacional de 1987, el PT aspiró a posicionar a Lula en la presidencia y a implementar el Programa Democrático y Popular. A lo largo de los años 1990 este programa incorporó, entre otras cosas, la defensa de cupos raciales, junto a políticas específi-



cas para las mujeres y para los jóvenes. Hacia adentro, los congresos del PT garantizaban guarderías para que las madres participaran de las discusiones políticas y estableció un cupo del 30% de cargos de dirección reservados para ellas (hoy este cupo es del 50%).

Con todo, estas iniciativas no contradecían el programa general. Aunque de forma incipiente, estaban integradas a él. El transporte público gratuito, los Consejos Populares y el presupuesto participativo, los cupos para las mujeres, para la juventud y para los negros, las políticas de respeto a la diversidad sexual, etc., ya eran un patrimonio petista en los años 1990. Esto a pesar de los prejuicios, a veces secretos y otras veces declarados, que tenían muchos políticos del partido. El PT fue el único gran partido brasileño que adoptó durante mucho tiempo políticas de discriminación positiva en su estructura interna.

Llegados a este punto, vale la pena preguntarse: ¿qué sucedió con aquel PT?

Tomar el gobierno (y no el poder)

Es una perogrullada recordar todos los errores de los gobiernos petistas: la política económica, la misión en Haití, las leyes que fortalecieron el aparato jurídico y represivo y todo lo que pasó a ser conocido indebidamente como «republicanismo».

Un ejemplo de esto fueron los nombramientos para el Supremo Tribunal Federal (STF). La Constitución les garantiza al presidente y a la mayoría que él constituye en el Senado el poder de interferir en la composición del STF. De esta forma, el presidente tiene el deber constitucional de nombrar personas que estén de acuerdo con el programa que la población eligió libremente mediante el voto. Cuando Fernando Henrique Cardoso fue electo, nombró a jueces que crearon el entendimiento jurídico en el marco del cual él pudo erigir el modelo económico que había elegido el pueblo. En 2002 el pueblo eligió un nuevo modelo de desarrollo y se esperaba que el presidente nombrara jueces para el STF que se adecuaban a su decisión de favorecer los intereses sociales, castigar a los criminales de la dictadura, etc.

Pero, al contrario de lo que hizo Cardoso, Lula siguió una interpretación errónea de lo que es una República en el marco de la cual el STF es un tribunal político. Creyendo que debía parecer imparcial frente a sus adversarios, nombró a personas teniendo en cuenta simplemente sus antecedentes y criterios de diversidad sexual y racial, pero dejando de lado las cuestiones ideológicas.

Los equívocos de Lula no eran personales, sino que derivaban de una cultura política marcada por el rechazo del vanguardismo y a favor del obrerismo.



Esto permitió al partido crecer junto a las luchas cotidianas del pueblo, pero también introdujo el prejuicio contra el marxismo y el abandono del debate estratégico. Cuando el PT llegó al gobierno (y no al poder), su núcleo dirigente no estaba preparado para pensar esta diferencia. Actuó como si el Estado fuese un órgano neutral y dejó intactas las fuerzas armadas y el poder judicial.

Por supuesto, no se trató de una elección sin más ni de un error originado en el desconocimiento de la teoría marxista del Estado, sino más bien de una forma de acomodarse pragmáticamente a los cargos y del temor a las confrontaciones. Pero, independientemente de esto, el conflicto social terminó estallando, puesto que las clases dominantes no toleran que los pobres incrementen su participación en el presupuesto público. Una vez que se invirtió el ciclo económico, optaron por un golpe de Estado apoyado en los militares, en el Congreso y en los medios, y sancionando por el poder judicial.

A pesar de toda la propaganda mediática, el PT demostró que estaba preparado para administrar mejor el Estado y con un grado mucho menor de corrupción que los partidos conservadores. El gobierno de Lula procuró adoptar software libre en algunas áreas de la administración federal, nuevos modelos de gestión más sofisticados y mecanismos innovadores para monitorear los programas de redistribución del ingreso. El programa Bolsa Familia exigió implementar un registro que priorizaba a la mujer y exigía que las familias cumplieran ciertas condiciones relacionadas con

la salud y con la frecuencia de asistencia escolar de los niños y niñas de cada municipio. El PT también desarrolló mecanismos de evaluación cualitativa y cuantitativa en el campo de la educación con ProUni (Programa Universidad para Todos) e IDEB (Índice de Desarrollo de la Educación Básica).

Así y todo, el partido no estaba preparado para ejercer el poder.

Una crisis programática

Al transformar el PT y la CUT en meras correas de transmisión del gobierno federal, la Articulación, que había promovido el *aggiornamento* socialdemócrata del PT durante los años 1990, perdió su función histórica. Desprovista de ideales, le sobraban los cargos. Como un cadáver, ese grupo que hoy parasita la historia del PT y consume sus últimos recursos simbólicos, se mantuvo intacto en las sucesivas disputas internas porque todavía era capaz de entregarle resultados electorales a su séquito. Al final, con una política acomodaticia frente al poder, el PT logró ganar cuatro elecciones. Todo parecía marchar bien.

Con el tiempo, la Articulación dejó de existir, pero su espacio político fue ocupado por un amplio grupo pragmático que terminó siendo reconocido durante los gobiernos de Lula como el Campo Mayoritario. Más tarde asumió el nombre Construyendo un Nuevo Brasil (CNB). Sintomático de la falta de ideales es el hecho de que la generación de dirigentes sindicales y de la lucha armada fue gradualmente desplazada

Dirigentes históricos fueron sustituidos, no por jóvenes activistas de los movimientos sociales ni por intelectuales orgánicos de la izquierda, sino por burócratas que iniciaron su carrera política como gestores o políticos profesionales locales.

por el escándalo de las mensualidades y la Operación Lava Jato. Dirigentes históricos como José Dirceu y José Genoíno fueron sustituidos, no por jóvenes activistas de los movimientos sociales ni por intelectuales orgánicos de la izquierda, sino por burócratas que iniciaron su carrera política como gestores o políticos profesionales locales. La dirección de exintegrantes de sindicatos y organizaciones de la lucha armada cedió lugar a otra. No es casualidad si muchos de los principales fundadores de la CNB provenían del mismo sector: la secretaría de finanzas, a través de la cual se establecía la conexión entre la dirección nacional y las donaciones empresarias para las campañas y se gestionaba la distribución de recursos del fondo partidario público. El PT de esta gente no es el partido de los trabajadores, sino el de los tesoreros.

Sin embargo, ante la deriva conservadora de su cúpula, ocurre que antiguos dirigentes del PT pueden ser caracterizados paradójicamente como «neopetistas», mientras que muchos de los nuevos militantes se perciben como defensores de las banderas históricas del partido. Por lo tanto, no se trata simplemente de un corte generacional. El exgobernador bahiano Jacques Wagner, que elogió a su secretario de Seguridad Pública cuando disparó contra los militantes del MST en 2013, es fundador del PT, pero no es de izquierda. En cambio, Camila Moreno, joven perteneciente a la Comisión Ejecutiva Nacional, defiende las banderas históricas del partido. La historia del PT posibilitó una experiencia que todavía puede ser un punto de partida para las nuevas generaciones.

Lecciones para la «nueva izquierda»

El PT tiene mucho para enseñarnos. Hay algunas fracciones de la «nueva» izquierda que parecen haber olvidado la centralidad de la clase social y de las estructuras económicas de dominación, mientras que la «vieja» militancia no aprendió que la clase en sí misma debe ser resignificada y asumir sus rostros negros y femeninos, que son mayoritarios en Brasil. Sin esa vinculación de lo parcial con lo universal y de las tácticas con la estrategia, terminaremos defendiendo algunas consignas que bien pueden ser legítimas, pero que son fácilmente asimilables por el orden burgués.

La prensa corporativa, por ejemplo, condena el racismo pero defiende el ajuste fiscal. Sin embargo, en Brasil la mayoría de la clase trabajadora es negra y parda. Por lo tanto, el ajuste fiscal es racista. El ataque a los derechos laborales y al sistema único de salud son manifestaciones de un racismo histórico. Basta observar lo que sucedió con la escuela pública cuando se universalizó: los recursos menguaron y perdió la importancia que tenía en el pasado. Es lo mismo que sucedió con las universidades públicas después de la expansión promovida por los gobiernos del PT: están siendo asfixiadas financieramente. Aunque las dificultades comenzaron durante el ajuste fiscal promovido por el segundo gobierno de Dilma, Michel Temer y Bolsonaro transformaron la desarticulación de los servicios públicos en un objetivo de Estado. La adopción durante el gobierno de Temer de un techo al gasto público por veinte años es uno de los medios para lograrlo.

**El PT es la expresión
partidaria de un campo
democrático popular amplio
que se estableció desde la
masificación de la política
electoral en los años 1940.**



El motivo es obvio: lo que sirve para ayudar a los pobres y a los negros debe ser de pésima calidad. Incluir estudiantes proletarios en la universidad fue un paso tan importante como matricular a todos los niños en la escuela primaria. Pero es fácil mantener esa política mientras se recortan los fondos de permanencia estudiantil y se debilitan los salarios docentes al mismo tiempo, tal como hicieron muchos gobiernos desde los años 1980. Es a la luz de estas cuestiones estructurales que la izquierda debe rediseñar su estrategia y promover la confluencia entre la clase y las individualidades que la experimentan en sus múltiples dimensiones.

¿El PT del futuro?

No es la aritmética lo que define el fracaso del PT. Su caída brutal en las elecciones de 2016 reflejó su derrota política, que estuvo marcada por la caída de la presidenta Dilma Rousseff. Cuatro años después, la situación electoral del partido no cambió sustancialmente, pero la tasa de preferencia que el electorado tiene por el partido volvió a subir. Aun en sus peores momentos, el PT sigue siendo la primera minoría electoral desde 1999 si se toman en cuenta todos los órganos electivos del Estado. Por lo demás, el bolsonarismo está lejos de haber sido derrotado.

A pesar de los viejos dirigentes del PT, hay una nueva generación de izquierda que comprende que las luchas del presente no parten de la nada. Esas banderas todavía existen y la clase sigue siendo central. La proletarianización de todas las actividades, desde el repartidor hasta el profesor, desde el estudiante hasta los operadores de ventas telefónicas, nos habilita a pensar que la izquierda todavía puede representar a la mayoría y no tan solo a una suma de minorías. Las diversas identidades son una dimensión adicional que permite entrelazar las distintas formas de sujeción de la clase trabajadora.

El PT es la expresión partidaria de un campo democrático popular amplio que se estableció desde la masificación de la política electoral en los años 1940. Difícilmente pueda ser sustituido sin dividir el espacio material que ocupa. No tiene una gran cohesión ideológica. Como el peronismo argentino, los petistas de derecha y de izquierda seguirán enfrentándose. Solo cuando la clase trabajadora recobre fuerzas para movilizarse, este campo popular generará la oportunidad para que el PT —u otra organización— lidere una nueva época de construcción de derechos sociales y laborales en Brasil. ●

La Guillotina

SIEMPRE MARADONA! GENIO, GENIO, GENIO

No toda multitud indignada expresa una potencia democrática

El contexto de gobiernos progresistas en América Latina habilitó la actualización de una contraposición clásica de la filosofía política. El autonomismo y el estatalismo ideológicos vinieron a polarizar lecturas, conduciendo al abandono de la vocación por pensar los procesos sociales en clave de tensiones, ambigüedades y contradicciones.

«Sociedad civil» y «sociedad política» —o «Estado»— son los términos de una contraposición clásica de la filosofía política, una de cuyas vías de desarrollo se da al interior del marxismo. Desde las inversiones conceptuales con las que el joven Marx enfrenta la filosofía del derecho de Hegel, pasando por los distintos matices que asume en la escritura de Gramsci, aquella oposición resiste al paso del tiempo y se multiplica en análisis de todo tipo. Muchas veces, la encontramos recubriendo al pensamiento con unas armaduras rígidas que lo dejan atrapado en la fangosa realidad que busca sin éxito comprender. Es algo que sucede habitualmente con las dicotomías, cuando esquematizan con trazos de comedia lo que en los dramas reales se manifiesta como un problema complejo.

El contexto de los gobiernos progresistas en América Latina habilitó un relanzamiento de ese teatro de las categorías, donde la filosofía habla con las palabras políticas de la hora. Dos tendencias interpretativas se

constituyeron como fortalezas últimas, tras las cuales se atrincheraron una cantidad de lecturas, abandonando sus previas vocaciones para pensar las tensiones, las ambigüedades y las contradicciones sociales. Un autonomismo ideológico y un estatalismo igualmente ideológico esgrimieron sus armas retóricas, a distancia de lo que la realidad demandaba: nuevas ideas a la altura del despliegue de las posibilidades y los límites de los procesos populares sudamericanos y de los gobiernos que expresaron algunas de sus dinámicas.

Los mejores esfuerzos del lado estatalista avanzaron con una teoría de la complejidad contradictoria de lo estatal-popular. Los mejores esfuerzos del lado autonomista intentaron pensar la ambigüedad de las multitudes. Pero esos esfuerzos se dieron a la manera de líneas paralelas que no se tocan. O que finalmente chocan, no en el infinito, sino cuando los acontecimientos dramáticos obligan a tomar una posición, como sucedió en Bolivia en 2019.

Las multitudes también pueden ser antidemocráticas y ciertos antiestatalismos pueden ser conservadores y represivos.

Una serie de artículos escritos por reconocidas plumas autonomistas en noviembre de 2019, en medio de los conflictos que culminaron con la destitución y el exilio del presidente, del vicepresidente y de otros miembros del gobierno boliviano, repitieron un mismo esquema argumentativo: la caída del gobierno del MAS no ocurrió por un golpe de Estado, sino por la insurrección del pueblo boliviano. La policía y las fuerzas armadas actuaron democráticamente, poniéndose del lado de ese pueblo que se levantaba contra un gobierno corrupto y fraudulento. Evo Morales y Álvaro García Linera traicionaron a los movimientos campesinos y mineros que los llevaron al Palacio Quemado. Por eso no fueron defendidos por esos movimientos. Lo sucedido, entonces, expresaría el derecho de resistencia de la multitud rebelde frente al poder constituido en manos de un caudillo (figuración del poder patriarcal del capital) que pretendía eternizarse en el poder.

Esta recapitulación solo pretende llamar la atención sobre una forma de argumentación que, del mero hecho de que una parte de la sociedad se movilice contra el Estado —sin importar qué parte sea, a qué clase social pertenece, con qué tipo de consignas o fines, en articulación con qué poderes, en qué contexto y con cuáles apoyos nacionales, regionales e internacionales—, concluye necesariamente que se trata de la expresión de un movimiento democrático que se activa

contra un gobierno autoritario. Esta peculiar filosofía de la democracia constituye la deriva ideológica de una perspectiva que, en sus primeras formulaciones, cuestionaba no solo el modelo de representación del pluralismo liberal (¿de allí la actual disposición a relativizar los triunfos electorales de los partidos que luego son destituidos?), sino también el ocaso totalitario de la política revolucionaria del siglo XX (¿de allí la actual disposición a asignarles a quienes repudian los nuevos golpes en América Latina nostalgias neoestalinistas o un pensamiento dicotomizante deudor de la Guerra Fría?).

Fue en el contexto de la llamada crisis del marxismo que tomó consistencia esa perspectiva filosófico-política sobre la democracia, popularizada sobre todo por los teóricos del operaísmo italiano. En sus diversas formulaciones, se ocupa de pensar la conflictividad social y política, haciéndola girar en torno a una teoría de la potencia insurreccional de las multitudes. Especialmente apta para ser recreada en coyunturas de eferescencia social y modulada, entonces, como elogio de la revuelta, de la indignación o de la destitución, esta filosofía vuelve a circular cada vez que se inicia un ciclo de manifestaciones.

En la Argentina de 2001, por ejemplo, la filosofía de la potencia de la multitud fue muy fuerte como matriz de pensamiento. En aquella coyuntura, que fue la



de una sociedad movilizada, que produjo auténticas experimentaciones democráticas (fábricas recuperadas, asambleas barriales, piquetes de trabajadores desocupados, escraches a los militares asesinos, prácticas de trueque, arte político callejero, etc.) frente a un Estado que solo actuaba como el feroz guardián de la reproducción neoliberal, los hechos parecían adecuarse perfectamente a esa perspectiva filosófica preexistente. Y así se daba ese fascinante espejismo, por el cual una experiencia histórica y unas textualidades provenientes de otros contextos entraban en un juego de resonancias, estimulando la imaginación colectiva.

Pero el problema aparece cuando esa confluencia feliz entre unas circunstancias concretas y unos esquemas interpretativos se proyecta más allá de una coyuntura puntual. La perspectiva que festeja la potencia de la multitud como sujeto democrático, si es tomada por la tentación de afirmar el sentido emancipador de cualquier multitud empírica, puede estabilizarse y perder su potencia de comprensión con respecto a unas circunstancias que se transforman.

En Argentina, por ejemplo, la estabilización dogmática de la filosofía de las insurrecciones democráticas colaboró —luego de aquel afortunado encuentro con la realidad argentina de 2001— con el olvido de que las multitudes también pueden ser antidemocráticas, o que ciertos antiestatalismos (ciertas luchas contra

el Estado) pueden ser conservadores y represivos. En 2008 volvieron a juntarse multitudes en las calles del país; en 2012, se escucharon cacerolazos. Solo que el grito de entonces se dirigía contra un Estado que pretendía sostener una política redistributiva que afectaba a sectores de las clases dominantes. Sin embargo, la ideología que afirmaba que toda multitud indignada expresaba una potencia democrática continuaba vigente, lo cual habilitó malas lecturas de lo que estaba sucediendo. Malas lecturas acerca de cuáles eran las fuerzas enfrentadas, cuáles eran los sentidos y orientaciones de esas luchas, cuáles perspectivas se abrían y cuáles eran los enemigos, los nuevos peligros y los desafíos para los sectores populares.

El caso de Brasil y las llamadas «jornadas de junio» de 2013 muestran algo similar. La ambigüedad y variedad de los malestares que entonces se expresaron, la mutación de la composición de clase, del estilo y las consignas de las manifestaciones —simbolizable en el traspaso del protagonismo del Movimiento Pase Libre al Movimiento Brasil Libre— exigían un pensamiento capaz de considerar la multiplicidad de los conflictos y las contradicciones que estallaron en esos años. Sin embargo, la escena de la argumentación pública fue más bien asfixiada por la oposición entre un discurso estatalista, que insistió en una defensa cerrada de la política del PT, y un antiestatalismo estereotipado, que leyó binariamente lo que ocurría creyendo que las

La ideología de la insurrección de la multitud tiene su contraparte exacta en una ideología del Estado como tendencia mistificadora.

fuerzas que se enfrentaban eran las potencias democráticas de la multitud insurrecta, por un lado, y las fuerzas opresoras del gobierno nacional, por el otro.

Así, el 2013 brasileño fue visto como una especie de reedición del 2001 argentino –colocado en cadena, asimismo, con la Primavera Árabe, el 15M español, la Plaza Taksim en Turquía, etc.–, y se interpretó el conjunto de esos fenómenos como la expresión genuina de una rebeldía social que impugnaba, a través de esos estallidos de indignación, a la política, que era *escrachada* en su corrupción esencial. A tal punto que, cuando se llevó adelante la destitución de la presidenta Dilma Rouseff, voces importantes del autonomismo brasileño se negaron a denunciar la maniobra parlamentario-judicial-mediática, arguyendo que la legitimidad estaba del lado de la «indignación ciudadana» que tenía poder de veto sobre los poderes instituidos.

Sin embargo, son dos –hay que insistir en ello– las retóricas que se enfrentan y que, al pretender neutralizarse, se retroalimentan. La ideología de la insurrección de la multitud tiene su contraparte exacta en una ideología del Estado como tendencia igualmente mistificadora que, invirtiendo los términos de la ecuación, coloca al Estado del lado de la movilización y la experimentación contrahegemónica y a la sociedad del lado de la reproducción conservadora del orden neoliberal. Ese tipo de interpretaciones fueron especialmente favorecidas por coyunturas como la de Bolivia en 2008 (cuando la rebelión de los sectores más ricos de la región de la Media Luna puso en jaque al gobierno de Evo Morales) o la de Argentina ese

mismo año, cuando amplios sectores medios y altos se movilaron en defensa de los grupos agroexportadores y en contra del gobierno de Cristina Kirchner durante la llamada «crisis del campo».

En ambos casos, era la *sociedad conservadora* (aquí auspiciada por la Sociedad Rural Argentina, allá por los Comités Cívicos de Santa Cruz, Pando y Beni) la que se rebelaba contra el *Estado progresista*. Lo destituyente ahora se refería a la activación de las zonas más concentradas, corporativas y reaccionarias de lo social en nombre de la defensa de privilegios y prejuicios de larga sedimentación, enfrentando a los poderes ejecutivos nacionales que buscaban ampliar las fronteras democráticas.

En Argentina, iniciativas como la Asignación Universal por Hijo, la recuperación del sistema jubilatorio, la ley de desmonopolización de los medios de comunicación, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, entre otras políticas de expansión de derechos, se leyeron muchas veces desde una perspectiva estadocéntrica, es decir, desde una ideología del Estado. Esta también podía deslizarse hacia una especie de fe, que celebraba a los gobiernos latinoamericanos como si fueran los actores centrales de una epopeya que conduciría a los pueblos hacia una nueva era posneoliberal. En vez de una filosofía neospinoziana de la multitud, se volvía legible, detrás de una concepción del Estado como condición de la libertad, una especie de neohegelianismo de la representación política, lo cual implicaba aceptar otra vez –aunque de modo distinto– la misma dicotomía entre la inmanencia de lo social y la trascendencia de lo político.



Las luchas que cuentan históricamente no son las que protagonizan los filósofos o los intelectuales, sino las de las masas populares. Y el caso de Bolivia, nuevamente, es elocuente: el fin del experimento golpista y el contundente apoyo popular al retorno del MAS al gobierno relanza el proceso de cambio sobre nuevas bases. Las crisis tienen la virtud de producir una especie de crítica real —con notables efectos epistemológicos— de lo que se manifiesta en la escena social y política en tanto tienen consecuencias reveladoras de las posiciones que se asumen concretamente y permiten medir su congruencia o incongruencia con las palabras que embellecen las buenas intenciones de todos.

Cuando el neoliberalismo enfrenta las tentativas redistributivas y reparatorias de los gobiernos progresistas a través de ofensivas fascistas de nuevo tipo, la ilusión de que la polaridad relevante es la que opone

al autonomismo antiestatalista y al populismo estatalista se desploma. Solo las sensibilidades no atrofiadas por vanas disputas y rencores pueden distinguir las fronteras trazadas por la lucha de clases. Esto es, la división social real, que no permite que se confundan las revueltas auspiciadas por las ultraderechas neoliberales para recuperar el pleno comando en los países donde lo habían perdido con las insurrecciones democrático-populares que se alzan contra la violencia neoliberal en tanto herencia viva de las dictaduras en nuestro continente.

Las calles de Bolivia y las calles de Chile, durante los mismos meses agitados de 2019, no son las mismas calles: hablan, en su lenguaje a la vez críptico y elocuente, de cosas muy distintas. Y no es el esquematismo del enfrentamiento entre las multitudes libres y el Estado opresor el que va a ayudarnos a comprender esas voces y esos silencios. ●

Aristas del interregno: el progresismo veinte años después

Justo cuando América Latina parecía condenada a vivir otra larga etapa de gobiernos de derecha, el tablero comenzó a cambiar nuevamente. Sin embargo, los nuevos gobiernos progresistas parecen orientarse a cumplir un papel más conservador que el que cumplieron durante el ciclo anterior.

A casi dos décadas del inicio del ciclo que intentó dar una respuesta gubernamental a las luchas antineoliberales, y en medio de un paisaje crítico marcado por un agresivo retorno de las derechas al escenario político, el progresismo nacionalista latinoamericano –en sus variantes y combinaciones social-liberales, socialdemócratas o populistas– vuelve o se propone volver al gobierno de la mayoría de los países de la región, recuperando su vocación y su razón de ser: el ejercicio del poder estatal.

«Progresismo» ha sido el nombre convencional por medio del cual se trató de asir algo difuso, diverso y ambiguo cuya densidad real y presencia concreta son, no obstante, incuestionables dado el lugar que ocupó en la escena política latinoamericana del siglo XXI. Su consistencia regional surge de la mirada transversal, una mirada que asiente claves de lectura y criterios capaces de revelar las diferencias y la distancia entre formas nacionales particulares y momentos históricos diferenciados.

Debemos distinguir el primer ciclo de gobiernos de la década pasada en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Uruguay del espectro actual, que incluye el progresismo tardío mexicano –todavía en su etapa inicial–, los retornos al poder en Argentina y Bolivia, el giro ecuatoriano, diversos perfiles opositores de fuerzas que fueron gobierno y configuraciones emergentes como la del Frente Amplio en Chile y la de Juntos por el Perú.

Un panorama sin duda variado, pero que no deja de ser inteligible por algunos trazos transversales que le otorgan forma y sentido a escala latinoamericana.

En un plano general, lo que quiero poner en evidencia es que, a diferencia de la primera década del siglo XX, cuando el progresismo se presentaba como un proyecto transformador, con tintes incluso revolucionarios –aunque no excediera el espejismo de la retórica– su perfil actual es netamente conservador, al punto de que este rasgo ya no puede ser considerado un elemento contradictorio o una anomalía, sino que se vuelve parte integrante de su definición histórica y política.

Cambio de época

Si en sus inicios el impulso antineoliberal del progresismo derivaba en buena medida de una oleada de luchas populares, la tendencia hacia el giro conservador empezó a desplegarse durante su primer ciclo de gobierno, con el reflujo de la movilización desde abajo. Sigue su curso en las condiciones actuales, menos favorables por el desgaste acumulado de las organizaciones políticas, grupos dirigentes y liderazgos, por el deterioro del contexto económico y por un cambio en la correlación de fuerzas con las derechas.

Este último aspecto, más que ningún otro, perfila de forma nítida los progresismos latinoamericanos de segunda generación en tanto genera una actitud



defensiva que se ha vuelto característica, una evidente propensión hacia el resguardo de un orden determinado que contrasta con el dinamismo que –aun de forma descompuesta y sin consistencia en el mediano plazo– ostentan las derechas, en particular aquellas más reaccionarias.

En efecto, las derechas volvieron a levantar la cabeza y ondean banderas de transformación (reaccionaria), evocando el fantasma del comunismo, aun en ausencia de una real amenaza revolucionaria. Si bien mostraron que no pueden sostenerse en el gobierno –por lo menos en Argentina y en Bolivia–, no dejan de contar con un sólido arraigo cultural en algunos nichos de sentido común conservador y de resentimiento clasista de sectores medios y altos. Aprovechan el vacío dejado en el campo de la acción colectiva por el repliegue consumista, corporativo y clientelar de las clases subalternas (tolerado, cuando no auspiciado, por las políticas de los gobiernos progresistas).

Las profundas raíces culturales reaccionarias de las derechas, que afloran bajo la forma del individualismo egoísta, el elitismo, el clasismo y el nacionalismo xenófobo, no lo hicieron tanto por iniciativa de las nuevas (viejas) derechas. Al contrario, el surgimiento de éstas es consecuencia de la derechización cultural de fondo que atraviesa a las sociedades latinoamericanas debido a que, aun en la década progresista, las clases y los grupos dominantes en la producción cultural y el ejercicio

del poder en un sentido amplio no dejaron de ocupar un lugar dominante.

Si bien pesan inercias históricas y renovadas capacidades de activar referencias clasistas y racistas, también lo hace la notable ausencia de una iniciativa político-pedagógica progresista inscrita en el mediano plazo. En este rubro, es sintomático que la cuestión educativa (no solo la que tiene que ver con la escolarización, sino también la que atañe a los medios masivos de comunicación) fue afrontada por la mayoría de los gobiernos progresistas solo a nivel cuantitativo, atendiendo demandas de inclusión a través de un aumento de matrícula, pero no integralmente –en tanto cuestión cultural– ni cualitativamente, por medio de la apertura de debates, iniciativas de reforma, estimulando el recambio de paradigmas, el cuestionamiento de núcleos fundamentales de sentido común de origen neoliberal, que siguen proliferando tanto a nivel cultural difuso como en el ámbito de la educación, sea primaria, media o superior.

A pesar de esta ventaja cultural, las derechas –por sostener modelos excluyentes– no logran estabilizar su fuerza coyuntural y alcanzar una irradiación hegemónica duradera. El juego de papeles entre derechas buenas y derechas malas, liberales, populistas o parafascistas, constituye una eficaz táctica que permite modular la ofensiva neoliberal y dar cuenta de su amplitud, aunque, al mismo tiempo, acarrea contradicciones y tensiones entre los proyectos y las ambicio-

nes de los grupos dirigentes. Pero en este potencial empate catastrófico tampoco el progresismo está en condiciones de recuperar la capacidad hegemónica perdida. Solo alcanza, eventualmente, a generar un consenso alrededor de la idea de «mal menor». El repliegue moderado no es simple táctica: está inscrito en el código genético del progresismo y es la expresión de su involución.

En este *impasse* (un interregno en el que, aunque existen algunas contratendencias, la correlación de fuerzas es desfavorable), el progresismo se coloca del lado de la conservación, presentándose como una propuesta razonable de defensa de lo existente. De allí el argumento minimalista que sostiene que las derechas se enfrentan convenciendo a sectores de las clases medias y altas de que una gestión moderada y conciliadora, más o menos aderezada de populismo retórico, es una mejor opción de gobernabilidad que las que proponen los neoliberales que se asumen como sus representantes directos, como paladines del libre mercado y de las anexas libertades clasistas. En este desplazamiento, que no deja de resultar paradójico, el pasaje de la polarización «pueblo-oligarquía», en clave antineoliberal, a la conciliación conservadora en una óptica social-liberal marca el cambio de época del progresismo latinoamericano.

Progresismos tardíos: después de las revoluciones pasivas

Además del efecto de desplazamiento político-ideológico que produjo el cambio de circunstancias y el ascenso de las derechas, el perfil conservador de los progresismos fue asentándose en sus orientaciones socioeconómicas y político-institucionales. En el primer ciclo adquirieron la forma de lo que Gramsci denominaba revoluciones pasivas, es decir, transformaciones limitadas que eran concesiones a las demandas de las luchas de las clases subalternas y que, como contrapartida, apuntaban a su desmovilización. A pesar de estar impulsados por un ciclo de movilización, los progresismos asumieron como únicos resortes políticos la iniciativa desde arriba y el aparato gubernamental-estatal. A nivel de políticas públicas, promovieron reformas de corte nacionalista y redistributivo, pero dentro de límites que permitieran negociar y lograr diversos niveles de aceptación y alianza con sectores de las clases dominantes y de las potencias imperiales.

Por otra parte, cesarismo y transformismo operaron la contención del conflicto y la pasivización como modalidades de vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de la acumulación de fuerzas y de procesos de subjetivación antagonista y autónoma de las clases subalternas. El cesarismo sintetizó simbólicamente la estatalización, como un dispositivo carismático de delegación, y el transformismo implicó la absorción y cooptación de significativas franjas dirigentes de los movimientos y organizaciones populares, que habían protagonizado el ciclo de luchas antineoliberales.

Los progresismos actuales resurgen en circunstancias diferentes y, por lo tanto, no corresponden a este formato. No requieren acentuar el signo de la transformación ni intercambiarla por pasivización. No se justifican ni legitiman como respuestas reformistas a una activación desde abajo, a un desborde de masas que habría que canalizar y contener, sino como una voluntad de conservación de cara a la amenaza reaccionaria.

Actualmente, a diferencia de lo que sucedía hace una década, las reivindicaciones de una intencionalidad anticapitalista y un horizonte socialista están prácticamente ausentes, salvo las eventuales elucubraciones etapistas de algunos intelectuales, dirigentes o agrupaciones políticas cada vez menos influyentes. En tiempos de crisis, y frente a la ofensiva de distintas versiones de neoliberalismo más o menos derechizado, los progresismos de segunda mano se instalaron en la gestión de lo existente.

La justificación para el retorno del progresismo es, en última instancia, conservadora: se funda en argumentos que giran en torno a la preservación de un orden o un equilibrio perdidos. En tiempos de bonanza, la abundancia del tamaño del pastel permitía conciliar equilibrios macroeconómicos, ganancias crecientes, acumulación de capital y dosis moderadas pero significativas de redistribución de riqueza y de fortalecimiento del sector público. Sin embargo, esto se fue extraviando a raíz del cambio de clima económico que se vivió luego del impacto tardío de la crisis mundial de 2008 en la región, que desde 2013 marca una involución regresiva de los proyectos progresistas y el contemporáneo retorno a la escena de las derechas.

Asunto definitivamente archivado es la otra cara de la transformación, la reforma de la política como supera-



A diferencia de la primera década del siglo XX, cuando el progresismo se presentaba como un proyecto transformador, su perfil actual es netamente conservador.

ción de los formatos elitistas de la democracia neoliberal, que fue demanda de los movimientos populares de la mano de la crítica a las transiciones democráticas. La cuestión democrática fue el hoyo negro del progresismo, en el cual desaparecieron todas las hipótesis de democracia participativa, autodeterminación y autonomías en nombre de una lógica centralizadora, de la conducción vertical burocrática o carismática desde la cúspide Estado-gobierno-presidencia. El control social, la pasivización de los movimientos antineoliberales, el recurso a dispositivos transformistas, clientelistas y corporativistas, la negación de toda pedagogía política orientada al empoderamiento popular (y su contraparte de desprecio y desconfianza hacia toda iniciativa autónoma desde abajo) han sido rasgos característicos de la forma política del progresismo.

El tema de la socialización del poder y la política, de una democratización sustancial, quedó tan separado de la agenda progresista que ya no constituye un criterio a partir del cual los progresismos gobernantes puedan ser evaluados. Sin embargo, la desactivación de las dinámicas de politización-movilización-organización de las clases subalternas pesó a la hora de hacer frente a los golpes institucionales en Brasil y Bolivia, tanto por la insuficiencia de la capacidad de respuesta inmediata como por la necesidad de recurrir a una reactivación de las organizaciones populares que previamente operaban en clave de contención del conflicto.

Quien no avanza, retrocede

En el interregno que acompaña a una crisis orgánica en ciernes, en ausencia de una fuerte iniciativa desde abajo, afloran los fenómenos siniestros de la restauración y la conservación. En un contexto económico e internacional más desfavorable, agotado el impulso de la oleada de luchas antineoliberales que lo proyectó en el escenario político regional y después del fin de su primer prolongado ciclo gubernamental, el progresismo de segunda generación parece orientado a cumplir un papel históricamente más conservador que su antecesor, en tanto no promueve el avance de un proceso transformador y tendencialmente emancipatorio, sino que se encuentra a la defensiva, atrincherado en la preservación de un orden económico, social y político amenazado por derechas restauradoras y reaccionarias.

Tal reversión del progresismo podrá resultar eficaz para detener el peligro derechista, pero solo coyunturalmente, de manera endeble y fácilmente reversible. No contribuye ni al avance de su propio programa ni a su proyecto reformista, nacionalista, estatalizador y redistributivo, ni tampoco al crecimiento de una izquierda en el sentido amplio (movimientos sociales, organizaciones políticas e instancias diversas de autoorganización de las clases subalternas). En todo caso, esperemos que la historia no se repita. Esperemos que, después de la tragedia del derrumbe de los gobiernos surgidos durante la primera década del siglo XXI, los de la tercera década no resulten ser una farsa, una grotesca caricatura de lo que fueron o de lo que quisieron ser. ●

Puede fallar

Acechado por el espectro democrático, el texto de la Constitución de los Estados Unidos es el fruto de un error histórico. El pueblo estadounidense sufre las consecuencias hasta el día de hoy.

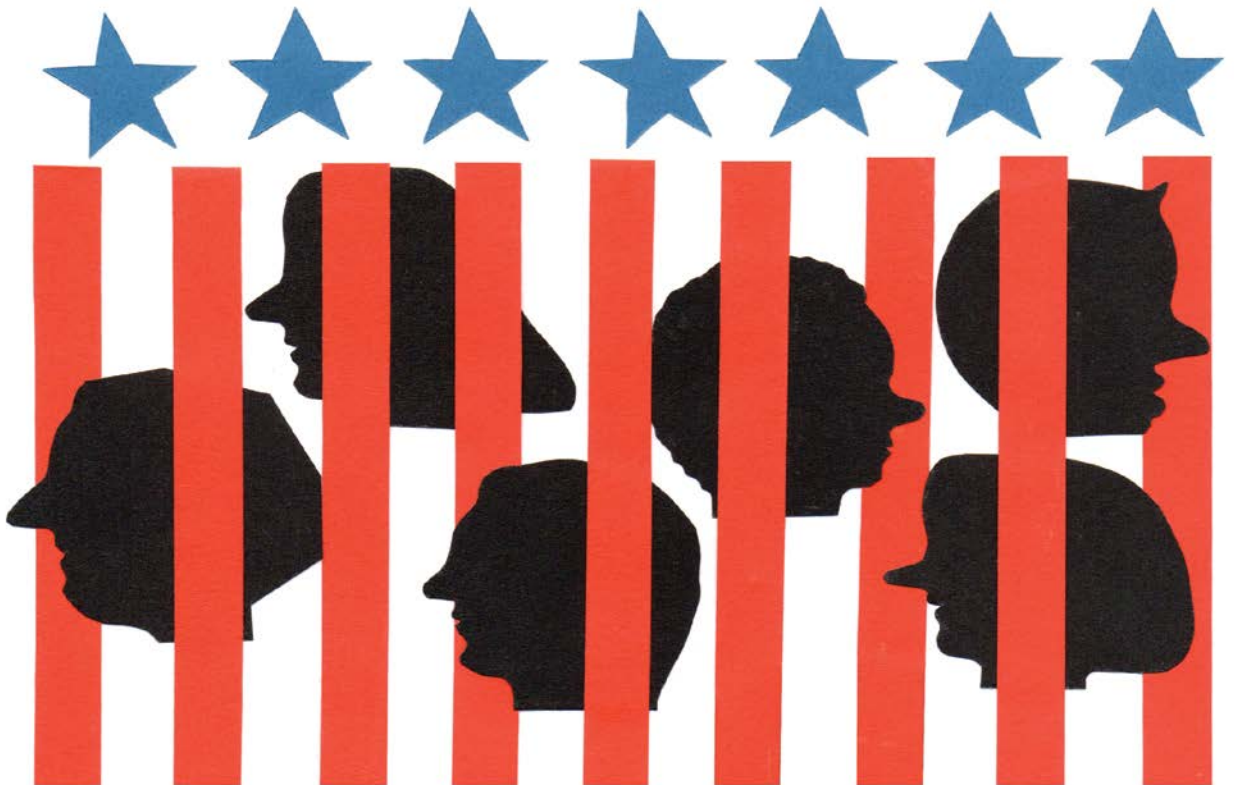
Podría pensarse que un país al que le gusta considerarse un experimento estaría, como mínimo, advertido frente a la posibilidad de fracasar. Pero este año, de forma sorpresiva, millones de estadounidenses parecen haber tomado conciencia de su Estado fallido por primera vez.

Como cuando se enfoca lentamente una imagen, la escena fue ganando claridad a medida que progresaba la pandemia: Estados Unidos es un país rico que ni siquiera puede garantizar un servicio de correo adecuado. No puede garantizar elecciones ordenadas, contener el brote de una enfermedad, gestionar incendios ni construir subterráneos. Muchos programas nacionales contra el desempleo colapsaron durante la primavera, cuando unos sistemas informáticos de la era de las tarjetas perforadas, programados en un lenguaje digital tan antiguo como el sánscrito, colapsaron frente a un cambio en la fórmula de las prestaciones dejando a millones de personas desempleadas sin ningún ingreso. Fue solo un resumen de la realidad de los Estados Unidos: el gobernador millonario de Nueva Jersey apareció en la TV rogando que algunos voluntarios arreglaran las computadoras del Estado, mientras miles de ciudadanos y ciudadanas enfrentaban en silencio toda una serie de pequeños apocalipsis privados.

Pero difícilmente pueda afirmarse que se trata de un Estado inactivo. Estados Unidos criminaliza más conductas que ninguna otra democracia en el mundo.

Encarcela a sus ciudadanos y ciudadanas a niveles que logran eclipsar a cualquiera de sus pares. Como cabe esperar en un Estado fallido en el que la violencia es endémica y la población está armada hasta los dientes, las fuerzas policiales matan gente con total impunidad. Sin embargo, esto no las convierte en fuerzas incompetentes o menos profesionales. Durante el verano, la policía del condado de Los Ángeles fue acusada de alojar en su interior a una banda criminal: «Los Ejecutores, una banda de policías [...] que luce tatuajes de calaveras con referencia al imaginario nazi y ostenta una AK-47, celebra los disparos efectuados por la policía y la iniciación de sus nuevos miembros con “fiestas de tinta”», informó el *LA Times* en julio.

La letalidad de este Estado fallido no es ninguna novedad. Hace veinte años, las políticas comerciales clintonianas colisionaron con el ruinoso estado de la infraestructura social del país para producir uno de los episodios de desindustrialización más salvajes que se hayan visto durante tiempos de paz. La emergencia subsiguiente de enfermedades mentales, discapacidades, dolores crónicos y adicciones elevó la mortalidad de la clase trabajadora hasta límites que no tienen ningún paralelo en el mundo contemporáneo. Digo bien: en el mundo *contemporáneo* porque, como notaron Anne Case y Angus Deaton, especialistas en economía, hay un precedente obvio de estas «muertes por desesperación»: la mortalidad masiva de Rusia durante la última fase del período soviético y durante su etapa possoviética.



Una crisis puede ser una casualidad. Pero tantos desastres superpuestos deben ser considerados como un fenómeno singular, que podríamos denominar simplemente la «crisis estadounidense».

El Termidor de 1787

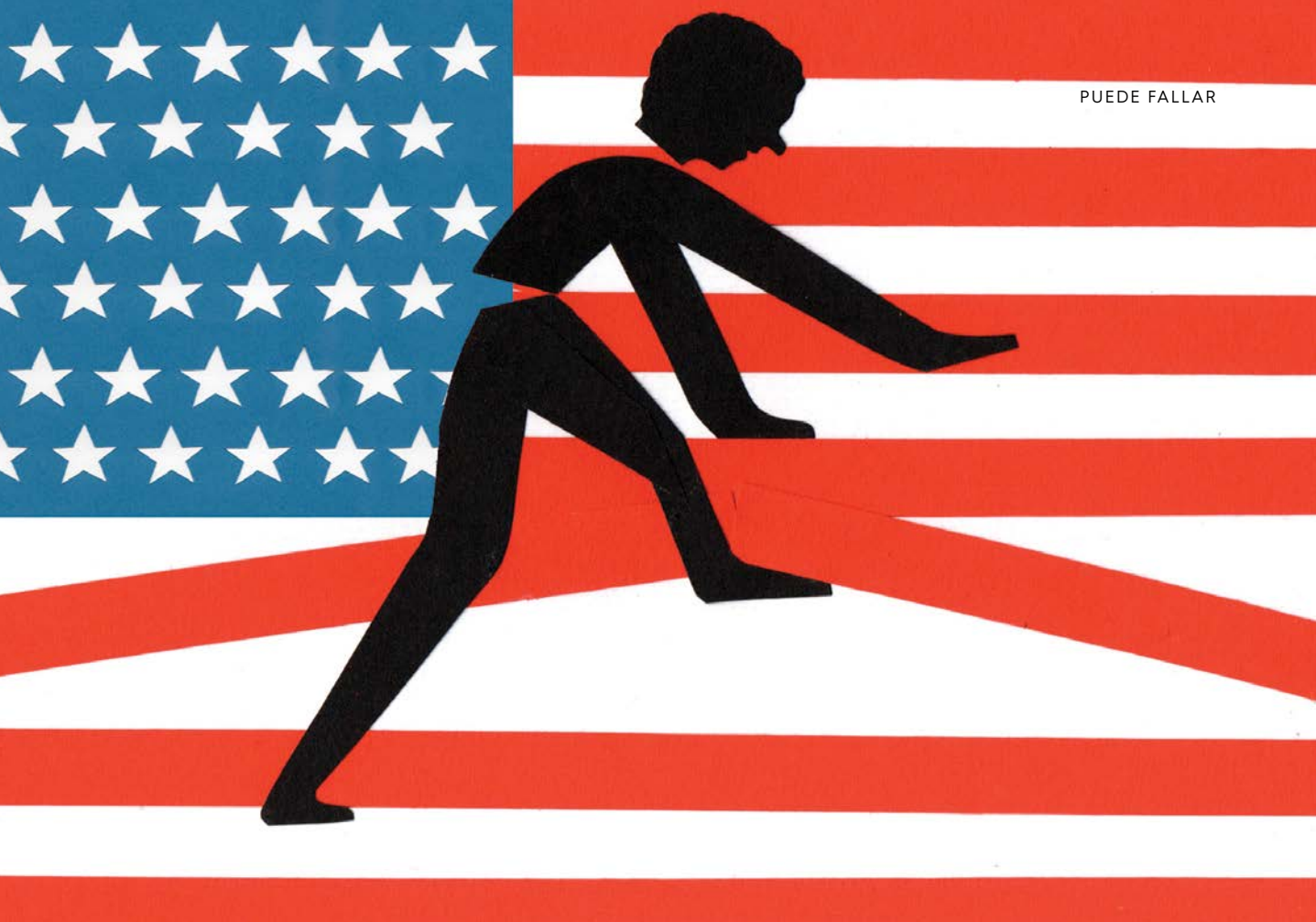
Una crisis puede ser una casualidad. Pero tantos desastres superpuestos, que afectan simultáneamente a tantos sectores distintos de la población, deben ser considerados como un fenómeno singular, una condición que podríamos denominar simplemente la «crisis estadounidense».

Últimamente, todos y cada uno de los aspectos de esta crisis se originan en la misma contradicción: en ausencia de una nobleza reinante y de una Iglesia bien establecida, sin una burocracia hegeliana ni una casta militar, la única fuente de autoridad legítima que los ciudadanos y las ciudadanas estadounidenses reconocen es la soberanía popular. Pero las instituciones del país están diseñadas justamente para excluir el ejercicio organizado de esta soberanía.

Los orígenes de este *Sonderweg* estadounidense deben buscarse en una revolución frustrada. Durante

los años inmediatamente posteriores a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las mayorías plebeyas, todavía empapadas del radicalismo ideológico de la Revolución, tuvieron éxito al exigir a sus legislaturas estatales medidas inflacionarias diseñadas para desplazar la carga de las deudas de la guerra desde las espaldas de los granjeros pobres hacia los acreedores. Más que cualquier otro aspecto de la turbulenta escena política de los años 1780, fue el horror a este despojo lo que inspiró a James Madison y a sus compañeros, junto con quienes escribió la Constitución, a celebrar la Convención de Filadelfia —que en realidad era ilegal, puesto que los procedimientos no se autorizaban en ninguna disposición de la constitución vigente—, en la cual resolvieron que debía evitarse a toda costa que las mayorías populares volvieran a extorsionar al gobierno para obtener políticas de redistribución de la propiedad.

Pero en un continente con tierras tan abundantes, cuyos ciudadanos y ciudadanas libres disfrutaban del



derecho a voto más amplio del mundo, y donde se votaba incluso antes de la revolución, no había ninguna posibilidad de restringir el sufragio. Quienes redactaron la nueva Constitución tuvieron que buscar un método innovador para limitar la soberanía popular, que funcionara aun frente a la presencia de un electorado enorme. La solución *jiu-jitsu* de Madison frente a este rompecabezas, inspirada en Montesquieu, consistió en utilizar la fuerza de la democracia contra sí misma: dividir el Estado en diferentes pedazos, dándole a cada uno un poder de veto sobre los otros (fisurando la autoridad pública verticalmente entre los Estados y el gobierno nacional y horizontalmente entre las distintas ramas del Estado a cada nivel) de forma tal que ningún electorado, sin importar su magnitud, fuera capaz de ejercer un poder real.

Como en la poda artística, que se amolda al entorno que la rodea, toda la cultura política estadounidense tomó la forma de este molde madisoniano. No hay nada en la Constitución que le de a la Corte Suprema

poder de veto sobre una legislación promulgada siguiendo los procedimientos. Tampoco hay nada en el texto de Madison que haga alusión al requisito de una mayoría cualificada para que las leyes ordinarias sean aprobadas por el Senado (un rasgo que no comparte ningún otro órgano representativo del mundo). Sin embargo, la supremacía judicial y los obstáculos del Senado lograron incorporarse sin problemas al tejido de las instituciones nacionales.

El sello que Madison imprimió sobre el sistema partidario también tuvo un impacto considerable. Cuando las organizaciones partidarias nacionales emergieron durante los años 1840, tomaron la forma de máquinas clientelares organizadas de forma laxa, que servían a las autoridades electas en el marco de un horizonte político esencialmente local. Como resultado, los partidos carecían de órganos centrales de gobierno con poder para implementar políticas nacionales homogéneas e imponérselas a quienes se postulaban como candidatos y a las autoridades políticas electas



(más adelante surgieron partidos de izquierda que tenían estos rasgos, pero fueron expulsados de la política por leyes electorales discriminatorias inexistentes en el marco de cualquier democracia convencional).

Por lo tanto, el partido de masas programático –el principal instrumento mediante el cual los electores de las democracias modernas pueden intentar influir en términos generales sobre la política– estuvo bloqueado desde un principio.

Esterilidad legislativa

Para los demócratas de la Ilustración transatlántica, que habían hecho suya la causa revolucionaria, la Constitución de 1787 representó una amarga decepción. Los militantes progresistas, como el radical inglés Richard Price y el abolicionista francés Jacques Pierre Brissot, supieron de inmediato lo que estaba en juego: un esquema contrarrevolucionario que injertaba los rasgos del gobierno aristocrático inglés –legislatura bicameral, poder de veto del ejecutivo– en el suelo de un Estado posrevolucionario. La Constitución fue comparada desfavorablemente con la celebrada Constitución de Pensilvania de 1776, cuyas disposiciones radicales –legislatura unicameral libre de veto, procesos públicos, sufragio universal– habían sido denigradas por John Adams y Alexander Hamilton, pero se habían ganado el respeto de los enciclopedistas de Diderot.

Sin embargo, a pesar de su característica vigilancia

republicana, los radicales fracasaron a la hora de dar una señal de alarma frente al giro antidemocrático de Estados Unidos. Tal como notó el historiador Jonathan Israel, su deseo de disponer de un modelo democrático viviente los llevó a «sobrestimar las credenciales democráticas de la revolución» en un intento de hacer propaganda frente a las audiencias europeas. Durante el siglo siguiente, los demócratas europeos –especialmente en Inglaterra– adoptaron un discurso apologético acerca de la utopía estadounidense que no deja de tener cierto parecido con el que los comunistas del siglo XX adoptaron en relación con la Unión Soviética.

Por lo tanto, la tarea de descubrir la letra chica madisoniana quedó en manos de los sectores conservadores tradicionales, que suelen ser escépticos frente a la democracia. Durante los debates parlamentarios que llevaron a la aprobación en el Reino Unido de la importante Ley de Representación del Pueblo de 1867, que extendía el derecho de voto a las amas de casa de la clase trabajadora, el diputado conservador Edward Bulwer-Lytton, quien se oponía a la medida, respondió al panegírico de la amplitud del sufragio estadounidense, que efectivamente carecía de cualquier requisito de propiedad, señalando lo poco que esto importaba en términos prácticos:

El sabio salvoconducto de Estados Unidos contra el sufragio popular es la impotencia en la que deja a su Cámara de Representantes. Me atrevo a decir que se podría conceder en este país no solo

Como un monarca inoperante, el pueblo estadounidense está llamado a reinar sin poder gobernar.

el derecho a voto de £7, sino incluso el sufragio universal, protegiendo todo lo que tiene que ver con las relaciones exteriores y con el armado y desarmado de los gabinetes, es decir, un sufragio que no permita más que la expresión de la libertad verdadera, siempre y cuando se deje luego a la Cámara de los Comunes tan poca influencia, poder, peso y autoridad como [a la cámara baja de Estados Unidos].

Una valoración similar hizo Sir Henry Maine, el prominente erudito en cuestiones legales del siglo XIX, que aborrecía la tendencia democrática del Reino Unido victoriano tardío y celebraba la Constitución de Estados Unidos como una alternativa integral: «Mientras que la Constitución del Reino Unido se transforma de forma insensible y cada vez más en un gobierno popular rodeado de dificultades», escribió en 1885, «la Constitución de Estados Unidos ha demostrado que, hace casi un siglo, se descubrieron varios recursos mediante los cuales algunas de esas dificultades pueden ser hasta cierto punto mitigadas y otras superadas por completo».

Lo que le atraía a Maine del sistema estadounidense era la forma en que ponía «obstáculos casi insuperables a cualquier transformación de la legislación», reduciendo el volumen de las leyes a una cantidad que, en comparación con Inglaterra, era «prácticamente insignificante». Coronada por su Artículo V —«la piedra angular de todo el tejido federal»— que vuelve virtualmente imposible cualquier tipo de enmienda, la

Constitución de EE. UU. se aseguraba el buen gobierno «refrenando hábilmente todo impulso popular».

El vacío primero

Ahora queda claro que el cálculo de Madison y sus compañeros fue realmente malo. Habían asumido que, una vez que destronaran al populacho, el control completo de la política implicaría en la práctica el retorno a una «aristocracia natural» de hombres semejantes a ellos mismos: caballeros ociosos que habían gozado de una educación clásica y estaban comprometidos con el servicio público ilustrado o, en una época posterior, la élite nordestina descendiente de los Morgan y los Rockefeller.

Pero la existencia de una aristocracia natural no está nunca garantizada, y hoy Estados Unidos no tiene nada que se parezca a una élite con capacidad de cohesión.

En cambio, como un monarca inoperante, el pueblo estadounidense está llamado a reinar sin poder gobernar. Ha votado aproximadamente en ochenta elecciones nacionales desde la guerra de Secesión, pero solo una vez tuvo éxito a la hora de hacer efectiva la transferencia del control unificado del gobierno de un partido a otro (en 1952). Los programas que se prometen durante las campañas electorales son eliminados por las cortes o bloqueados por el Senado y las autoridades partidarias se apoyan sobre la incapacidad del electorado para saber quién es responsable de qué cosa.

Con conciencia de que el sufragio tiene una conexión extremadamente frágil con la implementación de cualquier programa, el electorado responde ejercitando su derecho a votar de una forma más limitada que en cualquier otra democracia establecida del mundo.

Hay un vacío en el centro del Estado, en el espacio en donde debería desarrollarse la soberanía popular, un vacío diseñado a propósito, que fastidia a la gente con todo tipo de disfunciones, una absoluta falta de competencia y corrupción. Incoherente y antidemocrático, el sistema de gobierno estadounidense se ha convertido en un callejón sin salida: es una receta para un Estado fallido, garabateada sobre un antiguo pergamino. ●

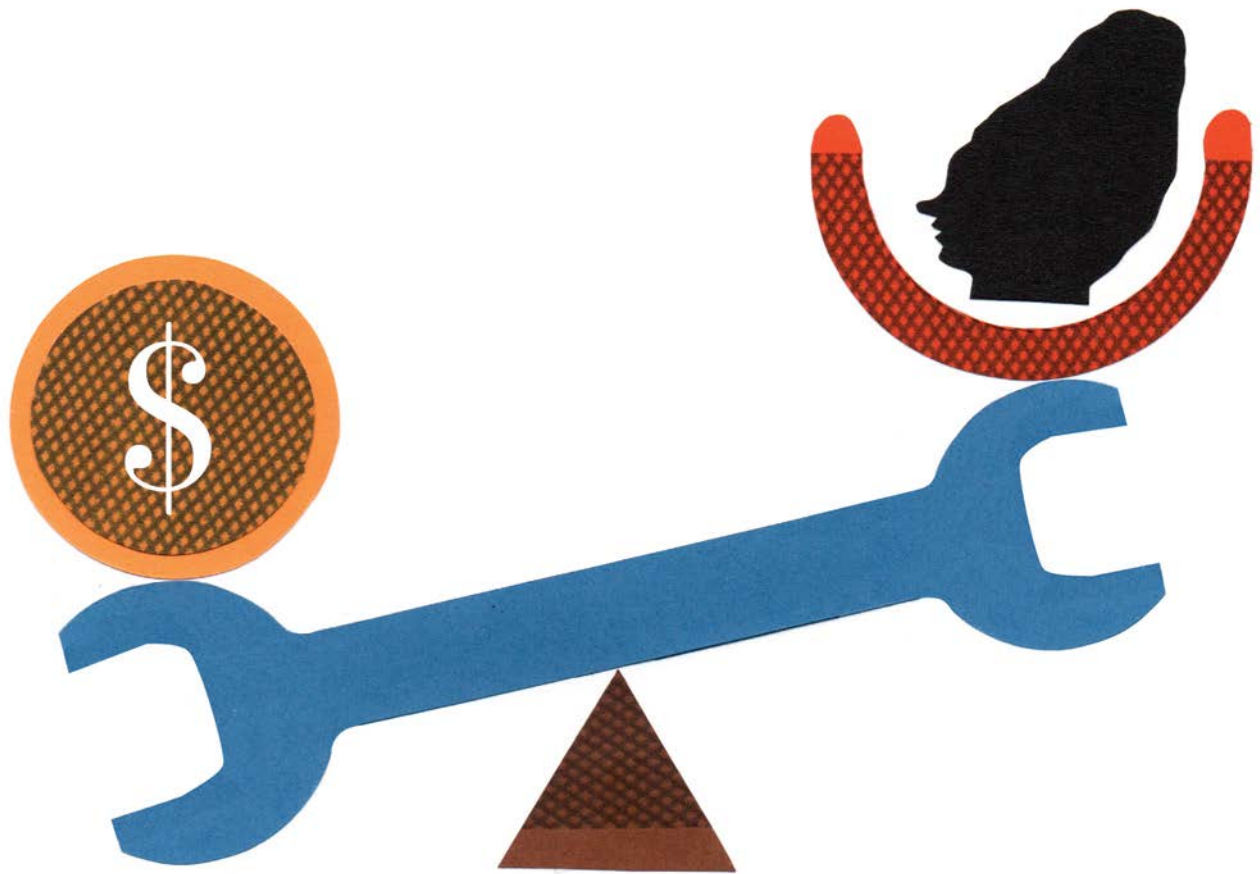
Me lo gané tu con ~~mi~~ trabajo

El libreto con el que la nueva derecha liberal capta voluntades entre las clases trabajadoras lleva implícita una peligrosa recodificación de las relaciones de explotación. Si no damos el debate en esos términos, la discusión está perdida de antemano.

Entramos en la tercera década del siglo XXI. Durante la década de 2010, América Latina pasó del auge a la crisis del progresismo. Sobrevivió con fórceps en Venezuela. Resucitó agónicamente en Argentina. Llegó tarde pero oportunamente a México. Se salvó heroicamente del peor final en Bolivia. Es una pregunta sin respuesta en las rebeliones de Chile. ¿Por qué parece que el ímpetu progresista, aun con todas sus viejas insuficiencias y a pesar de nuevos episodios de lucha social, no recupera oxígeno? El liberalismo de derecha se transformó aquí en una corriente de masas potente y activa. Nada menos que en Estados Unidos e Inglaterra supo alcanzar el gobierno, mientras que en Europa continental se consolida y crece. Más allá de si llegó o no a su techo electoral, su presencia tiñe el debate político y lo corre a la derecha del espectro. No es necesario que lleguen al gobierno para que ejerzan una influencia muy regresiva y aglutinen una masa crítica capaz de vetar procesos democratizadores y hasta legitimar golpes de Estado.

Independientemente de sus expresiones electorales, la sobrerrepresentación mediática de sus exponentes y la constancia de su trabajo en las redes han ido construyendo una base social cohesionada. No parece un fenómeno pasajero o de superficie. Eso no quiere decir que sea irreversible, ni mucho menos. Al contrario, aún hablamos de fenómenos que expresan minorías. Pero este *mix* original de liberalismo y fascismo es la tendencia que más creció en la última década y, por la radicalidad antipopular de sus enunciados y prácticas, representa el mayor peligro de nuestro tiempo.

El problema es un poco el de siempre: cómo y por qué las constelaciones de ideas que se elaboran y se militan desde estas minorías sociales y económicas pasaron a tener tanto sentido para franjas mucho más amplias de la población, cuáles son los núcleos de buen sentido que habilitan esa masificación y a partir de cuándo encontraron condiciones para pasar de la defensa al ataque.



Dentro de este gran problema con múltiples aristas, me interesa detenerme en los intentos del liberalismo de derecha por interpelar a sectores de trabajadores –lo que resultó ser clave allí donde llegaron al gobierno- y pensar de qué modo el progresismo y la izquierda pueden relanzar su vínculo con las clases trabajadoras. Identifico cuatro elementos del ciclo neoliberal de fines del siglo XX que sobrevivieron al interior del ciclo popular-progresista de principios del siglo XXI y que nos complicaron las cosas. En primer lugar, aunque se repusieron muchos sentidos de pertenencia colectivos, se mantuvo, en lo fundamental, la centralidad del *yo* individual como referencia subjetiva.

En segundo lugar, a pesar de los beneficios objetivos en términos de ingresos para buena parte de las y los trabajadores asalariados, se mantuvieron la degradación referencial del mundo del trabajo productivo en general y la invisibilización de las transferencias de valor entre grupos sociales y países. Es decir, se

mantuvo una cortina de humo alrededor de la explotación como tal.

En tercer lugar, se conservó la fragmentación vertical de las clases trabajadoras en tres grandes sectores: 1) el de los trabajadores organizados, formalizados y más productivos –en general ocupados en la industria o en enclaves extractivos estratégicos– con ingresos muy por encima de la media de los sectores populares, aunque en términos de generación y apropiación de valor, posiblemente más explotados que ningún otro sector de la clase obrera; 2) el sector de los trabajadores precarizados, dispersos y menos productivos, vinculados a los servicios, al comercio e incluso a la actividad por cuenta propia, centro de la *uberización*; y, por último, 3) el sector de los trabajadores mal llamados «excluidos», que si efectivamente se encuentran excluidos de niveles mínimos de producción y consumo, no lo están del capitalismo como tal, y sobreviven en los márgenes a fuerza de una mezcla de «economía popular», asistencia esta-

Este mix original de liberalismo y fascismo es la tendencia que más creció en la última década.

tal y actividades no siempre encuadradas en la ley.

Por último, en el plano más eminentemente económico, otros de los elementos que sobrevivieron del ciclo neoliberal fue el aplanamiento de la recaudación impositiva: salvo excepciones puntuales, se mantuvieron alícuotas impositivas similares para todos los segmentos de ingresos, aliviando proporcionalmente la carga fiscal a los ricos y haciéndola recaer en mayor proporción sobre los pobres.

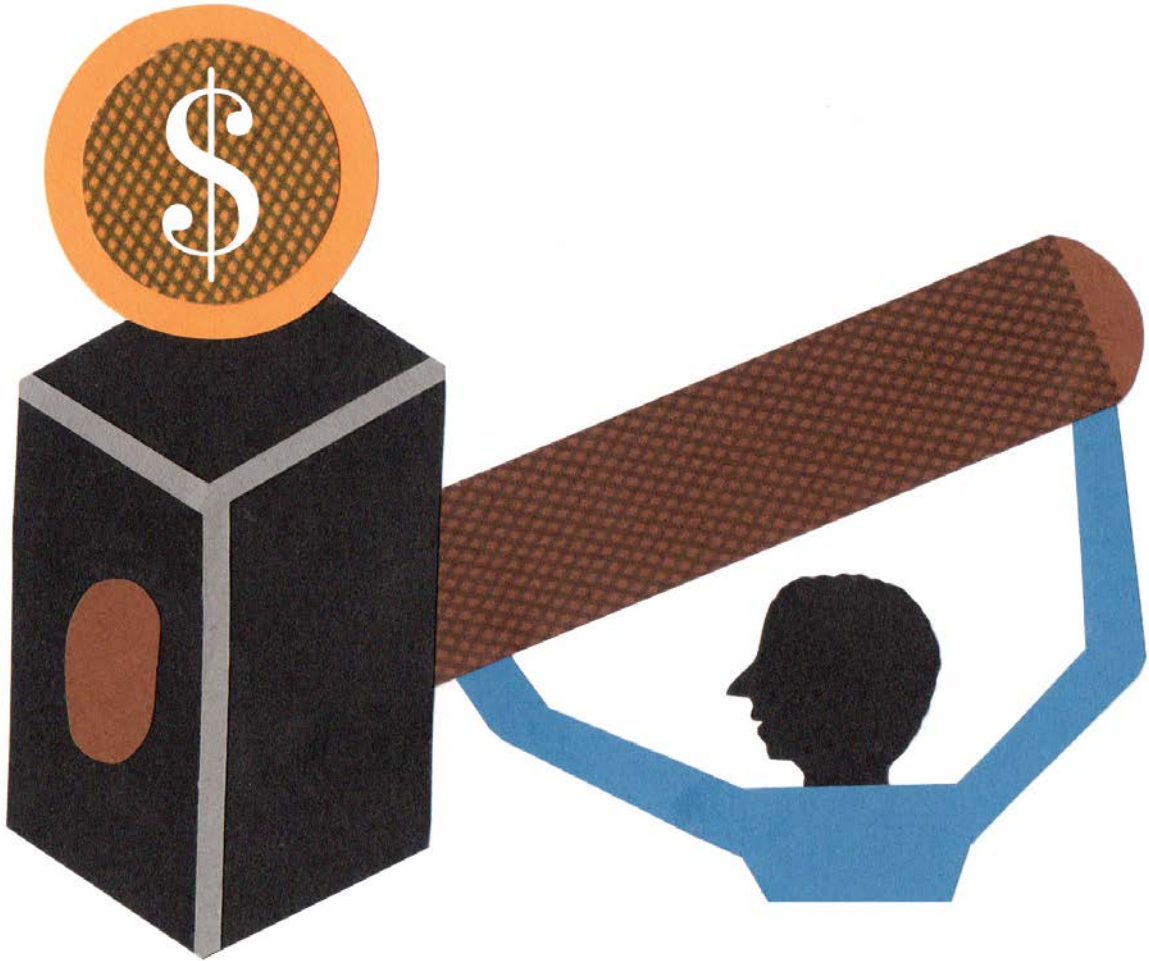
Mi hipótesis es que los tres sectores de trabajadores y trabajadoras mencionados fueron beneficiados por las políticas de los ciclos popular-progresistas. Sin embargo, los primeros dos sectores –sectores de trabajadores que llamaremos «incluidos»– no estuvieron siempre en el centro de su relato ni fueron los más beneficiados por las intervenciones estatales directas. Su mejoría se operó más bien por vías indirectas, vin-

culadas al aumento del empleo o a mejoras salariales que, si bien eran parte de políticas macroeconómicas progresistas, le reservaban un lugar en ese dinamismo al sector privado (sobre todo, para los trabajadores empleados por el empresariado más concentrado y con más espalda económica para abonar salarios más altos) o a las propias luchas independientes de las y los trabajadores por sus ingresos.

Por el contrario, el núcleo de la épica redistribucionista del progresismo consistió en atender al tercer sector de trabajadores subocupados, «los que menos tienen», a través de intervenciones directas que pusieron al Estado en el centro: impuestos aquí, subsidios allá. Dado lo perentorio de las necesidades de estos sectores tan postergados, y dado el material inflamable que representaban para el conjunto del sistema, no se trató de un mal criterio de prioridades. Pero tampoco representó nada muy lejano a las recomendaciones de Jeremy Rifkin en *El fin del trabajo*, una de las biblias neoliberales de los años 1990, en donde se alertaba sobre la necesidad de contener a este «tercer sector» de la economía a riesgo de que la estabilidad política del sistema volara por los aires.

En efecto, en buena parte de América Latina, esta asistencia llegó después del estallido social y no antes. Pero, en cualquier caso, esta política priorizó la contención de estos sectores excluidos forzosamente de la producción y del consumo por parte del neoliberalismo dependiente latinoamericano (variante del neoliberalismo que, contra toda recepción sin filtro de la literatura del Norte global, no posee ni la misma lógica, ni los mismos sujetos, ni los mismos resultados que el neoliberalismo en los países centrales, aun considerando todo lo que tienen de común como parte de una etapa total del capitalismo global).

El hecho es que estas redistribuciones de ingresos no se hicieron tanto en clave de *devolver* a las y los que producen una parte mayor de lo que generan con su trabajo, ni tuvieron a los mayores productores de valor en el centro. Es decir, no reconocieron conceptualmente al conjunto de las y los trabajadores como creadores del valor distribuido, tal y como en algún momento pregonó el propio *peronismo-de-perón* en Argentina, o como se estiló más en general en esa parte del siglo XX en la que dos grandes sistemas



sociales se disputaban en todos los planos a una clase obrera empoderada por el pleno empleo, por la lucha sindical y por la perspectiva revolucionaria.

Este flanco abierto en la disputa simbólica hizo que muchos de los trabajadores productivos asociaran las mejoras en el marco de la macroeconomía progresista no tanto al «milagro» de la intervención estatal, sino a su propio aporte al valor redistribuido. Y esto no como parte de una clase, en clave colectiva, sino como producto de su *yo* neoliberal, lo que dio como resultado el lema «me lo gané con mi trabajo».

Aquí entra en juego la cuestión de los impuestos aplanados del neoliberalismo y la distribución de los ingresos operada más entre distintos sectores de trabajadores que entre el capital y el trabajo. Porque, en la cuenta final, vía impuestos al consumo o aportes previsionales, los trabajadores productivos y/o

precarizados se transformaron más en dadores que en receptores de ingresos directos estatales, a diferencia de los grupos sociales más postergados. Esto es clave, porque el libreto de la alianza de clases que la nueva derecha liberal propone a los trabajadores hace eje en este punto.

Aunque suene paradójico, su discurso meritocrático tiende un puente implícito con ellos. Si prestamos atención, observamos muchos guiños de identificación con el trabajo, aunque naturalmente se trate de artificios irreales. En primer lugar, invierte los roles y *transforma al empresario en trabajador*. Es más: un trabajador mejor que el resto, porque «da trabajo». Y, en segundo lugar, *pone el eje en la producción de riqueza*. El trabajo y la importancia de producir rearmen una comunidad de intereses en el «sector privado» —compuesto de empleados y empleadores— frente a los que no producen y solo consumen: el Estado,

Recuperar una concepción sistémica de la pobreza y de la riqueza, de la producción y el consumo, puede ayudar a una nueva unidad política entre trabajadores incluidos y excluidos.

la clase política y los beneficiarios de planes sociales. Se trata de una recodificación de las relaciones de explotación. No las niega: dice que están en otra parte. Así, obviamente, las oculta. Pero mantiene su tensión y redirige las fuerzas del descontento contra los enemigos políticos de las propias élites.

Esto reinventa la justicia social en términos individualistas, invirtiendo los roles de productor y apropiador. En esta extraña ecuación, vendrían a ser los pobres y los políticos los que explotan a los trabajadores productivos. Y como existen bases suficientes para sostener esta intuición, si se consideran los circuitos reales de la distribución del ingreso, se mantienen condiciones para un «consenso antiparasitismo» contra los excluidos y la política, en el que asoman las formas más preocupantes de neofascismo. En otras palabras, el núcleo de buen sentido del liberalismo de derecha es la reacción contra el parasitismo, que se apoya sobre supuestos explicativos falsos, pero sobre bases materiales verdaderas. Nada de esto hubiera sido posible sin la previa invisibilización de las verdaderas relaciones de explotación económica al interior del «sector privado» y sin la centralidad referencial del *yo*.

De cara a un nuevo ciclo de transformaciones populares que recupere potencia histórica y capacidad crítica, considero prioritario que intentemos reordenar esta ecuación sobre la base económica de *cambiar los circuitos de distribución del ingreso heredados del neoliberalismo* (centrándolos en una recuperación de valor del trabajo respecto al capital, y dejando de redis-

tribuir meramente entre sectores populares) y sobre la base política y simbólica de recuperar el rol de las y los trabajadores como *creadores del valor que se distribuye*, entendiendo también a las mujeres, las diversidades, los afrodescendientes o los indígenas en ese carácter activo, no disociado de la producción y la reproducción social, sino como parte de las y los generadores de riqueza en condición subalterna.

Recuperar una concepción sistémica de la pobreza y de la riqueza, de la producción y el consumo, puede ayudar a una nueva unidad política entre trabajadores «incluidos» y «excluidos» y a una confrontación más clara contra el empresariado concentrado y la derecha liberal, que nos prevenga de sus cantos de cisne alrededor del valor del esfuerzo, el mérito y la justicia social individualista. El valor lo generamos colectivamente las y los trabajadores productivos. Somos requisito y condición de la producción y acumulación de riqueza. En ese carácter reclamamos una mayor parte o todo lo que hemos generado.

Ni más ni menos que cuando el feminismo plantea que las mujeres «mueven al mundo» y reclama todo el trabajo no remunerado que el capital no abona por las tareas productivas y reproductivas. Ellas se hacen fuertes en su rol de generadoras de riqueza y cuidado, saben que no le deben nada a nadie y generan anticuerpos sólidos ante la contraofensiva derechista. De hecho, la desafían todo el tiempo. ¿No hay allí una clave para articular una alianza distinta con las clases trabajadoras, recuperar la potencia y desarmar al neofascismo empresarial? ●

Excedente

TA-TA-TA GOOOOOOOOL

El populismo de izquierda cruzó las fronteras latinoamericanas para convertirse en la forma dominante que adoptó la contestación al neoliberalismo en Europa y EE.UU. Esta generalización a nivel internacional puso a la teoría de Ernesto Laclau en el centro de muchos debates.

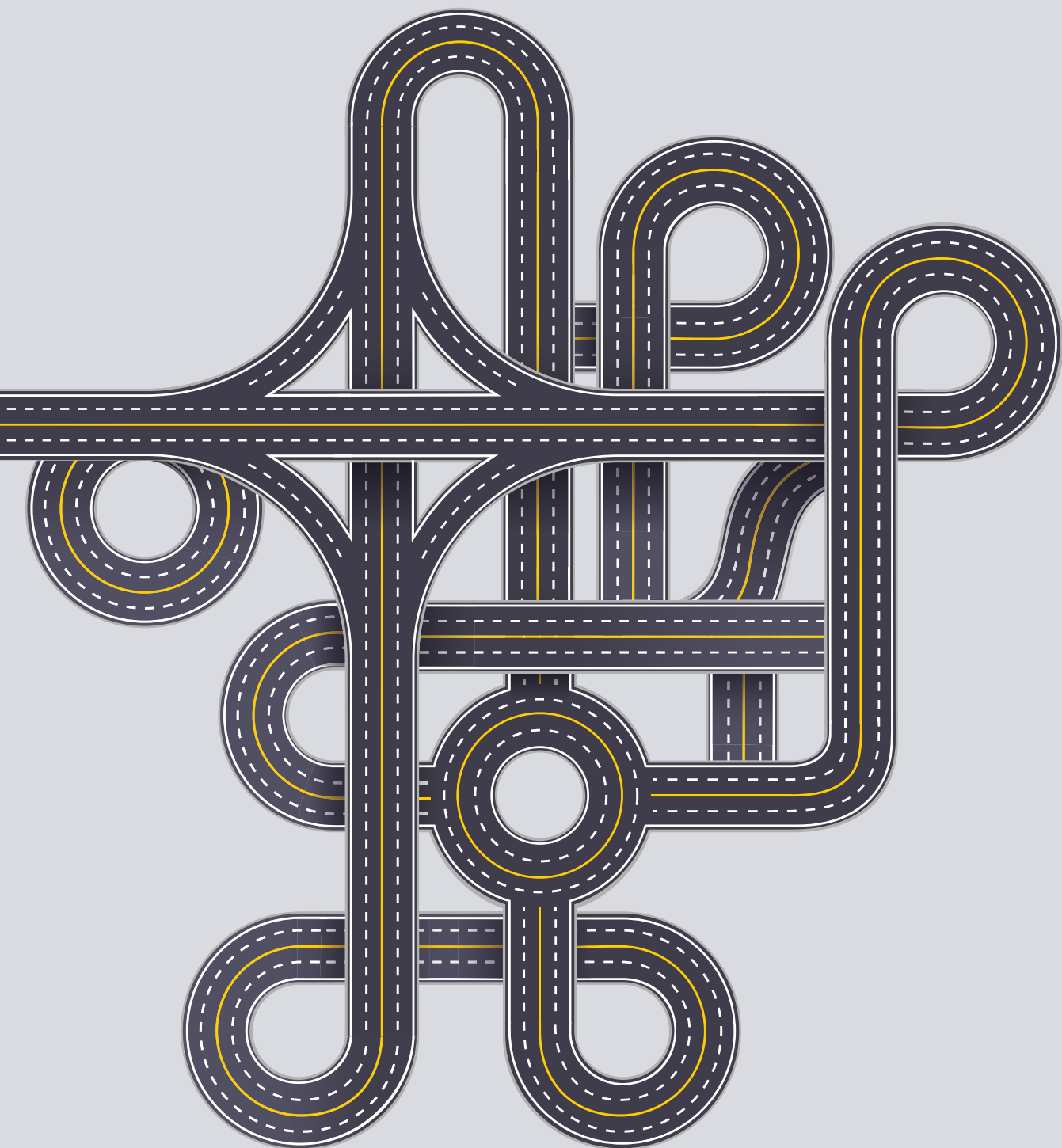
Ernesto Laclau: Los impases de una estrategia

Hay que comenzar destacando que Ernesto Laclau forma parte de un conjunto de raros pensadores contemporáneos que se esfuerzan por reexaminar la cuestión estratégica, preservando y redefiniendo el antagonismo social y político. La primera etapa de su reflexión apuntaba a renovar la idea socialista, para considerar en un segundo tiempo la cuestión de la emancipación y terminar con la defensa de un proyecto de democracia radical. A lo largo de este recorrido, Laclau reelaboró la noción de populismo, situándola en el centro de esta revisión estratégica que ha suscitado un gran interés en el curso de las últimas décadas.

Sin embargo, a pesar de esta trayectoria original y de su recepción, la obra de Laclau es testimonio de una paradoja típica del pensamiento crítico contemporáneo: durante los años 1970-1980, la multiplicación de investigaciones filosóficas innovadoras, caracterizadas por un estilo sofisticado, estuvo signada por una relativa homogeneidad en el plano político. En este sentido, debe decirse que el posestructuralismo y el posmarxismo defendidos por Laclau comparten el rechazo de los análisis generales, el abandono de las cuestiones referidas al trabajo y a la producción, la tesis de la desaparición de la clase obrera y de las confrontaciones de clase, como así también la valoración de las cuestiones ideológicas y culturales y la afirmación del rol de la contingencia. La filosofía del lenguaje y el análisis de los procedimientos discursivos han jugado un papel decisivo en esta mutación.

Erudita y ecléctica, la obra de Laclau se inscribe por completo en esta historia, aunque se esfuerza al mismo tiempo por recalibrar sus elecciones políticas frente a la dominación absoluta del neoliberalismo en un mundo marcado por la desaparición de la URSS. En estas condiciones, que son las de una crisis profunda tanto del capitalismo como de las alternativas al capitalismo, surge el interrogante acerca de si esta reflexión abre nuevas vías estratégicas para la izquierda o es más bien el último avatar de una cultura crítica que tiende a alejarse cada vez más de los problemas referidos a la conquista del poder del Estado y a la transformación social radical. Teniendo en cuenta el reciente interés que suscitan las tesis de Laclau frente a ciertas tentativas interesantes de renovación estratégica, tanto en América Latina como en Europa, esta cuestión amerita ser analizada.

Antes de abordarla, se impone una primera observación: en el contexto de crisis de la perspectiva revolucionaria, el diálogo continuo de Laclau con Marx y con el marxismo (aun cuando, luego de los años 1980, este debate se consideraba generalmente clausurado) da testimonio de su voluntad de rehabilitar una perspectiva de transformación política que, no obstante, jamás se presenta como la búsqueda de una alternativa al capitalismo. Partiendo de una reelaboración de la noción de socialismo, Laclau se embarca en una amplia crítica de esta noción, que renuncia desde un principio a la perspectiva comunista, pero que



mantiene la intención de desarrollar una política democrática popular fundada sobre una conflictividad social que es necesario orientar.

Su afirmación de la autonomía radical de la política se funda sobre la tesis de la naturaleza intrínsecamente amorfa y dispersa de la vida social, pero también sobre un enfoque fundamentalmente filosófico, destinado a conectar esta teoría social con una estrategia política: «no concebimos a lo político como una superestructura sino que le atribuimos el *status* de una *ontología de lo social*».¹

Rehusándose a criticar las instituciones liberales en nombre de la defensa del pluralismo político y de la crítica del totalitarismo, apuntalando directamente su estrategia con una ontología tan ambiciosa como perentoria, situada a gran distancia de las ciencias sociales, Laclau reivindica un cierto tipo de ruptura con el orden dominante que se apoya sobre movilizaciones colectivas ajenas a la contradicción entre trabajo y capital. La radicalidad que defiende se expresa en una propuesta de naturaleza principalmente metodológica, que desemboca en una reflexión que podría calificarse de «metaestratégica», disociada de cualquier perspectiva de transformación social y, *a fortiori*, de cualquier intención anticapitalista.

Laclau no deja de ser uno de los teóricos que mejor sintoniza con las tentativas contemporáneas de reconstrucción de las fuerzas de izquierda que apuntan a la conquista de la hegemonía, aun si, a fin de cuentas, la política sigue siendo para él un enigma. Y es sin duda ese carácter enigmático, esa oscilación constante entre la reivindicación del radicalismo y la apología prudente de las instituciones, entre la innovación filosófica y la vía electoral clásica, lo que explica el éxito del que gozaron las tesis de Laclau entre un electorado que buscaba una renovación crítica y dirigentes políticos que estaban a la espera de una renovación doctrinal, luego de haber tomado nota del debilitamiento de las alternativas al capitalismo y heredado una desconfianza creciente hacia las formaciones políticas tradicionales.

Para aclarar la dimensión propiamente estratégica de esta original intervención teórica, es necesario recordar que la

reflexión política de Laclau nació en el corazón de esa historia política singular que es la de la Argentina de los años 1960. Luego del golpe de Estado de 1966, su trayectoria se volvió esencialmente universitaria, sin renunciar por ello a la cultura estratégica que heredó de su formación militante previa, realizada en el seno de una corriente de extrema izquierda argentina que optó por apoyar a Juan Domingo Perón. En una entrevista que brindó a la *New Left Review* en 1988, Laclau dijo que su punto de vista político casi no había cambiado desde que había asumido su compromiso inicial. Y, en efecto, estará siempre preocupado por la construcción de una alianza amplia, que exceda las fronteras de clase tradicionales, para tomar impulso hasta ser capaz de conquistar el Estado.

De esta forma, la originalidad de Laclau radica en su compromiso militante, que hunde sus raíces en la vida política argentina, pero también en su capacidad de desplazar esa elección política hacia el terreno teórico para universalizarla, elaborando en este movimiento una perspectiva de emancipación inédita. La clave de una estrategia de este tipo está en la capacidad de ajustarse de manera pragmática a las circunstancias sociales tal como están dadas y, por lo tanto, tendencialmente, a las ideas populares que se suponen dominantes. Se trata de ceñir los contornos de una coyuntura, esforzándose por estructurar un pueblo más allá de las clases y de los discursos de clase, tomando como punto de partida sus *demandas sociales* específicas. Esta construcción exige la selección juiciosa de una sola reivindicación en función de su capacidad para cristalizar todas las otras a su alrededor.

Desde fines de los años 1970, esta elección constructivista conduce a Laclau a considerar al marxismo a la vez como una teoría ampliamente obsoleta y como un reservorio de nociones que siguen siendo indispensables, siempre a condición de separarlas de su supuesto esencialismo, para elaborar un nuevo proyecto político más consecuente y más modesto que el comunismo. Para marcar mejor sus divergencias, Laclau no duda a la hora de acusar al marxismo de instrumentalizar la democracia como un simple medio para establecer lo que sería su fin último, la dictadura del proletariado.² Al sus-

1. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Laclau reivindica un cierto tipo de ruptura con el orden dominante que se apoya sobre movilizaciones colectivas ajenas a la contradicción entre trabajo y capital.

tituir lo que para el marxismo es una simple forma de transición por su fin verdadero, el comunismo, y jugando con las resonancias siniestras que adquirió el término «dictadura» durante el siglo XX, Laclau sabe que puede contar tanto con el desconocimiento general que pesa sobre Marx y sobre el marxismo, como con los fracasos del socialismo estatizado.

Luego, en lugar de considerar que la unidad de todas las personas oprimidas y dominadas se concretará gracias al capitalismo en sí mismo, a través de los intereses comunes que sus luchas vuelven conscientes, la estrategia revolucionaria debe servir para fabricar un subterfugio eficaz, un mito unificador, todo lo cual está muy cerca de las concepciones desarrolladas en su momento por Georges Sorel (1842-1922), que le otorgan un rol decisivo a la elaboración ingeniosa de una «interpelación popular-democrática» que «no solo no tiene un contenido de clase preciso, sino que constituye el campo por excelencia de la lucha ideológica de clases».³ En este sentido, en virtud de su antiestatismo y de su antijacobinismo —y sin que se juzguen como problemáticas sus elecciones nacionalistas y antisemitas—, Sorel sería el verdadero precursor del «giro topológico» del marxismo.⁴

Este giro lingüístico y retórico del socialismo tiene como corolario la afirmación de una división fundamental de la totalidad social, una verdadera dispersión de sus componentes, que autoriza intervenciones estratégicas mucho más osadas en la medida en

que presupone una realidad social fundamentalmente maleable y fragmentada, aunque permanece al mismo tiempo ciega por definición a las lógicas discursivas que la estructuran desde arriba y desde afuera. De nuevo en este caso, la tesis no se valida más que por la denuncia de la posición inversa, simplificada y atribuida a Marx: un determinismo rígido, que surgiría de una filosofía de la historia jamás superada.

En cuanto a las clases, se dice que estas no tienen existencia más que a través de sus luchas, tesis fundamentalmente marxiana, con la salvedad de que estas luchas no tienen, para Laclau, ningún vínculo con intereses económicos y sociales concretos, ni mucho menos con un proyecto emancipador de alcance universal. Esta extraña «democracia radical» se presenta entonces como la articulación contingente y sobre todo voluntarista de reivindicaciones heterogéneas. Producto de una decisión política independiente de cualquier condición económica o social concreta, consiste, finalmente —al menos para el último Laclau—, en la preservación de un marco pluralista que renuncia a la aspiración de superar los antagonismos, sean estos políticos o sociales.

Se presenta como el funcionamiento idealizado de las instituciones existentes y del capitalismo, que conduce sobre todo a una ética democrática y no a una política concreta: «una sociedad es democrática, no en la medida en que ella postule la validez de un cierto tipo de organización social, y de ciertos valores opuestos a otros, sino en la medida en que se niega a dar a su propia organización y a sus propios valores el estatus de *fundamentum inconcussum*».⁵

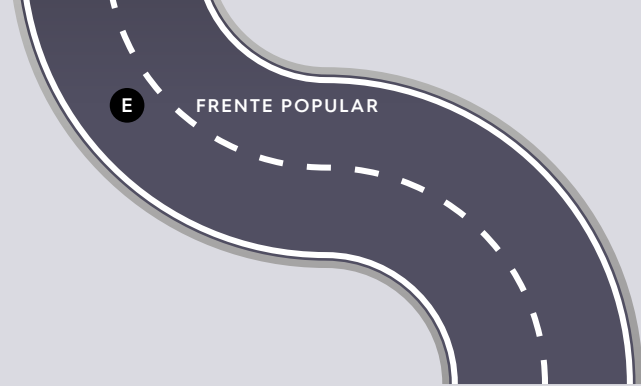
Bajo su aspecto contestatario, esta alternativa a la alternativa propone simplemente tomar la democracia liberal al pie de la letra: la apuesta de Laclau es rehabilitar la intervención en el campo político institucional tal como es, tomando nota del creciente rechazo popular que se le opone, pero reafirmando, al mismo tiempo, como un horizonte insuperable. El costado filológico de esta estrategia juega aquí un rol crucial:

2. Ernesto Laclau, *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo*, S. XXI, México, 1980, p. 121-109.

3. *Ibid.*, p. 123.

4. Ernesto Laclau, *Los fundamentos retóricos de la sociedad*, Buenos Aires, 2014, p. 90.

5. Ernesto Laclau, *Nuevas reflexiones*, op. cit., pp. 196-197.



la idea de que el capitalismo no es finalmente más que una construcción conceptual, una tesis cuya pertinencia es debatible, aparece tempranamente en la obra de Laclau como una forma de oponerse a Marx, que según él permanece «claramente dentro del campo idealista, es decir, dentro de la afirmación final de la racionalidad de lo real».⁶

Una crítica de este tipo implica la descalificación de cualquier análisis causal, la cual es redoblada por la afirmación del reino absoluto de la contingencia en la historia. Es el precio que se paga por promover una concepción estratégica que se funda exclusivamente sobre la potencia discursiva: dislocar la totalidad social y convertir en negaciones externas las contradicciones internas afirmadas por el marxismo, permite elaborar propuestas radicalmente ajenas a las relaciones de producción existentes, vinculándolas al mismo tiempo con reivindicaciones sociales y culturales que, a pesar de ser fundamentalmente heterogéneas, son bien reales.

Esta exterioridad del conflicto en relación con la estructura que le provee su marco funda la afirmación del carácter contingente y autónomo de la construcción hegemónica y, sobre todo, transfiere la dinámica transformadora de su antiguo sujeto, la clase obrera, a un nuevo actor, el líder o la dirigencia. Este líder, cuya figura emerge en las obras tardías, es el analista virtuoso de las circunstancias y el amo de las consignas, el árbitro de las revueltas, pero también —y sobre todo— un príncipe maquiaveliano sin parangón. Su misión es interpelar y estructurar a un «pueblo» maleable, a unas masas subalternas, pasivas y desprovistas de conciencia de sí mismas, forjadas completamente desde el exterior.

Por lo tanto, es a condición de abandonar radicalmente el mundo de la producción y sus lógicas como Laclau acomete la tarea de repensar la estrategia.

Sin embargo, debe decirse que en lugar de afirmar lisa y llanamente la desaparición de la clase obrera y, con ella, la desaparición de cualquier sujeto de la transformación social, Laclau propone situarla al interior de un conjunto más vasto de grupos sociales, estructurados de forma distinta a las tradicionales relaciones de clase ancladas en las relaciones de explotación: se trata de concebir «agentes», que se constituyen «fuera de las relaciones de producción».⁷ Este concepto de agente, tomado de la teoría económica neoclásica, también implica una redefinición radical de la formación social.

A los ojos de Laclau, la democracia está, de ahora en más, ligada principalmente al reconocimiento del pluralismo y de las diferencias. Esta afirmación es decisiva. El *pluralismo* no designa solamente la diversidad de opciones políticas, sino también y sobre todo las *diferencias* sociales, es decir, las desigualdades, en el marco de unas relaciones de clase que perseveran y cuya desaparición no es factible: es sobre este terreno donde el rechazo del clivaje entre derecha e izquierda se presenta como la consecuencia estratégica de una matriz antitotalitaria, que puede vislumbrarse detrás de este abandono de toda reivindicación de igualdad y de justicia social.

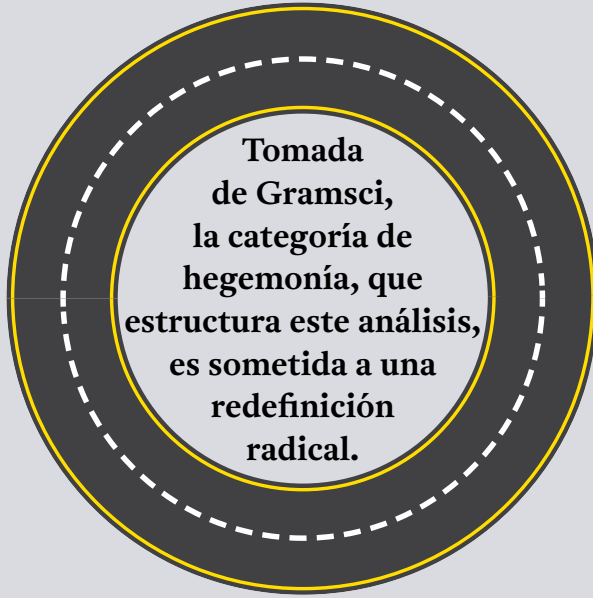
De esta forma, si bien el último Laclau revaloriza la democracia, su definición sigue siendo altamente problemática. Tomada de Gramsci, la categoría de hegemonía, que estructura este análisis, también es sometida a una redefinición radical. Laclau la convierte en el nombre de una construcción política sin fundamento, recortada de cualquier alternativa de alcance general que pudiese arraigar en las contradicciones de la formación histórica capitalista. Los conflictos sociales se originan en la decepción de los consumidores y no en el enfado de los trabajadores. La dispersión constitutiva de los antagonismos sociales permite unificarlos y conectarlos simplemente desde afuera a partir del modelo estilístico de la metonimia, que garantiza «que una fuerza social *particular* asuma la representación de una *totalidad* que es radicalmente inconmensurable con ella».⁸

Frente a un mundo social fundamentalmente ciego a

6. *Ibíd.*, p. 122.

7. *Ibíd.*, p. 141.

8. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, *Hegemonía y estrategia socialista*, op. cit., p. 10.



sí mismo, se trata entonces de remodelarlo desde arriba, de dirigirlo sin jamás informarle acerca de la estrategia que se le está aplicando y, por supuesto, sin jamás confiar en él. La construcción de «cadenas de equivalencias cada vez más extensas»⁹ entre «demandas sociales» heterogéneas permite que se constituya un pueblo a partir de la nada: al final de este recorrido, la hipótesis populista está llamada a reemplazar los términos «socialismo» y «emancipación», preferidos antes pero ahora demasiado sustanciales y marcados históricamente.

El término populismo designa esta «cristalización de las diferentes demandas en torno a un común denominador».¹⁰ Implica la «división dicotómica de la sociedad en dos campos», uno de los cuales «se presenta a sí mismo como parte que reclama ser el todo»:¹¹ en virtud de esta definición estrictamente formal, separada de todo contenido definido, las miras políticas definidas por Laclau en sus últimas obras se hacen cada vez más evanescentes.

No obstante, en algunos pasajes, que son más bien raros, Laclau propone algunas pistas programáticas que impactan por su ambivalencia. Es así que entrevé el advenimiento de una «gestión social» sobre los escombros de toda «perspectiva objetivista».¹² Oponiéndose a cualquier forma de planificación económica, propone también combinar propiedad pública

y propiedad privada, aun cuando este es justamente uno de los lugares comunes de las políticas neoliberales.¹³ En cuanto a la afirmación de la posibilidad de democratización inherente a las instituciones existentes, debe decirse que esta sustituye a cualquier análisis preciso de las funciones y de las mutaciones del Estado capitalista contemporáneo.

De esta forma, la política según Laclau se encuentra vaciada de su capacidad de ser elaborada como una alternativa global. Esta concepción retórica de la política representativa, que la perfecciona mucho más de lo que la supera, se acerca peligrosamente a los procedimientos de una lógica de marketing electoral pura, que propone una oferta adecuada a las «demandas» que surgen de un mercado específico, pero que es incapaz de hacerse con la estructura política que protege y regula marginalmente su propio funcionamiento libre, de acuerdo con la definición neoliberal del rol del Estado.

Si esta estrategia logró inscribirse con éxito en un contexto de crisis generalizada de la política, no tardó en fracasar a su vez, revelando su impotencia tanto para comprenderla como para superarla. Si puede suponerse que el eco que encontró en la izquierda fue sobre todo el resultado de su franca revalorización del antagonismo, al que sitúa nuevamente en el corazón de la política, no es menos cierto que este éxito sigue siendo paradójico y está condenado a ser efímero, en la medida en que Laclau no dice nada del capitalismo contemporáneo, de su crisis, de la financierización de la economía, de la descomposición de la democracia, de las desigualdades y el autoritarismo crecientes, de la destrucción del medioambiente, etc.

Dadas sus distintas instrumentalizaciones, ¿no han quedado un poco obsoletas las alternativas de este tipo, que reducen el discurso teórico a una posición puramente ornamental, para ponerlo al servicio de organizaciones centradas exclusivamente en la disputa electoral? Si estos usos están lejos de las ambiciones iniciales de Laclau, lo están todavía más de los desafíos urgentes que impone capitalismo del desastre actual. ●

9. Ernesto Laclau, *Nuevas reflexiones*, op. cit., p. 239.

10. Ernesto Laclau, *La razón populista*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 108.

11. *Ibid.*, p. 110.

12. Ernesto Laclau, *Nuevas reflexiones*, op. cit., p. 71.

13. *Ibid.*, p. 248.

La era del pangolín

El populismo puede no ser la vía regia de la política, pero mantendrá vigencia en la medida en que la «protección» siga siendo el lema de la época del COVID. Por su parte, la izquierda, si no quiere cederle el terreno a la derecha populista, debe desarrollar un programa persuasivo a favor de la protección social.

Con la salida de Trump de la Casa Blanca, el reflujó de otros liderazgos populistas de derecha y la derrota electoral de distintos proyectos populistas de izquierda en Europa y en Estados Unidos, la idea de que «el populismo se terminó» parece imponerse en el mundo periodístico y en los sectores políticos centristas de Occidente. En algunos sectores de la centroizquierda, estimulados por la victoria de Joe Biden y por la elección de Keir Starmer como líder del Partido Laborista en el Reino Unido, se empieza a forjar una narrativa «pospopulista».

De acuerdo con esta perspectiva, las distintas insurgencias de la izquierda, las fuerzas de derecha y los movimientos de protesta que llegaron a ser vistos, durante los años 2010, como la expresión de un «momento populista» común, habrían llegado a su fin. El populismo –independientemente de lo que haya significado para distintas personas– habría sido solo una fugaz anomalía. Ahora la política podría retornar al neoliberalismo y a una supuesta idoneidad característica de los años 1990 y 2000. Sin embargo, las causas subyacentes del momento populista todavía están ahí: la desigualdad creciente, la financierización de la economía y la angustia existencial que genera un mundo signado por todo tipo de amenazas. Lo

más probable es que la crisis del COVID-19 termine haciendo que estos temas se vuelvan todavía más apremiantes y que el descontento social se vuelva más visible.

Aun si el «populismo» –en el sentido general de una política que convoca a que la gente común se oponga a las élites neoliberales– sigue siendo una de las tendencias principales de la política contemporánea, es necesario reconocer los límites de la teoría que lo respalda. El problema principal es el formalismo que ha dominado los debates sobre este fenómeno. Para Ernesto Laclau, el populismo es una lógica discursiva basada en interpelaciones popular-democráticas. Esta teoría permite explicar fenómenos políticos muy distintos que comparten una lógica discursiva común. Pero nos mantiene en la perplejidad a la hora de desarrollar una estrategia coherente, de identificar el bloque social o la alianza de clases a la que deberíamos convocar y de definir el tipo de políticas concretas o de reivindicaciones que podríamos forjar para cimentar este bloque.

Es tiempo de ir más allá de la discusión genérica sobre el populismo, que lo concibe como una forma política maleable, para prestar atención al contenido



de la política populista, a las demandas concretas que emergieron de la contienda prolongada entre el neoliberalismo y el populismo, y al tipo de imaginario político que los sostiene. Entre estas demandas, la cuestión de la protección en sus múltiples declinaciones políticas –tanto en las progresivas como en las reaccionarias– es fundamental. En sociedades temerosas, impregnadas por la angustia del colapso social y medioambiental, la cuestión de la protección es el suelo sobre el cual se desarrollará en el futuro el populismo antineoliberal y sobre el cual darán batalla sus distintas ramas para determinar cuál es la que realmente representa al pueblo.

El populismo y la política de la protección

En una época en la que la gente se siente vulnerable frente a toda una serie de peligros que parecen atentar contra sus formas de vida, la cuestión de la protección se plantea como uno de los ejes fundamentales del discurso político. La emergencia del COVID-19 ha estado signada por la prominencia del imaginario de la protección: los equipos de protección personal, las burbujas de protección y toda una serie de protecciones frente al contagio ocupan el centro de la escena.

Además, tal como sugirió Chantal Mouffe, la cuestión de la protección se está volviendo cada vez más relevante debido al cambio climático y a la amenaza existencial que este representa para el hábitat humano. La adaptación climática requerirá todo tipo de estructuras de protección: desde dunas de defensa en las costas hasta el reforzamiento de los edificios, pasando por el intento de disminuir el impacto de la pérdida de la biodiversidad. La crisis económica que se profundiza también está planteando la necesidad de enmendar las estructuras de protección social para contener la marea de pobreza y desesperación. En la actualidad, para citar un famoso meme de Toy Story, hay «protección por doquier».

En un sentido, la política siempre consistió en proteger y garantizar las condiciones mínimas de supervivencia de la sociedad. A fin de cuentas, las autoridades de la *República* de Platón son denominadas «guardianes» y su función consiste en ser los «protectores de la ciudad». De manera similar, Thomas Hobbes creía que la protección era lo que el gobernante le ofrecía a sus súbditos a cambio de su obediencia.

Si este término suena extraño en la actualidad, es porque el neoliberalismo excluyó cualquier elemento discursivo que hiciera referencia a la protección, concebida como una forma política colectivista, paternalista y como un obstáculo a la apertura y al espíritu empresarial. Sin embargo, en tiempos de neoliberalismo tardío y estancamiento prolongado, cuando todas las expectativas de mejoría se debilitan frente al miedo al *déclassement* social, los mecanismos de protección básicos que garantizan la reproducción social y la continuidad de la existencia de la sociedad vuelven a ser prioritarios.

Enfrentamos una generalización del principio de protección en el marco de lo que podría definirse como la *era del pangolín*, denominación que remite al instinto defensivo del único mamífero cubierto de escamas que, a su vez, ha sido acusado de ser el origen zoonótico del COVID-19.

La demanda actual de protección emana de la sensación de exposición engendrada por la globalización neoliberal. La absorción de las economías nacionales por el mercado global ha generado un sentimiento de exposición a las fuerzas invisibles del capital, lo cual

dio lugar a una reacción de retroalimentación negativa. El clima político contemporáneo recuerda al instinto de autoprotección de la sociedad que describió Karl Polanyi al comentar la crisis de las sociedades occidentales durante los años 1930. Desde el comercio hasta la salud, desde el medioambiente hasta la cultura, desde los derechos de los trabajadores y las trabajadoras hasta la democracia, muchos de los temas fundamentales de la actualidad pueden ser comprendidos si se los mira a través del lente de la protección. Enfrentando la rapacidad del capitalismo extractivo, cuyo ejemplo más sobresaliente es la acción de las empresas digitales, los ciudadanos y las ciudadanas exigen que se protejan sus formas de vida, sus comunidades y, en última instancia, sus medios de subsistencia.

La manifestación más visible de esta política de la protección se ha observado hasta ahora en la derecha populista. Además de las demandas de protección de la identidad frente a las personas migrantes y a las minorías, la derecha populista ha adoptado una forma de proteccionismo comercial, observable en las guerras comerciales que Trump desplegó no solo contra China, sino también contra México, Canadá y la Unión Europea. Se trata simplemente del signo más visible de un desplazamiento profundo de las representaciones populares. De hecho, el manifiesto electoral de Joe Biden también contiene medidas típicamente proteccionistas, como la promesa de dirigir la inversión estatal hacia la industria nacional y castigar a las empresas que deslocalizan sus centros de trabajo.

Incluso la Unión Europea, que hasta hace poco se presentaba como la partidaria más entusiasta de la apertura comercial, está cambiando su actitud, tal como ejemplifica la consigna de Emmanuel Macron: «une Europe qui protège» [una Europa que protege]. El culto del mercado global y de las economías orientadas hacia la exportación está cediendo frente a un imaginario diferente, en el cual gana preeminencia la cuestión de la seguridad, estrechamente vinculada con la protección.

La política de la protección también se manifiesta en las demandas que apuntan a proteger la soberanía nacional. Mientras que en Europa y en Estados Unidos este discurso es propiedad de la derecha populista, en América Latina ha estado frecuentemente asociado a la izquierda. Dada la larga historia del imperialismo estadounidense en América Latina, la reivindicación de



La batalla por la hegemonía política en un futuro posneoliberal se juega alrededor de la cuestión de la protección.



«proteger la soberanía nacional» ha sido un mantra común repetido por dirigentes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva, que a su vez se inspiran en la larga lucha de Cuba y de Fidel Castro contra EE. UU. En una época en la cual las empresas transnacionales están ávidas de recursos minerales que abundan en América Latina, como el litio en Bolivia, la soberanía sigue siendo una cuestión crucial para una política democrática.

De manera similar, al afirmar la preeminencia de las comunidades locales sobre el imperativo de las ganancias del mercado global, los distintos movimientos populistas dan batalla frente al colonialismo digital de las empresas como Amazon, que devastan las economías locales para apropiarse del valor y de las ganancias. Por lo tanto, es la protección, y no la apertura, la que se ha convertido en la idea principal que condensa el espíritu de estos tiempos turbulentos.

¿Quién me protegerá?

La batalla por la hegemonía política en este futuro posneoliberal y el desarrollo del populismo antineoliberal se juegan, entonces, alrededor de la cuestión de la protección. Las distintas políticas de protección —o, podríamos decir, los distintos «proteccionismos»— dominan la escena de la política contemporánea, mientras distintas fuerzas intentan dar respuesta a una demanda que surge de la población. Desde el declarado proteccionismo comercial de Trump hasta los nuevos proteccionismos ecosocialistas que demandan que algunas actividades económicas sean relocalizadas bajo control comunitario, los conflictos políticos contemporáneos se plantean, en general, como «conflictos de protección». La cuestión es cuál de estas políticas de protección prevalecerá.

Hay quienes piensan, sobre todo en el campo de la *intelligentsia* progresista europea, que la demanda de protección es irremediamente autoritaria y conservadora. Sin embargo, esta sospecha ignora el hecho de que la demanda surge de una experiencia real de fragilidad y exposición engendrada por la globalización neoliberal. La izquierda debe abandonar este esnobismo obtuso y desarrollar un discurso progresivo sobre la protección, centrándose en algunas de sus formas, como la protección social y medioambiental, que son fundamentales para el desarrollo de una agenda ecosocialista. Con este objetivo, debe desarrollar una alternativa al «proteccionismo de las clases propietarias», que apunta meramente a la protección del sistema de relaciones de propiedad existente. Por el contrario, la izquierda debe enfocarse en el «proteccionismo social», que apunta a promover las estructuras básicas de protección de las cuales dependen todas las personas para desarrollar su vida común: servicios públicos, mecanismos de seguridad social, protección del medioambiente y protección de los derechos de las minorías.

La crisis del coronavirus nos ha hecho conscientes de cuánto dependemos de estas instituciones de protección y de lo estúpido que fue deshacernos de ellas en nombre de un individualismo posesivo, un espíritu empresarial elitista y una apertura comercial egoísta. Es tiempo de sacar las conclusiones de esta lección y hacer de la protección una demanda clave en la lucha del pueblo contra las élites neoliberales. A fin de cuentas, la inseguridad absoluta de la que saca partido la derecha nacionalpopulista solo podrá ser derrotada reforzando la protección social y garantizando que las personas se sientan seguras. Si lo hacen, las tendencias socialistas que hayan sabido extraer las lecciones principales del momento populista serán capaces de construir sociedades que puedan mirar con confianza al futuro y a los otros países. ●

«He salvado a mi país. He vengado a América»

¿Le habrá parecido irónico el hecho de haberse convertido en un preso asesinado por el mismo gobierno que gestionaba su país cuando nació? Si nuestro país algún día tuviese una oportunidad y se le permitiera ser una nación como cualquier otra, ninguno de nosotros viviría ni moriría aquí.

Edwidge Danticat

A partir del asesinato de su tío en Krome, prisión de inmigrantes de la ciudad de Miami, la escritora haitiana Edwidge Danticat reflexiona, no tanto sobre el destino de su familia, marcada por el desplazamiento y por la imposibilidad de vivir en el lugar en el que nació, sino sobre la historia de su país. La trayectoria de los Danticat en su lucha contra la negación de la autonomía, la dignidad y la libertad es el devenir mismo de Haití desde que, en 1804, luego de la Revolución, declaró su soberanía frente a las demás naciones. Una soberanía que sería insistentemente negada por los poderes globales a partir de aquel momento.

La lucha de los jacobinos negros, según el oportuno nombre que les dio C. L. R. James en su clásico de 1938, fue durante mucho tiempo silenciada por una historiografía oficial fundada en el etnocentrismo y en una lectura blanca de la modernidad. Pero el silencio no alcanzó para impedir la reapropiación libertaria de la revuelta de Santo Domingo por parte de infinitas manos insurgentes, de forma similar a lo que sucedió con el Renacimiento de Harlem, con el movimiento de la negritud y con intelectuales de la

Traicionada, negada y olvidada, la isla de Haití una vez sirvió de modelo para los proyectos más progresivos del continente. Si de lo que se trata es de ampliar los horizontes emancipatorios de América Latina, debemos recuperar su historia.

talla de Kwame Nkrumah, Martin Luther King, Alejo Carpentier, Aimé Césaire y Édouard Glissant. Haití y su revolución son parte de la cultura universal de las luchas de los pueblos de color y de los pueblos colonizados de todo el mundo, e inspiraron un imaginario de emancipación y liberación. A su vez, como narra Edwidge Danticat, la historia de Haití también nos empuja a pensar una imposibilidad constitutiva, una negación fundante de los lazos que unen al capitalismo, al racismo y al imperialismo. El mundo, para ser y continuar siendo como es, debe negar incesantemente la declaración de soberanía realizada por los haitianos en 1804.

Negar 1804. Negar otros 1804. En el enredo de esa negación constitutiva y universal, ¿qué papel desempeñó el resto de América Latina? ¿Qué dice Haití, tan apagado y silenciado, respecto de nuestra historia común? Tres actos, en tres siglos distintos, pueden ayudar a responder estas preguntas.

Primer acto: la revolución traicionada

Poco más de una década después del fin de la Revolución haitiana, en 1815, venezolanos y neogranadinos desembarcaron al sur de Haití. Venían de Jamaica, luego de la derrota del ejército español y el rechazo del apoyo británico a la causa de la independencia. Durante casi dos años, alrededor de dos mil patriotas vivieron en la isla. Entre ellos, aquel que sería el protagonista de los acontecimientos de la liberación ame-



ricana durante los años siguientes, Simón Bolívar. En aquel momento, Haití no solo era un territorio seguro y no alineado al imperialismo. La nueva República, liderada por Alexandre Pétion, se presentaba como un lugar favorable para imaginar la organización y el ser social de la futura América liberada.

Y así fue. Bolívar llevaría consigo toda la vida la experiencia y los aprendizajes de Haití. Para él, Petión fue el líder político más audaz —por encima de George Washington— a la hora de diagnosticar, organizar y gobernar un país recién independizado. En la isla, Bolívar fue testigo de la publicación de la Constitución de 1816, que sirvió de inspiración directa y explícita para su proyecto más ambicioso, la propuesta constitucional para Bolivia de 1826. Fue de Haití, y no de Bonaparte, de donde extrajo su intrincada concepción del poder ejecutivo, con el modelo de un presidente vitalicio, para intentar articular un republicanismo anticrisis. Haití no era para Bolívar solo un aliado y una inspiración; era un modelo a seguir.

Las políticas de asilo progresistas, la concesión de ciudadanía y nacionalidad para los pueblos colonizados, la destinación de recursos para albergar refugiados y financiar expediciones de liberación, la prohibición de la adquisición de tierras en el caso de los extranjeros, la posición diplomática antiesclavista y antimperialista: estas características, dignas de una república moderna avanzada, eran puestas en práctica a la hora de relacionarse con los demás pueblos latinoamericanos. Ni bien supo de la caída de Cartagena en manos de los españoles, Petión ordenó la suspensión de las exportaciones a esa ciudad. Además, en las dos expediciones salidas de Haití y lideradas por Bolívar, el país proporcionó municiones, embarcaciones, soldados, recursos financieros, mosquetes, bayonetas y una imprenta portátil. Fue a partir de estas expediciones que, luego de 1816, el ejército libertador partió para extender al Caribe y a los Andes la lucha definitiva por la independencia de América Latina.

Aunque sirvió de apoyo, de modelo y de inspiración, nada de eso bastó para evitar la negación posterior de Haití. A pesar de que se concretó momentáneamente en los primeros territorios liberados, Bolívar no cumplió la promesa de abolir la esclavitud que le había hecho a Petión a cambio del apoyo financiero y mili-

Bolívar llevaría consigo toda la vida la experiencia y los aprendizajes de Haití.

tar. Paulatinamente, el fin del cautiverio negro perdió centralidad en su programa político. Los afrolatinos todavía deberían esperar algunas décadas para arrancar con sus propias manos el derecho a la libertad. Durante los años siguientes, al Libertador lo poseería el miedo creciente a la «pardocracia» —la repetición de los eventos de la Revolución haitiana— lo cual lo llevó a involucrarse en la ejecución de dos gigantes próceres negros, Manuel Piar y José Prudencio Padilla. Finalmente, Bolívar se manifestó en contra de la presencia de Haití en el Congreso de Panamá, realizado en 1826, alegando que existían incompatibilidades culturales e históricas entre el país caribeño y los propósitos del evento.

Era solo el comienzo de una relación contradictoria de afirmación y silencio, dependencia y negación de Haití en América Latina.

Segundo acto: un programa político original

Para obtener reconocimiento diplomático, Haití se vio obligado, en 1825, a asumir una pesada deuda por la independencia. Luego de enviar contadores y actuarios a la isla para registrar todas las tierras (cultivables o no), los bienes físicos, el número de personas antes esclavizadas, las propiedades y los servicios, Francia impuso un tratado en condiciones estructuralmente desiguales, teñido por el aislamiento y la amenaza militar. El crédito para saldar la deuda solo podía provenir de bancos franceses y sería transferido directamente al tesoro del país europeo. La deuda principal recién fue cancelada en 1883. Las tasas, intereses y comisiones sobre los préstamos, todos exorbitantes y abusivos, fueron asumidos luego por



bancos estadounidenses a comienzos del siglo XX y saldados recién en 1947.

Como narra Karine de Souza Silva, para pagar lo adeudado, Haití tuvo que nacionalizar las deudas y reorientar bruscamente su política económica y su agricultura, que representaba casi el 70% de la renta obtenida del comercio exterior. Fue para garantizar el pago, como así también los intereses azucareros de la Sugar Company, que Estados Unidos ocupó Haití entre 1915 y 1934. En esa época, los estadounidenses pasaron a controlar el Tesoro Nacional y las instituciones aduaneras haitianas e impusieron una reforma constitucional que les permitió a los extranjeros volver a gozar de derechos de propiedad sobre la tierra. De esta forma, prácticamente un siglo después de la independencia, Haití estaba nuevamente en el centro de la política mundial.

En medio de las constantes protestas contra la ocupación estadounidense, surgió una original fuerza política e intelectual en el país. Durante toda la década de 1920, se gestaron colectivos y agrupamientos que buscaron resignificar la lucha en el país, articulando el antimperialismo con una propuesta teórica enraizada en la experiencia del campesinado negro haitiano. A inicios de los años 1930, ese nacionalismo popular se bifurcó en el «negrismo» y en el «comunismo indígena negro», forjado en la adaptación del marxismo a la realidad colonial y, especialmente, al caso de Haití. El mayor exponente de esa corriente fue Jacques Roumain. Para Yvés Dorestal, otro marxista haitiano, Roumain debería ser reconocido hoy, junto al perua-

no José Carlos Mariátegui, como uno de los fundadores del marxismo latinoamericano. Es más: debería ser reconocido como el primer gran teórico marxista negro, antes incluso que C. L. R. James y Eric Williams.

¿Por qué es fundamental para América Latina resistir a la negación de Haití y de Roumain? A partir de los enfoques de Vicente Romero y Jean-Jacques Cadet, es posible sistematizar esta cuestión en tres campos: teórico, estratégico y estético. Desde el punto de vista de la teoría, el haitiano considera que el marxismo es indispensable para comprender y actuar en los países poscoloniales, lo cual requiere un método basado en el descentramiento de Europa por medio de la experiencia local. Para estos fines, se necesita un espíritu que sea al mismo tiempo antidogmático, cosmopolita y capaz de identificarse con las mayorías subalternas, especialmente con las masas campesinas. De esta forma, en una especie de reducción sociológica al estilo del brasileño Guerreiro Ramos, es necesario confrontar las referencias universalizantes con su lugar de experimentación (en este caso, América Latina y el Caribe, particularmente Haití).

Roumain elaboró su estrategia revolucionaria en el marco de esta crítica del eurocentrismo. Anticipando el abordaje que Fanon adopta en *Los condenados de la tierra*, afirma que en los países poscoloniales los militantes deben otorgarle un rol central a las mayorías rurales (campesinos, negros e indígenas). Además, afirma la desconfianza frente al antimperialismo “para la tribuna” y el nacionalismo pautado en alian-

za con la alta burguesía local. En un diálogo crítico con la Internacional Comunista, presenta también reservas y matices frente al centralismo, debatiendo el modelo de organizaciones federadas, habitual entre las clases subalternas haitianas. De esta forma, defiende el trabajo de base en el pueblo —atento al problema rural y al racismo—, poniendo énfasis en la acción de las mujeres y en los encuentros en los hogares y en los ambientes familiares. Por último, la importancia que le da a la lucha campesina como táctica revolucionaria indica que la emancipación de la condición colonial pasa necesariamente por la soberanía alimentaria y territorial.

Desde el punto de vista estético, Roumain, que fue fundador de la literatura haitiana moderna, defiende el amor por el mundo rural, la lengua, la cultura y los hábitos criollos. En este apego a la tierra y a su pueblo, hay un patriotismo humanista resistente y silencioso que puede servir como instrumento ético para un comunismo de bases amefricanas. Los paisajes, los sentimientos y el ambiente sociocultural de ese devenir-porvenir se concretaron en novelas como *La Montagne Ensorcelée* y *Gouverneurs de la rosée*, punto máximo de su creación literaria.

De esta forma, quitar el velo de silencio que pesa sobre Roumain constituye una etapa necesaria en la genealogía de la praxis y de la teoría revolucionaria del continente.

Tercer acto: ¿qué política Sur-Sur?

Luego de la desocupación estadounidense de 1934, Haití vivió uno de los momentos más esperanzadores de su historia, en el marco del cual nacionalistas y marxistas negros forjaron nuevas utopías y promesas de otro futuro para la nación. El año 1957 representó, simultáneamente, el clímax y el inicio de la decadencia de aquella época. Durante ese año, Daniel Fignolé, gran líder del Movimiento de Trabajadores Campesinos conocido como el Rodillo a causa de las multitudes que movilizaba, venció en las elecciones y llegó a la presidencia de la República. Pero, en pocas semanas, la hermosa fiesta de la victoria en el Palacio Nacional se transformó en pesadilla. Con el consentimiento y la supervisión de Estados Unidos, grupos

armados forzaron la renuncia de Fignolé. Algunos meses después, y producto de elecciones fraudulentas, llegó al poder François Duvalier. Papa y Baby Doc (François y Jean-Claude Duvalier) gobernaron el país durante veintinueve años en el marco de una de las dictaduras más brutales del continente.

Desde 1986, con el fin del período Duvalier, la soberanía haitiana pasaría a ser relativizada y negada por otro paradigma: la presencia casi ininterrumpida de las Naciones Unidas a través de siete intervenciones militares entre 1993 y 2020. La MINUSTAH, que fue la mayor entre ellas, es de especial relevancia para los encuentros y desencuentros de Haití con el resto de América Latina.

Estamos en el año 2004. En el país caribeño, Jean-Bertrand Aristide es forzado por EE. UU. a abandonar el poder, secuestrado y llevado a la República Centroafricana. En abril, frente a las protestas populares, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas describe la situación de Haití como una «amenaza a la paz y la seguridad internacionales y a la estabilidad del Caribe» y aprueba la Resolución 1542, creando la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. La justificación era el mantenimiento de un «ambiente pacífico, constitucional, seguro y estable».

Frente a esta situación, América Latina, que vivía el inicio de su ola progresista desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, desempeñó roles distintos y contradictorios. En septiembre de 2004 desembarcaron en Haití las tropas de la MINUSTAH, lideradas por el general Augusto Heleno, de Brasil, país que terminó comandando las «fuerzas de la paz» internacionales en la isla hasta el año 2017. Como describe Miguel Borba de Sá, afirmando un nuevo tipo de intervención «humanitaria», de «maneras brasileras», basada en la supuesta cercanía entre Brasil y Haití (cultura, creatividad, herencia africana, buen humor, humildad, vocación pacífica y solidaria, empatía), los gobiernos petistas buscaron construir legitimidad y una imagen de «éxito» de la operación.

Pero la realidad fue bien distinta. Bajo la tutela y la supervisión atenta de Estados Unidos, Brasil tomó a su cargo la responsabilidad de no permitir el retorno de Aristide al poder. Además, la Misión dejó como legado la producción de nuevos conflictos: más de 30 000 muertos como consecuencia de la epidemia

de cólera (enfermedad erradicada en el país durante el siglo XIX y traída nuevamente por las tropas de la ONU), cerca de 2000 denuncias de violaciones y abuso sexual (300 de las cuales involucraban a menores), la contaminación del río Artibonito (principal recurso hídrico haitiano) y una escalada de violencia interminable. La masacre de Cité Soleil, sucedida en 2006 y dirigida por Augusto Heleno, fue el preanuncio del terror que se vivió durante los años siguientes.

Por otro lado, desde marzo de 2004, el gobierno venezolano se opuso a la intervención internacional en Haití. Luego de ofrecer asilo a Aristide y no reconocer al gobierno instaurado por las Naciones Unidas, Chávez pasó los años sucesivos denunciando las violaciones y confrontando las posiciones de otros países de la región tales como Brasil, Chile, Argentina y Bolivia, todos los cuales tenían tropas desplegadas en el país caribeño. Al defender sus posiciones, el presidente venezolano solía recordar la responsabilidad que toda América Latina tenía para con la libertad de Haití.

A partir de 2006, con la llegada al poder de René Préval, antiguo aliado de Aristide, se abrió una ventana para nuevas relaciones políticas. A pesar de la presión de Washington, Préval se acercó a Chávez. Gracias a esta alianza, Haití se convirtió en observador permanente de los encuentros del ALBA, se benefició del proyecto Petrocaribe (que le garantizó provisión de petróleo e infraestructura a precios por debajo del costo real) y fue condonada la deuda por combustibles que había contraído con Venezuela. Estas relaciones se volverían más inestables, distorsionadas y distantes a partir de 2011, luego de que Michel Martelly llegó a la presidencia (en el marco de unas controvertidas elecciones realizadas bajo la intervención de la OEA) y, más recientemente, con el bloqueo impuesto por Trump a Caracas, que dificultó las operaciones de Venezuela en el mar del Caribe.

En Brasil, el rebote de la MINUSTAH no tardó en llegar. Esta sirvió de laboratorio para el perfeccionamiento de las técnicas de violencia y control poblacional en las periferias brasileras, como las Unidades de Policía Pacificadora, las intervenciones militares, el uso de material de guerra (*caveirões*, helicópteros, tanques, fusiles y granadas) y el disciplinamiento de las tropas. Todo esto se hizo bajo el lema humanitario del «restablecimiento de la paz». El 60% de los soldados que participaron de la megaoperación que se realizó en el Complejo de Alemão en 2010, en el marco

Jacques Roumain debería ser reconocido hoy, junto al peruano José Carlos Mariátegui, como uno de los fundadores del marxismo latinoamericano.

de la cual se filmó el exterminio de jóvenes para que lo viera todo Brasil, había pasado por Haití.

Pero todavía hay más: la Misión volvió a empoderar a los militares, marginados desde el final de la dictadura, que volvieron a organizarse para intervenir en la política brasileña a partir del denominado Club de Haití. En el actual gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, además del gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, conducido por Heleno, cuatro ministerios, cuatro secretarías estratégicas y el cargo de asesor especial del presidente en el Supremo Tribunal Federal son ocupados por oficiales que estuvieron en Haití. Es decir que la presencia inmoral de Brasil en la isla caribeña sirvió para reorganizar de manera silenciosa el ala militar que convalidó el golpe de 2016 y que sostiene al actual gobierno neocolonial de Bolsonaro, absolutamente sumiso frente a las órdenes de Washington. Es el veneno de una cobra traicionera a la que la izquierda le permitió crecer de nuevo.

La Revolución haitiana, Roumain y MINUSTAH. Tres siglos distintos de negaciones brutales. Tres hechos que iluminan, también, el lugar constitutivo de Haití en la formación de América Latina. Están ahí para indicar que sigue siendo urgente y necesario vincularla a las narrativas y a la praxis de la liberación latinoamericana. El circuito integrado de estos distintos períodos sugiere que debemos volver a mapear los acontecimientos y los papeles del imperialismo y de la resistencia en el continente. Sobre todo porque, como señaló el intelectual haitiano Michel Rolph-Trouillot, el silencio sobre el pasado dice menos sobre la historia que puede ser narrada que sobre el futuro que puede ser construido. ●

30/12/2020

Legalización del aborto en Argentina.



América Latina va a ser toda **feminista**.



 nuestro norte es el sur

 democracia
 feminismos
 sindicalismo
 ecosocialismo



J

**Soy de izquierda,
todo de izquierda:
de pies, de fe, de cabeza.**

DIEGO ARMANDO MARADONA, 1986

ISSN: 2718- 6466



7 798362 370017 >